

BOLETIN OFICIAL

DE LA REPUBLICA ARGENTINA

BUENOS AIRES, MIERCOLES 27 DE OCTUBRE DE 1993

AÑO CI

\$ 0,30

Nº 27.752

- 2^a**
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. CONTRATOS SOBRE PERSONAS JURIDICAS | 4. PARTIDOS POLITICOS |
| 2. CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES | 5. INFORMACION Y CULTURA |
| 3. EDICTOS JUDICIALES | |

MINISTERIO DE JUSTICIA

DR. JORGE L. MAIORANO
MINISTRO

SECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

DR. JOSE A. PRADELLI
SECRETARIO

DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

DR. RUBEN A. SOSA
DIRECTOR NACIONAL

DIRECCION NACIONAL
TeleFax 322-3982

DEPTO. EDITORIAL Tel. 322-4009

INFORMES LEGISLATIVOS
Tel. 322-3788

SUSCRIPCIONES Tel. 322-4056

Domicilio legal: Suipacha 767
1008 - Capital Federal

Registro Nacional
de la Propiedad Intelectual
Nº 292.024

1. Contratos sobre personas jurídicas



1.1 SOCIEDADES ANONIMAS

ADMINISTRADORA SANITARIA

SOCIEDAD ANONIMA

Edicto publicado el 14 de octubre de 1993, recibo Nº 0037-00034302. Edicto Complementario: según Escritura Nº 33 del 22/10/93. Ante la Escribana Gladys Colman Lerner de Yacubsohn, al folio 76 del Registro Nº 1091 de la Capital Federal, se designa Director Suplente, con aceptación del cargo por el plazo de tres ejercicios al señor Héctor Eduardo Barrio.

La Escribana
Nº 64.735

ALL HOME

SOCIEDAD ANONIMA

Constitución: 1) Héctor Virgilio Borriero, 53 años, LE 4.359.897, Fray Justo Sarmiento 2730, Olivos, B. Aires; y Alfredo Francisco Mazzei, 59 años, LE. 4.143.098, Av. Libertador 948, Vicente López, B. Aires; ambos argentinos, casados, comerciantes. 2) Escrit. Nº 407 del 21.10.93. 3) "ALL HOME S.A.". 4) Viamonte 682, 1º "B", Cap. Federal. 5) Tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada en cualquier forma a terceros, dentro o fuera del país, las siguientes actividades: Comerciales: La compra, venta, permuta, importación, exportación, consignación, envasamiento, almacenaje, fraccionamiento, distribución e intermediación de toda clase de bienes muebles, materias primas, materiales, mercaderías y productos elaborados y semielaborados de toda índole y procedencia. La explotación de marcas, patentes, métodos, fórmulas, licencias, derechos, tecnologías, "know-how" y modelos y diseños comerciales e industriales nacionales y/o extranjeros. Representaciones y mandatos: El ejercicio de toda clase de representaciones comerciales nacionales y de firmas extranjeras; la explotación de concesiones y la realización de comisiones, agencias, consignaciones, intermediaciones, gestiones de negocios y mandatos; la administración de toda clase de bienes, capitales, empresas, propiedades y patrimonios y la actuación como agente financiero, todo ello con la mayor amplitud y con las solas limitaciones que establezcan las leyes y reglamentaciones. Financieras y de inversión: El aporte de capitales a personas, empresas o sociedades por acciones constituidas o a constituirse del país y del extranjero, para la concertación de operaciones realizadas o a realizarse; el otorgamiento de préstamos a interés y financiaciones y créditos a corto y a largo plazo, con cualesquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas; así como la compra, venta y negociación de títulos, acciones, bonos, letras de tesorería y toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito, públicos o privados, con cualesquiera de los sistemas y modalidades creados o a crearse; y la colocación de capitales en todo tipo de operaciones financieras, con exclusión de todas aquellas comprendidas en la "Ley de Entidades Financieras" o que requieran el concurso público. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 6) 99 años. 7) \$ 12.000. 8) 1 a 5, tres ejercicios. Presidente: Alfredo Francisco Mazzei; Suplente: Héctor Virgilio Borriero. Prescinde de Sindicatura. 9) Presidente y vicepresidente indistintamente. 10) 31 de mayo.

El Apoderado
Nº 64.691

ALL NICE

SOCIEDAD ANONIMA

1) Socios: Luis María Ripetta, argentino, casado, nacido el 4-9-48, LE 5.530.135, médico y Alicia María Curmona, argentina, casada, nacida el 27-7-56, DNI 12.732.504, comerciante, ambos domiciliados en Yerbal 1833, Capital Federal. 2) 13-10-93. 3) ALL NICE S.A. 4) Av. Rivadavia 6721, 2º C, Capital Federal. 5) La realización por sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros de las siguientes actividades: 1) Explotación de actividades relacionadas con sanatorios y sus servicios clínicos, quirúrgi-

cos especialmente de cirugía plástica y anexos; asistencia integral y/o parcial de enfermos; explotación de casas y/o clínicas de descanso, clínicas de cirugía plástica, de clínicas dietéticas con o sin pensión; consultorios internos y/o externos, abarcando todas las especialidades, servicios y actividades que se relacionan directa o indirectamente con el arte de curar; la investigación científica y experimental que tenga por fin el progreso de las ciencias médicas, proporcionando a los médicos de las distintas especialidades un centro de trabajo y estudio dotado de todos los elementos modernos de investigación y diagnóstico; enseñanza y perfeccionamiento de las ciencias médicas, como divulgación social por medio de conferencias, ateneos o congresos, de acuerdo con las bases y reglamentos que el directorio establezca, instalar sanatorios, dirigirlos o administrarlos, a cuyo fin podrá adquirir, construir, arrendar o hacer convenios con los existentes; hacer contratos con otras entidades médicas en relación con los fines de la sociedad. 2) Construcción, compraventa y administración de inmuebles en general, ya sean urbanos o rurales, con fines de explotación, renta, fraccionamiento o enajenación, inclusive por el Régimen de Propiedad Horizontal. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no estén prohibidos por las Leyes o por este Estatuto. 6) 99 años. 7) Capital 12.000 \$. 8) Presidente: Luis María Ripetta, Vicepresidente: Alicia María Curmona, Director Suplente: Carlos Enrique Gallos Candolo. 9) Sin Sindicatura. 10) 30 de junio.

El Contador
Nº 64.682

ALTA TECNOLOGIA EN ALERGIA E INMUNOLOGIA

SOCIEDAD ANONIMA

1) Alejandra Elena Falco, divorciada, 5-8-58, D.N.I. 12.082.452, Azcuénaga 382 5º "C" Capital; Humberto Julián Barata, casado, 9-1-52, D.N.I. 10.226.466, Juan B. Justo 3731 Ciudadela y Jorge Fernando Maspero, casado, 8-9-60, D.N.I. 14.011.552, Avellaneda 4148 Olivos. Todos argentinos y empresarios. 2) 1-9-93. 3) ALTA TECNOLOGIA EN ALERGIA E INMUNOLOGIA S.A. 4) José E. Uriburu 281 P. 4 "I". 5) Asistencia médica de enfermos, diagnósticos, tratamientos, laboratorio, investigación, docencia y toda otra actividad vinculada con el ejercicio de la medicina, excluyendo todas las que para su ejercicio se requiera título habilitante. Representaciones, importaciones y exportaciones. 6) \$ 12.000.- 7) 99 años desde inscripción en R.P.C. 8) Administración: a cargo del Directorio entre 2 y 9 miembros por 3 años. Presidente: Alejandra Elena Falco; Vicepresidente: Humberto Julián Barata; y Vocal Suplente: Jorge Fernando Maspero. Fiscalización: se prescinde. 9) Presidente o Vicepresidente indistintamente. 10) 30/6 de cada año.

El Autorizado
Nº 35.370

ARGENBUSS

SOCIEDAD ANONIMA

Se hace saber que por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 15-10-93 se ha resuelto modificar el Artículo Primero del Estatuto

SUMARIO

	Pág.
1. CONTRATOS SOBRE PERSONAS JURIDICAS	
1.1 Sociedades Anónimas	1
1.2 Sociedades de Responsabilidad Limitada	8
1.3 Sociedades en Comandita por Acciones	12
2. CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES	
2.1 Convocatorias	
Nuevas	13
Anteriores	37
2.2 Transferencias	
Nuevas	15
Anteriores	46
2.3 Avisos Comerciales	
Nuevos	15
Anteriores	46
3. EDICTOS JUDICIALES	
3.1 Citaciones y notificaciones	
Nuevas	17
Anteriores	47
3.2 Concursos y quiebras	
Nuevos	17
Anteriores	49
3.3 Sucesiones	
Nuevas	19
Anteriores	53
3.4 Remates judiciales	
Nuevos	20
Anteriores	55
5. INFORMACION Y CULTURA	21

Social, adoptándose la denominación BUSS-CAR de ARGENTINA S. A.

El Autorizado
Nº 64.595

BACO

SOCIEDAD ANONIMA

Por esc. Nº 894 del 21/10/93, Carlos Alberto Matarrelli, de 52 años, casado, Contador Público, CI 4.624.222 PF, Av. Leandro N. Alem 1050 P. 8º "C" CF y Diego Ignacio Matarrelli, de 23 años, soltero, comerciante, DNI 21.538.469, Carlos Pellegrini 1347 P. 10º CF, ambos argentinos constituyeron "BACO S.A." con domicilio en Av. Leandro N. Alem 1050 P. 8º "C" C.F.

Objeto: "Tienen por objeto por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros desarrollar actividades de compra-venta, distribución, importación, exportación y elaboración de ropa interior, de vestir y sport; la explotación de concesiones, licencias, patentes de invención, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales, el ejercicio de representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos. También podrá conceder o tomar dinero en préstamo, con o sin garantías, hacer aportes de capitales a personas o sociedades, para la realización de operaciones financieras o comerciales, así como realizar la compra venta de títulos, acciones, debentures, valores mobiliarios y papeles de negocios, con exclusión de las operaciones previstas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera. Asimismo podrá dedicarse a la compra, venta y permuta, explotación, arrendamiento y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales. Urbanización, loteos, fraccionamiento y la realización de todas las operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes y reglamentaciones de la propiedad horizontal". Capital Social: El Capital Social es de \$ 16.000 representado por 16.000 acciones ordinarias, al portador con derecho a 1 voto c/u y de valor \$ 1 c/acción. Directorio: 1 a 5 titulares. Presidente: Carlos Alberto Matarrelli; Director Suplente: Diego Ignacio Matarrelli. Duración de los cargos: dos ejercicios. Representación legal: Presidente del Directorio o Vicepresidente en su caso. Cierre de ejercicio: 31 de Julio de cada año. Se prescinde de la Sindicatura.

La Apoderada
Nº 64.696

BAXEN**SOCIEDAD ANONIMA**

Comunica que por asamblea extraordinaria unánime del 10/6/93 y escritura pública del 22/6/93 se resolvió: cambiar la denominación social, Artículo Primero: la sociedad originariamente denominada "BAXEN S.A." continúa su giro bajo la denominación de "BAKSA S.A.". Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, ampliación del objeto social, Artículo Tercero: Tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: Financiera: Mediante aportes e inversiones de capitales a particulares, empresas o sociedades, para negocios realizados o a realizarse, constitución y transferencia de préstamos con o sin hipotecas y demás derechos reales, compraventa de títulos y acciones y otros valores mobiliarios y otorgamiento de créditos en general, ya sea en forma de prenda o cualquiera otra permitida por la ley, con excepción de las operaciones comprendidas en las leyes de entidades financieras y toda otra por la que se requiera el concurso público. Mandataria: Mediante la realización de toda clase de operaciones sobre representaciones, consignaciones, comisiones y mandatos vinculados con el objeto social. Importadora y Exportadora: Mediante la importación y exportación de mercaderías en general. Industrial y Comercial: Mediante la industrialización, comercialización, fabricación, compra, venta, importación, exportación, distribución, consignación, comisión y representación al por mayor y menor de materias primas, productos, subproductos, sus partes, repuestos, accesorios y componentes relacionados con la construcción de ramales y gasoductos, plantas reguladoras y compresoras de gas, redes de media presión, instalaciones completas de carga de gas natural comprimido y licuado, instalaciones industriales, formación y administración de consorcios de inversores en gas natural comprimido; La Ejecución y administración de construcciones y obras en general; La construcción de edificios, reparaciones en general, obras viales de todo tipo y pavimentaciones, obras sanitarias, redes de distribución de gas, agua, electricidad, cloacas, gasoductos, oleoductos, construcciones termoelectromecánicas, diques y todo tipo de obras de carácter público, privado o mixto. Consultoría: Asesoramiento, anteproyectos, proyectos de ingeniería, arquitectura, inmobiliarias, de comunicaciones, deportivas, agropecuarias, forestales, económicas, financieras, turísticas y de prensa, localizaciones industriales y comerciales, desarrollo urbano, planeamientos generales, parciales o globales de todos los rubros indicados o conexos que serán desarrollados y dictados por profesionales con título habilitante conforme a la ley vigente. Provisión de servicios, obras y asesoramiento a entidades públicas: se comprende al Estado Argentino, las Provincias y Municipalidades sus reparticiones, organismos autárquicos, entes y empresas de los estados, Fuerzas Armadas, así como también sus similares del exterior. Ante todos ellos podrá constituirse en proveedora permanente o accidental, inscribiéndose en sus registros y

participando en licitaciones y concursos, aumentar el capital en 7.200.-, de \$ 12.000.- a \$ 19.200.-, suscriptas e integradas en efectivo por los accionistas en proporción a sus tenencias Artículo Cuarto: Capital 19.200 Pesos, dividido en acciones ordinarias al portador, de \$ 1.- y 1 voto c/u. Se reformaron los artículos 1, 3 y 4 del estatuto.

El Escribano
Nº 64.720

BL DE INVERSIONES**SOCIEDAD ANONIMA**

Hace saber por un día, de acuerdo al art. 10 de la Ley 19.550, que la sociedad del epigrafe por Acta de Asamblea Gnal. Extraordinaria del 20/10/93, terminada el 22/10/93, luego de haber pasado a un cuarto intermedio, resolvió Aumentar su Capital Social, llevándolo a la suma de \$ 110.000.000, cambió su denominación social por la de "Bl. S.A." y reformó integralmente su Estatuto Social. Objeto: La sociedad tendrá por objeto exclusivo realizar cualquier clase de actividades financieras y de inversión, excepto aquellas comprendidas en las disposiciones del Artículo 1 de la ley Nº 21.526. A los efectos de realizar su objeto la sociedad tendrá plena capacidad para adquirir toda clase de derechos y contraer toda clase de obligaciones; llevó el número de sus Directores a nueve miembros titulares con igual o menor número de suplentes, por un año, de los cuales 4 serán designados por los accionistas Clase A y 5 por los Accionistas Clase B. Sindico Titular y Suplente, también por un ejercicio; Representación legal a cargo del Presidente o al Vicepresidente en su caso; Cierre del Ejercicio Social 30 de Junio de cada año y su Plazo de duración es el original o sea hasta 20 de junio de 2075.

El Apoderado
Nº 64.599

BRANDSEN AUTOMOTORES**SOCIEDAD ANONIMA**

Por escritura del 30/9/93 y Asamblea 15/6/93 "BRANDSEN AUTOMOTORES S.A." modificó el Art. 1º, trasladando su domicilio social de Brandsen, Pcia. Buenos Aires a la Capital Federal. Sede social: Tucumán 1425, P. 4º, Dpto. H. Cap. Fed.

El Autorizado
Nº 64.570

CALIBUR**SOCIEDAD ANONIMA**

Constitución: Escritura 15.7.93. Socios Directores: Presidente: Graciela Mirta Rotta, argentina, soltera, empleada, 38, DNI 11.450.349, Yatay 63 CF; Suplente: Delfina Rosa Valdiviezo, argentina, casada, empleada, 53, DNI 7.578.175, Doblas 405 CF; Suplente: Graciela Mirta Rotta argentina, soltera, empleada, 38, DNI 11.450.349, Yatay 63 CF; Compraventa, representación alimentos, bebidas, químicos, agroquímicos, fertilizante, plástico, ferretería, pinturería, madera, cuero, textil, Matanza ganado, pesca. Frigoríficos. Fabricación, envasado. Explotación agroganadera, forestalfrutihortícola. Mandatos, representaciones, servicios, arrendamientos, transportes, consignaciones. Construcción edificios, estructuras todo tipo. Compraventa, permuta, alquiler, administración inmuebles. Aportes, inversiones, créditos, acciones, títulos, excluido lo previsto en ley 21.526. Importación Exportación de productos en estado natural o manufacturado. Capital: \$ 12.000,00. Socios suscriben por mitades. Sin Sindico. Cierre: 31.5. Duración: 99 años. Directorio: 2 ejercicios, Lima 131.

El Abogado
Nº 35.397

CAMINO DEL ABRA S. A. C. V.**SOCIEDAD ANONIMA**

Aumento de Capital

Comunica que por Resolución de la Asamblea General Extraordinaria del día 2 de agosto de 1993 se procedió a aumentar el capital social en \$ 1.260.000, llevándolo de \$ 60.000 a \$ 1.320.000; resultando por consiguiente modificado en art. 4º de los estatutos societarios que queda redactado de la siguiente forma: "El Capital Social es de \$ 1.320.000 (pesos un millón trescientos veinte mil) representado por 13.200 (trece mil doscientas) acciones nomina-

tivas no endosables, de \$ 100 (pesos cien) valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, y divididas en tres clases: "A", "B" y "C", con idénticos derechos y obligaciones y con igual cantidad de acciones por clase, esto es 4.400 acciones clase "A", 4.400 acciones clase "B" y 4.400 acciones clase "C". El Directorio procedió a la emisión de 12.600 acciones nominativas no endosables, de \$ 100 valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción, divididas en tres clases, 4.200 clase "A", 4.200 clase "B" y 4.200 clase "C".

El Autorizado
Nº 64.712

CANOS**SOCIEDAD ANONIMA**

1) Prescinde Sindicatura. 2) Modifica art. 11, opta art. 284 Última parte Ley 19.550. 3) Modifica Art. 16, liquidación por el Directorio. 4) Modifica Art. 4 por art. 188 Ley 19.550. 5) Renuncia Síndico Titular Dr. Edgardo Pedro de Almeida y Suplente Dr. Mario Pedro D'Onofrio. 6) Nombra Director Suplente Ricardo Abel Suescum, mandato hasta 20-4-94. 7) Asamblea General Extraordinaria Unánime del 21-10-93. La Abogada
Nº 35.418

C C W**SOCIEDAD ANONIMA**

Por escritura Nº 84 del 7/10/93, ante la Esc. Adela M. García, se constituyó una Sociedad Anónima en Jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, Avenida Rivadavia 1615 Piso 2 Dpto. 67, de acuerdo a los siguientes accionistas: Sin Fu Wong, soltero, nacido el 31 de mayo de 1952, ingles, comerciante, D.N.I. 92.011.568, domiciliado en Ecuador 1353 Planta Baja Departamento "C", Capital Federal y Vicente Chen, argentino, soltero, comerciante, nacido el 1 de diciembre de 1957, D.N.I. 18.762.897, domiciliado en Teniente Bcnjamin Matienzo 1563, Capital Federal. Denominación: "C C W S.A." Plazo: 99 años. Objeto: A. Comercial: compra, venta, importación, exportación, permuta, representación, intermediación, mandato, consignación, concesión, comisión, distribución, depósito, almacenaje, fraccionamiento y/o transporte de: productos alimenticios en general, ya sean de origen animal, vegetal o mineral, sus derivados, afines, y anexos, de la caza y de la pesca, realización de actividades pesqueras; artículos para la construcción, maderas en general; artículos de cuero, cuerina, nylon, lona, género y sus derivados; artículos de juguetería, audio, adornos, regalos, bijoutería, fantasías, electrodomésticos, sus repuestos y accesorios, además instrumental y sus accesorios; implementos, materiales, herramientas, maquinarias y útiles relacionados con el objeto social. B. Inversora-Financiera: Mediante préstamos, con o sin garantía, a corto o largo plazo, aportes e inversiones de capital a empresas o sociedades, constituidas o a constituirse, para negocios realizados o a realizarse; constitución y transferencias de hipotecas y demás demás derechos reales, compra y venta de títulos, acciones u otros valores mobiliarios y otorgar créditos en general, ya sea en forma de descuentos de prenda o cualquier otra de las permitidas por las leyes. Se excluyen las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso público. C. Importadora - Exportadora: Mediante la importación y exportación de mercaderías en general, maquinarias, útiles, herramientas, frutos y productos en general. Capital: \$ 12.000.- Administración: entre 1 a 6 por un ejercicio. Presidente: Sin Fu Wong. Director Suplente: Vicente Chen. Cierre del ejercicio: el 31 de diciembre de cada año. Prescinde de la sindicatura.

La Autorizada
Nº 64.714

CILA**SOCIEDAD ANONIMA**

Se hace saber: Constitución: 1) Socios: Vladimir Solovarov, casado, ruso, comerciante, nacido el 18/12/60, pasaporte ruso 41 Nº 0876344. Vassili Kouznetzov, casado, ruso, comerciante, nacido el 7/8/71, pasaporte ruso 41 Nº 0882663. Alejandro Iwaszewicz, soltero, argentino, comerciante, nacido el 13/9/68, D.N.I. 20.470.059, todos los comparecientes domiciliados en la calle Brasil 315, Capital Federal. 2) Constitución: Escritura 236 del 20/10/93. 3)

Denominación: CILA S.A. 4) Domicilio: Viamonte 867 piso 7, oficina 708, Capital Federal. 5) Objeto: A) Importación y Exportación: toda clase de bienes muebles, mercaderías, materias primas, granos y subproductos, carnes, pescados, mariscos y demás productos elaborados, semi-elaborados y frutos del país, permitidos por la legislación vigente. B) Comercial: mediante la compra, venta, permuta, comisión, consignación, representación, distribución y comercialización, de los productos mencionados en el rubro A). C) Financiera: mediante el aporte de capitales a empresas constituidas o a constituirse o a particulares, para negocios realizados o a realizarse. Financiación de negocios en general, compra, venta y permuta de títulos, acciones y otros valores mobiliarios públicos o privados, la constitución de hipotecas, prendas y cualquier otro derecho real. Se excluyen las operaciones comprendidas en la ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso público. D) Mandataria: mediante todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones; intermediación y promoción; organización y atención industrial; comercial y técnica; selección y contratación de personal administrativo, técnico, industria; investigaciones e informes; estudios de mercado y desarrollo de programas de promoción. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar toda clase de actos jurídicos que no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto. 6) Capital Social: \$ 12.000. 7) Directorio: Presidente: Vassili Kouznetzov. Vicepresidente: Alejandro Iwaszewicz. Director suplente: Myrta Mabel Lourdes Dorado. Se prescinde de la sindicatura. 8) Representación: presidente o vicepresidente indistintamente. 9) Duración: 99 años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. 10) 30 de noviembre de cada año.

El Autorizado
Nº 64.732

CIRCUITO OBLIGATORIO S.A.C.I.F.I.E.I.**SOCIEDAD ANONIMA**

Por Esc. Nº 490 del 30-8-93 se constituyó la sociedad: 1) CIRCUITO OBLIGATORIO S.A.C.I.F.I.E.I. 2) Av. Las Heras 2925 13º P Dto. 65 -Cap. Fed.3) 99 años. 4) Juan José Villa, argentino, 13-8-43, soltero, comerciante, L.E. Nº 4.431.021, Mayor Olivero 97 Banfield, Pcia. Bs. As.; Susana Elida Muscolo, argentina, casada, comerciante, 1-2-40, D.N.I. Nº 3.949.112, Santiago del Estero 2889 Lanús, Pcia. Bs. As. y Fernando Adrian Ponce, argentino, casado, comerciante, 25-5-59, D.N.I. Nº 13.138.205, Salcedo 2946-Cap. Fed. 5) Objeto: Comercial: Mediante la compra, venta negociación, consignación, representación, distribución, importación y exportación de calzado, prendas de vestir, y de la indumentaria, fibras, tejidos, hilados, y marroquinería, camisería, botonera y las materias primas que lo componen, que podrá realizar como mayorista o minorista. Industrial: Mediante la fabricación, industrialización, transformación y elaboración, de productos y materias primas relacionadas con la actividad comercial. Mandatos y servicios: La ejecución de toda clase de mandatos, comisiones, gestiones de negocios y administración de bienes en general y la prestación de servicios, organización y asesoramiento industrial, comercial y técnico, con exclusión de todo tipo de asesoramiento que en virtud de la materia esté reservado a profesionales con título habilitante. 6) Capital Social: \$ 12.000.- 7) La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de 1 y un máximo de 5 con mandato por tres ejercicios, pudiendo la asamblea designar suplentes en igual o menor número que los titulares. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio y en su ausencia al Vicepresidente. 8) La sociedad prescinde de la sindicatura. 9) 31-7 de cada año. 10) Directorio: Presidente: Juan José Villa. Vicepresidente: Susana Elida Muscolo. Director Suplente: Fernando Adrián Ponce.

El Autorizado
Nº 64.650

COM-EX-AR TRADING**SOCIEDAD ANONIMA**

Se hace saber que en el edicto recibo 54334 del 16/7/93 publicado el 21/7/93, de Constitución de COM-EX-AR TRADING S.A. debe leerse

que el capital será de \$ 12.000 en acciones ordinarias, al portador de \$ 10 y 1 voto.

El Escribano
N° 64.699

COMPANIA VALLETANA DE COMUNICACIONES

SOCIEDAD ANONIMA

Por Esc. N° 290 del 21-10-93 ante el Esc. Miguel A. Saravi (h.), Reg. 38 Cap. Fed., se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 1 del 18-10-93, por la que se resolvió aumentar el capital social a \$ 5.640.000, emitir las acciones pertinentes y consecuentemente modificar el Art. 4° del Estatuto Social, de la siguiente manera: "Artículo Cuarto: El capital social se fija en la suma de \$ 5.640.000 representado por cinco millones seiscientos cuarenta mil acciones de un peso valor nominal cada una". Y designar Síndico Titular a Nilda Apcarian y Síndico Suplente a Alberto Pablo Riccheri. Buenos Aires, 22 de octubre de 1993.

El Escribano
N° 64.698

CONTENEDORES ARGENTINOS

SOCIEDAD ANONIMA

Se hace saber por un día el siguiente edicto: 1) Modificaciones de Estatutos. Cambio de Denominación. Cambio de Jurisdicción: Asamblea General Extraordinaria de 27.5.1993. Escritura N° 152 del 29.9.1993 pasada ante el Escribano Patricio C. Pastor. Registro N° 1501. 2) Denominación: CONTENEDORES ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA. 3) Domicilio: Avda. Leandro N. Alem 734 - 9° piso - Capital Federal. 4) Duración: cuarenta años contados desde el 2-6-1988. 5) Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero, a las siguientes actividades: a) Industrial: Transformación, producción y elaboración de productos termoplásticos, subproductos y mercaderías relativas a la industria plástica en general, incluyendo la fabricación de contenedores plásticos por inyección. b) Comercial: Importación, exportación, adquisición, enajenación, comisión, mandato, consignación y distribución de productos termoplásticos, mercaderías, productos, maquinarias, repuestos y materias primas relacionadas con la industria plástica; equipamiento e instalación de plantas industriales, y puesta en marcha de las mismas; explotación de patentes de invención, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales, licitaciones locales e internacionales. c) Servicios: Organización, asesoramiento y atención industrial, administrativa, publicitaria, comercial, financiera, económica, técnica y profesional en general. Queda excluido todo asesoramiento que en virtud de la materia haya sido reservado a profesionales con título habilitante en forma personal y según las respectivas reglamentaciones. d) Financiera: Podrá realizar aportes de capital, financieras o créditos en general, con o sin garantía, compra, venta y negociación de títulos, acciones, toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito. Se excluyen expresamente las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra por la que se requiera el concurso público. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto, pudiendo emitir, dentro o fuera de la República Argentina, debentures, títulos, obligaciones, bonos o cualquier instrumento de deuda negociable o no en las Bolsas y Mercados de Valores. 6) Capital: \$ 2.844.114.-, representado por acciones ordinarias, nominativas no endosables, de \$ 1.- valor nominal cada una, con derecho a 1 voto por acción, distribuidas en seis categorías "A", "B", "C", "D", "E" y "F". 7) Cierre del Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. 8) Administración y Representación: El Directorio, integrado por seis miembros titulares y seis suplentes con mandato por 1 ejercicio. 9) Representación legal: Presidente o Vicepresidente del Directorio, en su caso. 10) Fiscalización: A cargo de un Síndico Titular. La Asamblea designará Síndico Suplente. Mandato: 1 ejercicio. 11) Deliberaciones: Asamblea, el quórum y las mayorías se rigen por los arts. 237 y 238 de la Ley 19.550; además en temas especiales se prevén mayorías con 4 categorías de accionistas y porcentajes no menor al 60 % de acciones con derecho a voto. 12) Liquidación: A cargo del Directorio o de una Comisión liquidadora designada por Asamblea, en ambos casos bajo vigi-

lancia del Síndico. 13) Distribución de Utilidades: 5 % hasta alcanzar el 20 % del Capital, al Fondo de Reserva Legal; remuneración del Directorio y Sindicatura: hasta el 10 % en concepto de gratificación extraordinaria a los miembros del Directorio que integren el Comité Ejecutivo y a todo o parte del personal jerárquico; dividiendo a las acciones preferidas, con prioridad los acumulativos impagos; el saldo tendrá el destino que decida la Asamblea. 14) Restricciones al régimen de cesión y transferencia de las acciones: previstas en los Estatutos y transcritas en los respectivos títulos representativos.

El Presidente
N° 64.692

CROWN MUSTANG

SOCIEDAD ANONIMA

Por instrumento del 30-9-93 aumentó el capital a \$ 465.500, modificando el art. 4° del estatuto.

El Autorizado
N° 35.404

DARNENT

SOCIEDAD ANONIMA

1) DARNENT S.A. 2) Antonieta Pessino, 70 años, CI 3.977.116 y Alberto Ramón Zeballos, 76 años, LE 1.231.822, domiciliados en Doblas 160, Capital, argentinos, casados, comerciantes. 3) 18/10/93. 4) Esmeralda 561, Capital. 5) Comercial: La compra venta, conservación, refrigeración y abastecimiento de carnes, y/o subproductos y/o derivados, granos y productos fruto hortícolas, avícolas, vitivinícolas y agropecuarios. Explotación de frigoríficos y mataderos. Importación y Exportación. El ejercicio de mandatos, representaciones y consignaciones. Industrial: La preparación y transformación, así como la industrialización de carnes y/o subproductos y/o derivados, granos y productos fruto hortícolas y agropecuarios. Agropecuaria: Explotación por sí o por terceros en establecimientos rurales, agrícola ganaderos. Inmobiliaria y Constructora: Mediante la realización de operaciones inmobiliarias y la ejecución de obras de ingeniería y arquitectura, públicas o privadas. Las actividades que en virtud de la materia hayan sido reservadas a profesionales con título habilitante serán realizadas por medio de éstos. 6) 99 años. 7) \$ 12.000 en acciones ordinarias, al portador de \$ 1 y 5 votos. 8) Directorio de 1 a 10 por 3 años. Prescindirá de sindicatura. Presidente: Antonieta Pessino. Suplente: Alberto Ramón Zeballos. 9) Presidente o Vicepresidente indistintamente. 10) 30/9 de c/año.

El Escribano
N° 64.693

DELAMAIN

SOCIEDAD ANONIMA

1) DELAMAIN S.A. 2) Oscar Andrés Salto, DNI 5.238.140, 58 años y Nélida Beatriz Cuello, 36 años, DNI 10.093.140, domiciliados en Pedro Goyena 1224, Capital, argentinos, casados, comerciantes. 3) 21/10/93. 4) Esmeralda 561, Capital. 5) Comercial: La compra venta, conservación, refrigeración y abastecimiento de carnes, cueros, lanas, lácteos, granos, cereales y producto fruto hortícolas, avícolas y agropecuarios. Importación y Exportación. El ejercicio de mandatos, representaciones, comisiones y consignaciones. Industrial: La preparación y transformación, así como la industrialización de productos agropecuarios. Agropecuaria: Explotación por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, avícolas, agrícolas, frutícolas, forestales y vitivinícolas. Constructora: La ejecución de proyectos, dirección, administración y realización de obras de ingeniería y arquitectura públicas o privadas. Las actividades que en virtud de la materia hayan sido reservadas a profesionales con título habilitante serán realizadas por medio de éstos. Inmobiliaria y Financiera: La realización de todo tipo de operaciones inmobiliarias, financieras y de inversión con exclusión de las previstas en la ley de entidades financieras y toda otra que requiera el concurso público. El otorgamiento de tarjetas de créditos personales. 6) 99 años. 7) \$ 12.000 en acciones ordinarias, al portador de \$ 1 y 5 votos. 8) Directorio de 1 a 10 por 3 años. Prescindirá de sindicatura. Presidente: Oscar Andrés Salto, Suplente: Nélida Beatriz Cuello. 9) Presidente o

Vicepresidente indistintamente. 10) 30/9 de cada año.

El Escribano
N° 64.695

DICKENS BOOKS

SOCIEDAD ANONIMA

Por Esc. Púb. 486, del 18-10-93, ante la Esc. Leivar de Palleros, adscripta al Reg. 538 de Cap. Fed., Enrique Esteban Rodríguez, casado, LE 4.120.947, nac. 16-2-1934 y Néstor Enrique Rodríguez, soltero, DNI 13.080.851, nac. 14-4-59, ambos argentinos, comerciantes y domic. Moldes 1896 1° "A" Cap. Fed.; constituyeron DICKENS BOOKS S.A. con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires. Duración: 99 años desde su inscripción. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros dentro o fuera del país la explotación del negocio de librería, así como también la importación y exportación, venta y distribución de mercaderías del ramo. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto. Capital Social: \$ 12.000.- Dirección y Administración: Directorio: 1 a 7 titulares por 1 ejercicio. Representación: Presidente o vicepresidente en su caso. Fiscalización: Sin síndicos. Cierre del ejercicio: 30 de junio de cada año. Directorio: Presidente: Néstor Enrique Rodríguez, Vicepresidente: Enrique Esteban Rodríguez y Director Suplente: Norberto Oscar Alvarez. Sede Social: Esmeralda 561 3° "C" Cap. Fed.

El Autorizado
N° 64.635

DIEMA DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES MEDICINALES Y ANEXOS

SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA, INDUSTRIAL Y AGRICOLA GANADERA

Escritura N° 83 del 12-10-93; Acta de Asamblea General Extraordinaria del 21-5-93; "DIEMA DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES MEDICINALES Y ANEXOS SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA, INDUSTRIAL Y AGRICOLA GANADERA": Adecuación y Modificación arts. 1°, 2°, 3° y 8°. Art. 1°: La sociedad se denomina DIEMA DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES MEDICINALES Y ANEXOS SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA, INDUSTRIAL Y AGRICOLA GANADERA", tiene su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. Art. 2°: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años desde su inscripción original en el Registro Público de Comercio. Art. 3°: Su objeto es dedicarse por cuenta propia o de terceros en cualquier parte de la República o del Exterior a lo siguiente: a) Representaciones, importación y exportación, así como la compra venta de productos químicos y especialidades medicinales y farmacéuticas, de perfumería, alimenticias, aparatos y accesorios de cirugía, física, química, óptica y fotografía con todos sus derivados y anexos, con exclusión únicamente de la preparación de recetas para su expendio directo al público; b) Comprar, subdividir, vender, preñar, permutar, construir, explotar y administrar inmuebles en todas sus modalidades, incluso las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones de propiedad horizontal; c) instalar, comprar, subdividir, vender, permutar, arrendar y explotar establecimientos agrícola-ganaderos, cabañas, criaderos, colonizar, arrendar y explotar campos; d) comprar, vender y/o permutar títulos, acciones u otros valores mobiliarios lo mismo que cuotas de sociedades de responsabilidad limitada y en comandita, acordar y tomar prestamos en general con garantía o sin ella, preñar o hipotecar; e) fabricar, producir y/o transformar materias primas para la industria química y/o farmacéutica y su venta en cualquier estado de elaboración. Para el cumplimiento de sus fines podrá realizar todos los actos y contratos que directa o indirectamente se relacionen con los objetos sociales incluso los enumerados en los artículos 1881, del Código Civil y 608 del Código de Comercio. La sociedad no realizará las actividades de la ley 21.526 de entidades financieras, ni otras por las que requiera el concurso público. Art. 8°: La dirección y administración de la sociedad está a cargo del directorio, integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los

que se incorporarán al directorio por el orden de su designación. El término de su elección es de un ejercicio. La asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus titulares y resuelve por mayoría de los presentes, en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un Vicepresidente, que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones los titulares depositarán en la caja social la suma de quinientos mil pesos (\$ 500.000) o su equivalente en títulos valores oficiales. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición incluso las que requieran poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del artículo 9° del decreto ley 5965/63. Podrá especialmente operar en toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querrelas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o de Vicepresidente en su caso. Fijación de la sede social: Queda establecida en Tte. Gral. J. D. Perón 1658/60 de la Capital Federal. Aprobada en forma unánime.

La Escribana
N° 64.706

DIGOMSA

SOCIEDAD ANONIMA

Esc. 462, 28/9/93. Daniel Duran, 59 años, casado, comerciante, DNI 4.124.540, Campana 2974 8°; Carlos Felipe Musso, 54 años, divorciado, Cont. Púb. DNI 4.284.141, Rodríguez Peña 617 4° ambos argentinos. Duración: 99 años. Objeto: Realizar por cuenta propia o de terceros o asociadas a terceros, las siguientes actividades: 1) Industriales y Comerciales: La fabricación, elaboración, transformación, fraccionamiento, compra, venta, así como ejercer comisiones, consignaciones y representaciones y la importación y exportación de productos del caucho y sus derivados, sustitutos, sucedáneos y/o materiales complementarios y/o accesorios cualquiera sea su composición forma o estado y cualesquiera sean los fines o usos a que se los destine. 2) Inmobiliarias: Compra, venta, permuta, loteo, construcción y administración de propiedades urbanas y rurales ya sea bajo el régimen de la ley 13.512 de propiedad Horizontal o no y por la contratación directa o por intermedio de licitaciones públicas o privadas y la realización de todas las operaciones sobre inmuebles que autorizan las leyes y reglamentaciones vigentes. 3) Financieras: Mediante el aporte o inversión de capital a particulares o inversiones de capitales a empresas y sociedades constituidas o a constituirse, constitución y transferencia de hipotecas y demás derechos reales, compra, venta de títulos, acciones y otros valores mobiliarios creados o a crearse, otorgamiento de créditos en general ya sea en forma de prendas o cualesquiera de las permitidas por la ley, con exclusión de las permitidas por la Ley 21.526 de entidades financieras y toda otra que requiera el concurso público. 4) De Mandatos y Servicios: Organización y asesoramiento comercial, industrial, técnico, financiero y de comercio exterior, establecimiento y administración de representaciones comerciales, industriales, financieras y de comercio exterior, de personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras. Capital: \$ 100.000. Cierre Ejercicio 31/12. Directorio: Presidente: Carlos F., Musso; Director Suplente: Daniel Duran. Sede Social: Maipú 510.

La Autorizada
N° 64.610

DIRES

SOCIEDAD ANONIMA

Escritura del 14/10/93. Benjamin Alberto Bystrowicz, arg., L. E. 4.703.629, casado, arquitecto, Sarmiento 517, Piso 5°, Cap. Fed. David Julio Kreszes, arg. 20/4/53, DNI 10.892.621, casado, comerc. Juncal 3738, Piso 4° "A", Cap. Fed. Elias Isidoro Kreszes, arg. 9/7/55, DNI 11.632.177, casado, comerc. Virrey Loreto 1714, Piso 1° Cap. Fed. Sara Matsy de Kreszes, arg. 14/4/24, L. C. 5.430.315, viuda, comerc. Boulogne Sur Mer 659, Piso 3° "A" Cap. Fed. Edgardo Francisco Haimovich, arg. 25/2/51, L. E. 8.321.761 casado, José Bonifacio 2407, Piso 1°, Cap. Fed. Arturo Adolfo Haimovich 11/8/53, DNI 10.790.212, casado, Médico,

Méndez de Andes 2039 Planta Baja Cap. Fed. Raquel Silberstein, arg. 1/5/27, L. C. 0.381.008, casada, Comer. Rivera Indarte 619, Cap. Fed. Plazo 99 años. Objeto: Inmobiliaria. Comprar, vender, permutar, transferir por cualquier título y/o contrato bienes inmuebles para sí o para terceros o asociada a Terceros, incluyendo las operaciones previstas bajo el régimen de la Ley 13.512. Administrar y Explotar toda clase de inmuebles, celebrar contratos de locación como locadora o locataria, Constructora: Mediante la construcción de edificios bajo el régimen de la ley 13.512 o por cualquier otro sistema y de obras civiles; Financieras; Mediante el otorgamiento de préstamos y/o aportes de inversiones de capitales ya sea a particulares o sociedades, realizar financiaciones y/u operaciones financieras en general, quedan expresamente excluidas las operaciones comprendidas dentro de la Ley de entidades Financieras y toda aquellas que requieran el concurso del ahorro Público; Capital: Pesos Doce Mil, AD/Mínimo uno, Máximo cinco con Mandato por tres años, REP/ Presidente o Vicepresidente: La sociedad Presinde de la Sindicatura. Cierre: 30/9. Presidente: César Jorge Bernasconi; Vicepresidente, David Julio Kreszes. Director suplente: Edgardo Francisco Haimovich, presente en este acto desde el comienzo César Jorge Bernasconi, arg., 8/2/50, L. E. 8.113.730, casado, arquitecto, Gral. César Díaz 2145, Cap. Fed. Sede Social: Sarmiento 517, Piso 5º, Cap. Fed.

El Directorio
Nº 64.571

DRUPA

SOCIEDAD ANONIMA

Por esc. Nº 895 del 21/10/93, Enrique José Matarrelli, casado, de 50 años, contador público, CI 4.624.223 PF, Av. Leandro N. Alem 1050 P. 8º "C" CF y Paola Gabriela Matarrelli, soltera, de 25 años, abogada, DNI 20.428.103, Carlos Pellegrini 1347 P. 10 C.F., ambos argentinos constituyeron "DRUPA S. A." con domicilio en Av. Leandro N. Alem 1050 P. 8º "C" CF. Objeto: "Tiene por objeto por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros desarrollar actividades de importación, exportación y elaboración de alimentos para el consumo y su comercialización, así como también el expendio de todo tipo de bebidas gaseosas o alcohólicas, jugos, té, café, infusiones y productos lácteos preparados para el consumo. Se hallan incluidos en esta enunciación los helados, tortas, confituras y afines. Asimismo podrá dedicarse a la compra, venta y permuta, explotación, arrendamiento y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales, urbanización, loteos, fraccionamiento y la realización de todas las operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes y reglamentaciones de la Propiedad Horizontal". Capital Social: el Capital Social es de \$ 16.000 representado por 16.000 acciones ordinarias, al portador de 1 voto c/u y de \$ 1 valor nominal c/acción. Directorio: 1 a 5 titulares. Presidente: Enrique José Matarrelli; Directora Suplente: Paola Gabriela Matarrelli. Duración de los cargos: dos ejercicios. Representación legal: Presidente o Vicepresidente en su caso. Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de c/año. Se prescinde de la Sindicatura.

La Apoderada
Nº 64.700

EL VIAJANTE

SOCIEDAD ANONIMA

1) 21/9/93. 2) Horacio Jorge Laico, argentino, comerciante, nacido el 21/1/53, casado, DNI 10.691.783, domiciliado en Campana 4211-2º piso "A" Cap. Fed. y Eusebio González, argentino, comerciante, nacido el 22/6/19, casado, LE 0.409.125 domiciliado en Navarro 3353, "B" Cap Fed. 3) "EL VIAJANTE S. A." 4) Concordia 3745 Cap. Fed. 5) 99 años desde su inscripción en la IGJ. 6) Realizar por cuenta propia de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: a) Industrialización, fabricación, compra, venta, permuta, distribución de artículos de cerámica blanca y/o roja, esmaltados o no y/o revestimientos cerámicos para interiores y/o exteriores, pisos cerámicos y o de cualquier otra índole, elementos de construcción, premoldeados y/o prefabricados de cualquier tipo, con o sin instalaciones de revestimientos y/o con o sin instalaciones complementarias; materiales directamente afectados a la construcción de cualquier tipo y/o modelo de viviendas individuales, colectivas por sistemas tradicionales y otros modernos prefabricados en existencia o a crearse; revestimientos internos o externos para piletas, instalaciones industriales, comerciales y de viviendas habitacionales y/o de aplicación

comunitaria o de bien común; artefactos sanitarios y sus complementos y/o elementos para su instalación; grifería y/o sus anexos; artefactos eléctricos y/o sus complementos para su instalación; muebles y artefactos para el hogar y mercaderías de bazares y ferreterías industrializadas o no; útiles y herramientas de ferretería; máquinas y sus accesorios para industriales cerámicas y de la construcción y de aquellas industrias que directamente se encuentran relacionadas con las mismas. Exportación, importación, comisiones, mandatos, consignaciones y representaciones vinculados con todo lo enunciado precedentemente; b) Mediante la compra, venta, distribución, importación, exportación, representación, comisión y consignación por cuenta propia o de terceros de los materiales metalúrgicos, plásticos, madereros, eléctricos, mecánicos y de la construcción. 7) Pesos Doce Mil. 8) De uno a cinco titulares por tres años. Presidente y/o Vicepresidente. 9) Se prescinde de la Sindicatura. 10) 31 de diciembre de cada año. 11) Presidente: Horacio Jorge Laico; Director Suplente: Eusebio González.

El Autorizado
Nº 64.594

FUERZA JOVEN

SOCIEDAD ANONIMA

Constitución: Escritura Nº 274 del 15/10/93. Accionistas: Enrique Salvador Casadevall, 35 años, argentino, soltero, comerciante, DNI 13.404.101, Av. Rivadavia 5224, 1º Capital; Jorge Daniel Alvarez, 34 años, argentino, divorciado, comerciante, DNI 12.895.684, Montevideo 1141, 7º "A" Capital. Denominación: "FUERZA JOVEN S. A.". Duración 99 años. Objeto: a) La intermediación en la reserva o locación de servicios en cualquier medio de transporte en el país o en el extranjero. b) La intermediación en la contratación de servicios hoteleros en el país o en el extranjero. c) La organización de viajes de carácter individual o colectivo, excursiones, cruceros o similares, con o sin inclusión de todos los servicios propios de los denominados a forfait en el país o en el extranjero. d) La recepción y asistencia de turistas durante sus viajes y su permanencia en el país, la prestación a los mismos de los servicios de guías turísticos y el despacho de sus equipajes. e) La representación de otras agencias, tanto nacionales como extranjeras a fin de prestar en su nombre cualesquiera de estos servicios. f) La realización de actividades similares o conexas a las mencionadas con anterioridad en beneficio del turismo. g) La compra y venta de cheques de viajero y de cualquier otro medio de pago, por cuenta propia o de terceros. h) La formalización por cuenta de empresas autorizadas de seguros que cubran los riesgos de los servicios contratados. i) Los despachos de aduana en lo concerniente a equipajes y cargas de los viajeros por intermedio de funcionarios autorizados. j) La venta de entradas para espectáculos públicos, deportivos, artísticos, culturales cuando constituyen parte de otros servicios turísticos. k) Empresa de viajes y turismo para operar ante la Dirección Nacional de Turismo y ante los diversos entes nacionales y provinciales del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. l) Venta de pasajes terrestres, marítimos y aéreos. ll) Transporte de cargas en jurisdicciones nacionales e internacionales. m) La prestación de cualquier otro servicio que sea consecuencia de las actividades específicas de los agentes de viajes. 2) Hotelaria: Alojamiento en general de personas de cualquiera de las formas que las leyes vigentes o futuras establezcan, con o sin comidas, con o sin desayunos y cualquier otra actividad relacionada con la hotelaria, desempeño de mandatos y representaciones por de terceros de cualquier actividad, productos o bienes que se encuentren directamente relacionados con la hotelaria u hospedaje en general. Capital: \$ 12.000. Administración: Mínimo 1 Máximo 5. Representación: Presidente o Vicepresidente. Fiscalización: sin sindicatos. Cierre de Ejercicio: 30-6. Directorio: presidente: Jorge Daniel Alvarez, Director Suplente: Enrique Salvador Casadevall. Sede Social. Montevideo 1141, 7º "A" Capital.

La Autorizada
Nº 64.578

HOME FOX

SOCIEDAD ANONIMA

Por instrumento del 30-9-93 aumentó el capital a \$ 334.500 modificando el art. 4º del estatuto.

El Autorizado
Nº 35.403

I. G. R.

SOCIEDAD ANONIMA

Escritura Nº 84 del 12/10/93; Acta de Asamblea Nº 2, del 16-4-93; "I.G.R. S. A." Modificación de Estatuto art. 3º. Art. 3º: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o asociada a terceros y/o de terceros las siguientes actividades que tiendan al cumplimiento de su objeto social mediante la venta, compra, distribución, consignación, comercialización y representación de: comidas preparadas, frias y/o calientes, productos que se consumen con el aperitivo, masitas, especialidades de confitería y pastelería, sandwiches de miga, servicios de lunch, bebidas con o sin alcohol, golosinas, galletitas, alimentos dietéticos, condimentos, especias y cualquier otro artículo de carácter gastronómico. La constitución de todo tipo de obras públicas y/o privadas, a través de contrataciones directas o de licitaciones, para la construcción de viviendas y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura. La administración de cualquier tipo de propiedades urbanas o rurales. Compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles inclusive las comprendidas bajo el Régimen de la ley de Propiedad Horizontal, así como también toda clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a viviendas, urbanización, clubes de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y parques industriales, pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones inmobiliarias de terceros. También podrá dedicarse a la administración de propiedades inmuebles, propias o de terceros. Importación, exportación, representación o distribución de materias primas, productos elaborados o no, mercaderías o accesorios relacionados con su objeto. La aceptación, desempeño y otorgamiento de representaciones, concesiones, comisiones, agencias y mandatos en general. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Aprobada en forma unánime.

La Escribana
Nº 64.707

ING. FEDERICO KROMMEL Y ASOCIADOS

SOCIEDAD ANONIMA

Se comunica por 1 día: Constitución S. A.: Socios: Federico Guillermo Krommel, arg., casado, ingeniero, nacido el 8/5/45, LE 4.518.242, domicilio Raúl Scalabrini Ortiz 2083 P. 2do. Dto "A" de Cap. Fed. y Mario Daniel González, arg., divorciado, ingeniero, nacido el 14/7/54, DNI 11.270.039, domicilio Pacheco de Melo 2573 P. 2do. Cap. Fed. y al solo efecto de aceptar los cargos Estella Maris Bodello, arg., divorciada, empresaria, nacida el 11/10/53, DNI 10.858.972, domicilio Pacheco de Melo 2573 P. 2do. Cap. Fed., Carlos Miguel Carreira, arg., casado, comerciante, nacido el 28/9/54, DNI 11.293.875, domicilio Fray Cayetano Rodríguez 954 P. 1ero. Dto. "B" Cap. Fed. y Carlos Damián Zacarías, arg., casado, contador público, nacido el 29/10/51, DNI. 10.126.925, domicilio Ituzaingó 738 Ezeiza, Pcia. Bs. As. Fecha de Constitución: 19/10/93. Denominación: "ING. FEDERICO KROMMEL Y ASOCIADOS S. A." Domicilio: Sarmiento 299 P. 6 Of. 656 Capital Federal. Plazo: 99 años desde su inscripción. Objeto: Realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: Mandatos y Servicios: Mediante el desarrollo de toda clase de representaciones, distribución, comisión, consignación, mandatos en administración de negocios y empresas y la prestación de servicios consistentes en relevamiento planialtimétricos, aerofotográficos, aerofotogramétricos y satelitales, apertura de picadas, trazado de caminos y proyectos de ingeniería para las actividades petroleras, gasíferas, mineras, petroquímicas, acuíferas, ecológicas y del medio ambiente, que serán realizados por profesionales con título habilitante en sus respectivas materias y reglamentos; sin perjuicio de las actividades precisadas, la sociedad podrá efectuar, promocionar, organizar, representar y asesorar actividades comerciales, industriales, petroleras, gasíferas, mineras, petroquímicas, acuíferas, del medio ambiente, asimismo podrá proveer para todos los servicios mencionados transporte de cualquier tipo, personal y servicios de comida; adquisición, uso manipuleo, consignación y venta de explosivos sísmográficos y para la industria petrolera gasífera y acuífera materiales para aerofotografía y aerofotogrametría. Comercial: mediante la compra, venta, importación, exportación reexportación, consignación, representa-

ción, permuta y distribución de instrumental, equipos, soportes informáticos, materias primas y materiales y productos industrializados o no, de aplicación y/o en consignación; ejercer representaciones, comisiones, mandatos y toda otra actividad a fin. Importadora y Exportadora: Mediante la importación y exportación de mercaderías en general. Constructora: Mediante la elaboración o ejecución de todo tipo de obras, sean públicas o privadas, civiles o industriales de arquitectura e ingeniería, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros y por medio de contrataciones directas o por licitaciones públicas o privadas y/o por concurso de precios. Inversora Financiera: mediante préstamos, con o sin garantía, a corto o largo plazo, aportes e inversiones de capital a empresas y sociedades, constituidas o a constituirse para negocios realizados o a realizarse constitución y transferencias de hipotecas y demás derechos reales, compra venta de títulos acciones y otros valores mobiliarios, papeles de crédito de cualquiera de los sistemas o modalidades creadas o a crearse y otorgar créditos en general, ya sea en forma de descuentos de prendas o cualquier otra de las permitidas por las leyes. Se excluyen las operaciones comprendidas en la Ley de entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso público. Industriales: Fabricar todo tipo de máquinas herramientas elementos, accesorios y/o partes de uso de la actividad petrolera, gasífera, minera, petroquímica, acuífera. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto. Capital: doce Mil Pesos, dividido en 12.000 acciones ord. al portador, de \$ 1.- y 1 voto c/u. Administración: Directorio de 1 a 5 titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, todos por 2 ejercicios; mientras se prescinde de la sindicatura la elección de uno o más suplentes será obligatoria. Presidente: Federico Guillermo Krommel, Vicepresidente: Carlos Damián Zacarías, Director Titular: Mario Daniel González y Directores Suplentes: Estella Maris Bodello y Carlos Manuel Carreira. Representación: Presidente o Vicepresidente en su caso. Fiscalización: Se prescinde de la sindicatura; cuando se aumente el capital al previsto en el art. 299 inc. 2 Ley 19.550, anualmente la asamblea debe elegir síndicos titular y suplente. Cierre del Ejercicio: 30/9 de cada año. La Sociedad.

El Escribano
Nº 64.721

INSEMAR

SOCIEDAD ANONIMA

Prescendencia de Sindicatura y Reforma: Escritura Nº 337 del 8-10-93 y Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 14 del 31-8-93. Los accionistas de "INSEMAR S. A." resolvieron prescindir de la sindicatura y modificar los artículos 8º y 9º así: 8º) Administración: Mínimo 1, Máximo 5. Representación: Presidente o Vicepresidente. 9º) Fiscalización: Sin sindicatos. Se designan directores suplentes a Luis Angel Contardi y Marta Stella Maris Maronese de Ardigo.

El Presidente
Nº 64.580

INTEROPTICA ANDINA

SOCIEDAD ANONIMA

Hace saber por un día el siguiente aviso: Que por escritura pública de fecha 12-10-93 se constituyó la sociedad denominada INTEROPTICA ANDINA S. A. Accionistas: Carlos Gustavo Rusansky, argentino, divorciado, con L.E. 4.547.997, empresario, nacido el 14-6-46, domiciliado en Tres de Febrero 1591 piso 18 Capital y don Javier Marcelo Rusansky, argentino, casado, con DNI 17.366.711, empresario, nacido el 8-12-64, domiciliado en Arevalo 2357 Piso 16 B Capital. Domicilio social: Av. de los Incas 5129, 1º Capital Federal. Duración: 99 años desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: Comerciales: Mediante la fabricación, importación, exportación y comercialización de anteojos, armazones y artículos de óptica en general. Industriales: Producción, elaboración, manufactura o fabricación de anteojos, armazones y sus accesorios para ópticas. Financieras: Mediante la inversión y/o aporte de capitales a personas físicas o sociedades constituidas o a constituirse, para operaciones realizadas o a realizarse, efectuar préstamos a interés y financiación en general, garantizar operaciones de terceros, intervenir en la compra-venta de títulos, acciones, debentures, letras o cualquier

MUNDO VIRTUAL

SOCIEDAD ANONIMA

Hace saber: 1) Socios: Ricardo José Morena, 44 años, L. E. 7.629.729, domicilio Puan 175, 2º "A", Capital Federal; y Eduardo Daniel Meller, 37 años, D.N.I. 12.273.769, domicilio Av. del Libertador 4652, Piso 12º de Capital Federal; ambos argentinos, casados y comerciantes. 2) Constitución: Escritura 353, Fº 1180, del 18-10-93, Registro 858 de Capital Federal. 3) Domicilio: Av. Juan Bautista Alberdi 224, 4º, "A", Capital Federal. 4) Objeto: realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros bajo cualquier forma de asociación prevista en la Ley 19.550, ya sea en el País y/o en el extranjero, las siguientes actividades: Compra, venta, alquiler, arrendamiento, leasing, importación, exportación, representación, intermediación, consignación, depósito, distribución, explotación y cualquier forma de comercialización de máquinas de entretenimiento, como así también sus componentes, accesorios, repuestos y demás productos relacionados con las mencionadas máquinas. 5) Duración: 99 años desde su inscripción. 6) Capital: \$ 50.000. 7) Dirección y administración a cargo de un directorio integrado entre 1 a 6 miembros con mandato por 3 ejercicios, pudiendo la asamblea designar igual o menor número de suplentes. Se prescinde de la sindicatura, conforme al art. 284, último párrafo de la Ley 19.550. Se designan: Presidente: Ricardo José Morena. Vicepresidente: Eduardo Daniel Meller. Director Suplente: Ricardo Antonio Corrao, argentino, 53 años, casado, comerciante, L.E. 4.525.276, domicilio Av. Juan Bautista Alberdi 224, 1º, "D", Capital Federal. 8) Representación legal: Indistintamente al Presidente o al Vicepresidente. 9) Cierre del ejercicio social: 31 de diciembre de cada año.

El Autorizado
Nº 35.376

OLEODUCTOS DEL VALE

SOCIEDAD ANONIMA

Se comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 12 de Abril de 1993 se reformó el art. 7º del Estatuto Social cuyo nuevo texto es el siguiente: "Artículo 7º: Las acciones serán de las siguientes clases: a) Clase "A": Las equivalentes al setenta por ciento (70 %) del Capital Social, o sea siete millones setecientos cinco mil doscientas (7.705.200) acciones. Durante los primeros dos (2) años de existencia de la Sociedad sólo podrán ser transmitidas total o parcialmente, bajo pena de nulidad, previa conformidad de los titulares de las acciones Clase "B". b) Clase "B" las equivalentes al treinta por ciento (30 %) del Capital Social, esto es tres millones trescientas dos mil doscientos veintinueve (3.302.229) acciones. El Capital Social puede ser aumentado hasta el quintuplo conforme el Artículo 188 de la Ley Nº 19.550 (l. o. 1984). Corresponde a la Asamblea establecer las características de las acciones a emitirse en razón del aumento, dentro de las condiciones dispuestas en el presente Estatuto, pudiendo delegar en el Directorio la facultad de fijar la época de las emisiones, como, también la determinación de la forma y condiciones de pago de las acciones, pudiendo efectuar, asimismo, toda otra delegación admitida por la Ley. Todo aumento o reducción del Capital Social deberá hacerse manteniendo la proporción establecida en este Estatuto entre las diversas clases de acciones".

El Directorio
Nº 64.684

OSCAD

SOCIEDAD ANONIMA

Hace saber que por escrituras 75 y 76, Fº 225 y 228, ambas del 12-10-93, Registro 815 de Capital Federal, se protocolizaron las siguientes actas: a) Acta Asamblea General Extraordinaria Unánime del 19-10-90, en la que se reformó el artículo 11º del estatuto, prescindiéndose de la sindicatura según art. 284, Ley 19.550 y para el caso de que quedara comprendida en el inc. 2º, del art. 299 de la Ley 19.550, anualmente la asamblea designará un Síndico Titular y un Síndico Suplente. b) Acta de Asamblea Extraordinaria Unánime del 27-9-93, en la que se reformó el art. 5º del estatuto, aumentando el capital a \$ 5.000.000.- y se designaron como Síndico Titular a Mario Jaime Medviginer y Síndico Suplente a Miguel Rothfeld.

El Autorizado
Nº 35.377

PAR-T-GOLF

SOCIEDAD ANONIMA

Constitución por escritura del 22/10/93. Socios: Marcelo Antonio Gómez, 35 años, casado, argentino, ingeniero, Piedras 77 piso 7 Capital Federal, DNI 11.837.918 y Fernando Gómez, 31 años, casado, argentino, abogado, Piedras 77 piso 7 Capital Federal, DNI 14.769.655. Denominación: PAR-T-GOLF S. A.. Plazo: 99 años. Objeto: Realización por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros de las siguientes actividades: a) Comerciales: mediante la compra-venta, distribución, representación, consignación, alquiler con o sin opción a compra, explotación, franquicia, importación y exportación de equipos de video simuladores de golf y demás equipos electrónicos destinados a la práctica deportiva, el entretenimiento y la capacitación en general mediante el empleo de simuladores, video-juegos y demás equipos y mecanismos con objeto lúdico o deportivo, así como de sus partes componentes, accesorios y repuestos; b) Industriales: mediante la fabricación, ensamble y armado de los equipos mencionados en el acápite a) precedente, incluyendo el desarrollo del software necesario para el funcionamiento de los equipos elaborados; c) De servicios: mediante la prestación de los servicios de instalación, reparación y mantenimiento de los equipos mencionados en el acápite a) precedente, así como servicios de adiestramiento y capacitación para el uso de los mismos; y d) financieras y de inversión: mediante la compraventa y negociación de acciones, obligaciones negociables, bonos, títulos públicos, cédulas, letras de tesorería, debentures, y toda otra especie de títulos valores, públicos y privados, emitidos por el Estado Nacional, las Provincias, las Municipalidades, Estados extranjeros, entes autárquicos, empresas estatales, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y sociedades por acciones constituidas en el país o en el exterior; participación en todo tipo de agrupamiento empresario permitido por las leyes en vigencia; otorgamiento de préstamos, financiamientos y negocios crediticios de toda clase, quedando exceptuadas las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras. Capital: \$ 12.000. Administración: Directorio de dos a cinco miembros, por 3 ejercicios. Se prescinde de la sindicatura. Representación legal: Presidente o Vicepresidente en forma indistinta. Domicilio: ciudad de Buenos Aires. Sede: Piedras 77 piso 7 Capital Federal. Cierre de ejercicio: 31 de agosto. Composición del Directorio: Presidente: Marcelo Antonio Gómez, Vicepresidente: Fernando Gómez y Director Suplente: Juan Carlos Bagnasco.

La Apoderada
Nº 64.727

PETROFIBRA

SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Se comunica que por escritura del 20/07/993 pasada ante Clara Glagovsky, escrib. Interina del Reg. 920 de Cap. Fed., al fº 782, bajo el Nº 241, se protocolizó la reforma de los Estatutos sociales de "PETROFIBRA S. A. I. y C." a saber que por la Asamblea General Extraordinaria del 31/05/990: Se resolvió modificar los artículos 3, 4, 7, 8, 12 y 13º del Estatuto Social, cuyos textos son los siguientes: "Artículo 3º: El Capital Social es de A 0,075, representado por una serie formada por 75.000 acciones de A 0,000001 valor nominal cada una. El Capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quintuplo de su monto, conforme el art. 188 de la ley 19.550. Artículo 4º: Las acciones son ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a cinco votos por acción. Las acciones y los certificados provisorios que se emitan contendrán las menciones del art. 211 de la Ley 19.550. Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción. En caso de mora en la integración del capital, el directorio queda facultado para proceder de acuerdo con lo determinado por el artículo 193, de la ley 19.550. Artículo 7º: Cada Director depositará veinte mil Australes en dinero en efectivo o en acciones de otras sociedades por igual monto, en garantía de sus funciones hasta la aprobación de su gestión. El Directorio quedará en condiciones de funcionar válidamente cuando se encuentren presentes dos de sus miembros. El Directorio adopta resoluciones por mayoría de votos de los directores presentes cuando se encuentren presentes los tres Directores y por unanimidad de votos presentes cuando se encuentren presentes los dos Directores. Se requiere la presencia y unanimidad de votos de la totalidad de los miembros integrantes del Directorio para: a) Disponer la emisión de acciones y las condiciones y forma de pago. b) Venta de inmuebles de la sociedad. c) Venta del activo fijo.

d) Determinar el cambio de oficinas y/o de la fábrica. e) Constitución de derechos reales o constitución de gravámenes sobre inmuebles que forman parte del activo social. f) Compra de inmuebles, arriendo de inmuebles y compra y arriendo de muebles registrables a nombre de la sociedad. g) Otorgamiento de poderes especiales a terceros para la realización de cualquiera de estos actos. Las reuniones de directorio serán convocadas cuando lo resuelva el presidente o lo pida un director o el síndico en su caso. El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellos para los cuales la ley requiere poderes especiales conforme el artículo 1.881 del Código Civil y artículo 9 del Decreto Ley 5965/63. Puede en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos, operar con los bancos de la Nación Argentina, Nacional de Desarrollo, de la Provincia de Buenos Aires, Hipotecario Nacional y demás instituciones de créditos oficiales o privadas, establecer agencias, sucursales, u otra especie de representación dentro o fuera del país, otorgar a una o más personas poderes judiciales inclusive para querrelar criminalmente y para poner y absolver posiciones, o extrajudiciales con el objeto y extensión que juzgue conveniente. La representación legal de la sociedad será ejercida por el Presidente y por cualquiera de los Directores en forma individual, cuyas firmas obligan a la sociedad. El Directorio podrá dictar un reglamento interno sobre el funcionamiento del cuerpo, que entrará en vigor una vez cumplidas las exigencias de los artículos 5 y 167, de la ley 19.550. Artículo 8: La sociedad prescinde de la Sindicatura de conformidad con el artículo 284 de la ley 19.550. Cuando por aumento de capital la sociedad quedara comprendida en el inciso segundo del artículo 299 de la ley citada, la asamblea deberá elegir síndicos titular y suplente por un ejercicio. Artículo 12: El ejercicio social cierra el 31 de enero de cada año, a esa fecha, se confeccionarán los estados contables conforme las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia. La asamblea puede modificar la fecha de cierre del ejercicio, inscribiendo la resolución pertinente en el Registro Público de Comercio y comunicándole a la autoridad de contralor. Las ganancias realizadas y líquidas se destinan: a) cinco por ciento al fondo de Reserva Legal, hasta alcanzar el veinte por ciento del capital social. b) A remuneración del Directorio y al Síndico en su caso. c) El saldo tendrá el destino que determine la Asamblea. Los Dividendos se pagarán en proporción a las respectivas integraciones, dentro del año de su sanción. Artículo 13: La liquidación de la sociedad será practicada por el directorio o por el liquidador o liquidadores designados por la asamblea, en ambos casos, bajo la vigilancia del síndico si correspondiera. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se distribuirá entre los accionistas a prorrata de sus respectivas integraciones.

La Escribana
Nº 64.625

PRESTACIONES MEDICAS INTERNACIONALES

SOCIEDAD ANONIMA

Por escritura del 3/9/93 se constituyó "PRESTACIONES MEDICAS INTERNACIONALES S. A." socios: Roberto César Crotti, divorciado, comerciante, 57 años, DNI. 4.179.282, Monseñor Larrumbe 12, Martínez, Pcia. Bs. As. Bernardo Luis Beller, casado, contador público, 42 años, L.E. 8.586.503, Cuba 2388, Cap. Fed. Carlos Alfredo Endelman, divorciado, economista, L.E. 4.703.377, Heredia 1445, Cap. Fed. y Victor Luis Martínez Sagasta, soltero, 51 años, médico, DNI. 4.391.714, Juan María Gutiérrez 2600, Cap. Fed. argentinos. Sede social: Cabello 3988, 2º B. Cap. Fed. Plazo 99 años inscripción R. P. C. Objeto: General prestaciones médicas en los rubros turismo de salud, programas médicos sociales y terapéuticas de alta complejidad, dentro del ámbito nacional como así también en la internacionalización de las prácticas médicas con cualquier país del mundo. Actuar como productor, importador y exportador de drogas, medicamentos y moléculas bioactivas, como así también de todo tipo de equipamiento e instrumental médico, materiales descartables, prótesis y ortesis. Actuar como consultora de programación, organización y control de prestadoras médicas, generación de centros médicos, especializados en cuanto a su capacidad instalada, equipamientos, recursos humanos y procesos médicos, desarrollo y programación de comunicaciones a nivel de interconsulta médica en el orden nacional e internacional con la utilización satelital, unidades de transporte médico especializado. Actuar en apoyo de la investigación básica y aplicada,

docencia médica y formación continua mediante la organización de simposios, congresos, cursos, conferencias y becas bidireccionales. Capital: 12.000 pesos. Administración a cargo de 1 a 5 miembros mandato 2 años. Representación legal corresponde al Presidente o Vicepresidente. Cierre ejercicio: 30/9/c/año. Presidente: Victor Luis Martínez Sagasta; y Carlos Alfredo Endelman; Vicepresidente: Bernardo Luis Beller; director titular: Roberto César Crotti; Director Suplente: Jorge Belisario Lascano.

El Autorizado
Nº 64.567

RAYO VALLECANO

SOCIEDAD ANONIMA

Por Asamblea Unánime del 18/10/93 se resolvió aumentar el capital a \$ 1.500.000.- por lo que se reformó el art. 4º del Estatuto, quedando así redactado: Artículo cuarto: El Capital social asciende a \$ 1.500.000.- representado por 1.500.000 acciones ordinarias al portador y con derecho a un voto por acción.

El Abogado
Nº 35.335

REALIDAD VIRTUAL

SOCIEDAD ANONIMA

Constitución por escritura del 22/10/93. Socios: Marcelo Antonio Gómez, 35 años, casado, argentino, ingeniero, Piedras 77 piso 7 Capital Federal, DNI 11.837.918 y Fernando Gómez, 31 años, casado, argentino, abogado, Piedras 77 piso 7 Capital Federal, DNI. 14.769.655. Denominación: REALIDAD VIRTUAL S. A.. Plazo 99 años. Objeto: Realización por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros de las siguientes actividades: a) Comerciales: mediante la compraventa, distribución, representación, consignación, alquiler con o sin opción a compra, explotación, franquicia, importación y exportación de equipos y programas de computación simuladores de la realidad, video-juegos y demás equipos electrónicos destinados al juego y la recreación, la práctica deportiva, la capacitación, la investigación, el diseño, la comercialización y otros usos, mediante el empleo de simuladores y demás recursos audio-visuales y táctiles, así como de sus partes componentes, accesorios y repuestos; b) Industriales: mediante la fabricación, ensamble y armado de los equipos mencionados en el acápite a) precedente, incluyendo el desarrollo del software necesario para el funcionamiento de los equipos elaborados; c) De servicios: mediante la prestación de los servicios de instalación, reparación y mantenimiento de los equipos mencionados en el acápite precedente, así como servicios de adiestramiento y capacitación para el uso de los mismos; y d) Financieras y de inversión: mediante la compraventa y negociación de acciones, obligaciones negociables, bonos, títulos públicos, cédulas, letras de tesorería, debentures, y toda otra especie de títulos valores, públicos o privados, emitidos por el Estado Nacional, las Provincias, las Municipalidades, Estados extranjeros, entes autárquicos, empresas estatales, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y sociedades por acciones constituidas en el país o en el exterior; participación en todo tipo de agrupamiento empresario permitido por las leyes en vigencia; otorgamiento de préstamos, financiamientos y negocios crediticios de toda clase, quedando exceptuadas las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras. Para su cumplimiento la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el mismo y que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Capital: \$ 12.000. Administración: Directorio de dos a cinco miembros, por 3 ejercicios. Se prescinde de la sindicatura. Representación legal: Presidente o Vicepresidente en forma indistinta. Domicilio: ciudad de Buenos Aires. Sede: Piedras 77 piso 7 Capital Federal. Cierre de ejercicio: 31 de agosto. Composición del Directorio: Presidente: Marcelo Antonio Gómez, Vicepresidente: Fernando Gómez y Director Suplente: Raúl Fernando Laballos.

La Apoderada
Nº 64.723

RUNFO

SOCIEDAD ANONIMA

Comunica que por escritura Nº 65 del 25-3-1993 se protocolizó Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime Autoconvocada Nº 4 del 3-9-1986, donde se resolvió aumentar el capital social de A 30.000 (australes treinta mil)

dades, realizar financiaciones y operaciones de crédito en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, realizar operaciones financieras en general. Quedan excluidas las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras y toda otra operación por la que se requiera el concurso público. IV) Agropecuarias: La explotación en todas sus formas de establecimientos agrícolas, ganaderos, frutícolas, cultivos forestales y granjas. V) Inmobiliarias: Compra, venta, locación y administración de bienes inmuebles, urbanos o rurales". Artículo 6º: El capital social se fija en la suma de 1.136.256 acciones de valor nominal \$ 1 (un peso) cada una, las que se hallan totalmente suscriptas. El capital social podrá elevarse al quintuplo en las condiciones establecidas por el art. 188 de la ley 19.550 por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, sin requerirse conformidad administrativa. La Asamblea sólo podrá delegar en el Directorio la época de la emisión, forma y condiciones de pago. La resolución de la Asamblea se publicará e inscribirá. Si hubiere mora por parte del accionista en el pago de una o más cuotas, el accionista moroso pagará un interés equivalente a una vez y media del que pague en ese momento el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento ordinario de documentos desde la fecha en que deba hacerse el pago. Transcurridos noventa días el Directorio podrá, previa intimación por 30 días al suscriptor moroso resolver la caducidad de los derechos del suscriptor con pérdida de las sumas abonadas a favor de la sociedad o la venta en remate público de los certificados provisionales correspondientes a las acciones impagas, siendo de cuenta del suscriptor moroso, los gastos de remate y los intereses moratorios, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños y debiendo el comprador integrar las acciones en las condiciones de su emisión, transfiriéndose todos los derechos del primitivo suscriptor. El eventual saldo líquido del precio de venta de los certificados, quedará a favor de la sociedad. Los aportes en especie se registrarán por lo establecido en el art. 51 y concordantes de la ley 19.550. Si se emiten acciones preferidas darán derecho a un voto por cada acción en el caso de que no hubieren percibido el dividendo prometido por falta o insuficiencia de utilidades y durante el tiempo que esa situación se mantenga. La Asamblea General al emitirlos fijará sus características. Podrán gozar de un dividendo fijo anual de hasta el 36 % sobre un valor nominal y de una participación adicional en las utilidades hasta igualar los dividendos que se asignen a las acciones ordinarias. El dividendo anual fijo de las acciones preferidas será acumulativo, vale decir, que si en un año las utilidades líquidas y realizadas no llegaren a cubrirlo, será abonado por tiempo determinado con las ganancias líquidas y realizadas de los años siguientes, con preferencia a cualquier distribución a las acciones ordinarias. Las acciones preferidas podrán ser rescatadas por la sociedad por resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas transcurridos tres años a partir de su emisión mediante el pago de su valor nominal, más la prima establecida en la oportunidad de su emisión y más los dividendos atrasados en el caso de que los hubiere, más la parte alicuota de los dividendos correspondientes al ejercicio en curso durante el cual se realice el rescate". Artículo 7º: Las acciones pueden ser al portador o nominativas, las segundas endosables o no, ordinarias o preferidas, según se determine al resolverse la emisión. Todas las acciones podrán ser escriturales observando las prescripciones que para ellas se formulan en la ley 19.550. Las acciones y certificados provisionales que se emitan contendrán las menciones y cumplirán con los recaudos que exijan las disposiciones legales vigentes". Artículo 12º: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de hasta 15 miembros, pudiendo la asamblea designar igual o menor número de suplentes a fin de llenar las vacantes que se produjeren en el rodén de su elección." Artículo 15º: La renuncia del director debe ser presentada al Directorio, el que podrá aceptarla si no afectare el funcionamiento regular del mismo. De lo contrario el renunciante deberá continuar en funciones hasta la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas. En caso de renuncia aceptada, fallecimiento o cualquier otro impedimento de uno o más directores, el Directorio designará al o a los representantes interinos, quienes desempeñarán el cargo hasta que la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas designe los definitivos." Artículo 17º: el directorio se reunirá por lo menos una vez por mes y cuando lo requiera cualquiera de los directores o el Síndico." Artículo 18º: Para la reunión del directorio el quórum será de la mayoría absoluta de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría de los presentes". Artículo 19º: La convocatoria a los Directores se hará por esuelas dirigidas a cada director y al Síndico. No será necesario este requisito si todos los directores y

el Síndico se hallen presentes y acuerden celebrar la sesión firmando el acta correspondiente en cumplimiento del art. 20." Artículo 25: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria que también deberá elegir un Síndico suplente. Durarán en su mandato un año y podrán ser reelegidos. Las funciones de los síndicos serán las establecidas en el art. 294 de la ley 19.550 y las que se determinen en este Estatuto." Artículo 26: Las Asambleas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias. Se convocará a Asamblea General de Accionistas dentro de los primeros cuatro meses de cada ejercicio comercial para considerar el Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Ganancias, Memoria e Informe del Síndico y de la Auditoría y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le compete resolver, conforme a la ley y a estos Estatutos, o que sometan a su decisión el Directorio o el Síndico y para considerar la designación y remoción de directores o síndicos y fijación de su retribución. Se convocará a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria en los casos previstos por la ley, cuando lo determine el Directorio o lo soliciten por escrito dirigiéndose simultáneamente al Presidente y al Síndico de la sociedad accionistas o grupos de los mismos que hayan comprobado que representan por lo menos un 5 % del capital ordinario suscripto, debiendo indicar en dicha solicitud el objeto por el cual se pide la convocatoria. El Directorio o el Síndico deberán convocar la Asamblea General de Accionistas dentro de los 40 días de formulado el pedido." Artículo 27: La convocatoria de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de accionistas se hará por intermedio de avisos publicados por cinco (5) días hábiles en el Boletín Oficial, debiendo aparecer el último aviso con no menos de diez (10) días de anticipación al señalado para la realización de la Asamblea. Las Asambleas podrán celebrarse sin publicación de la convocatoria, cuando se reúnen accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto". Artículo 28: Los Accionistas podrán hacerse representar por mandatarios. No pueden ser mandatarios los directores, los síndicos, los gerentes y demás empleados de la sociedad. Es suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado, con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria." Artículo 29: Corresponde a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, tratar exclusivamente los asuntos siguientes: a) Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Ganancias, Memoria e Informe del síndico y de la Auditoría y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le compete resolver o que someten a su decisión el Directorio o el Síndico. b) Designación y remoción de directores y síndicos y fijación de su retribución. c) Responsabilidad de los directores y síndicos. d) Aumento del capital social hasta el quintuplo, conforme el art. 188 de la ley 19.550. e) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de la Asamblea." Artículo 34: El ejercicio comercial será del 1º de enero de cada año al 31 de diciembre del mismo año. todos los años se practicará un inventario y se efectuará un balance general y el estado de resultados al 31 de diciembre. La documentación con un informe sobre la marcha de la sociedad será sometida al síndico que formulará su dictamen sobre la misma y requerirá el de la Auditoría antes de ser presentado a los accionistas. La distribución de utilidades será acordada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas después de hechas las reservas legales y las que acuerda la Asamblea en la siguiente forma: a) 5 % al fondo de reserva legal hasta llegar al 20 % del capital suscripto como mínimo. b) El saldo se distribuirá como dividendo al capital, en la forma y con las preferencias establecidas en el art. 6º de estos Estatutos, previa deducción de las sumas que la Asamblea resuelva destinar a fondo de reserva o a cuenta nueva y de las remuneraciones del Directorio y del Síndico en los casos que las hubiera, así como de las previsiones que se dispongan para atender las operaciones pendientes. Sin perjuicio de las aplicaciones que pueda darle la Asamblea General de Accionistas, el fondo de reserva extraordinario podrá ser utilizado, parcial o totalmente para el pago de dividendos. Los inventarios y balances se ajustarán a las normas legales y reglamentarias en vigencia. Los dividendos deberán abonarse dentro del ejercicio económico en que fuesen sancionados por la Asamblea, contándose a partir de la fecha de realización de ésta la prescripción de dichos dividendos. Las acciones suscriptas pero no integradas, percibirán el dividendo que proporcionalmente les corresponde a las sumas abonadas en el momento del pago de los dividendos en cuestión."

El Presidente
Nº 64.577

TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PATOLOGICOS

SOCIEDAD ANONIMA

Constitución: 6/9/93, ante Liliána M. Garbarini, nº 506, adscripta Reg. 1399, Cap. Fed. 1) Eduardo José Gabriel García Fernández, argentino, nacido 17/9/42, divorciado, odontólogo, LE. 7.729.392, Italia 115, piso 4º, de Lomas de Zamora, pcia. Bs. As.; Guillermo Juan Gainza Paz, argentino, nacido el 26/3/30, casado, empresario, LE. 4.239.952, Suipacha 1111, piso 31, Cap. Fed.; Roberto Domingo Messina, argentino, nacido el 20/5/51, bioquímico, casado, LE. 8.570.079, Av. Eva Perón esquina Alzaga de Témperley, pcia. Bs. As.; Guillermo Marcelo Sala, argentino, nacido el 2/7/49, divorciado, abogado, LE. 7.961.405, Sarmiento 640, piso 1º, Cap. Fed.; Juan María José Paulo Viller, argentino, nacido el 28/6/34, divorciado, empresario, LE. 4.130.891, Suipacha 1111, piso 31 de Cap. Fed. 2) 99 años; 3) Suipacha 1111, piso 31 de Cap. Fed. 4) La Sociedad tiene por objeto la recolección, manipuleo, transporte, tratamiento y disposición de residuos patogénicos, entendiéndose por ellos a todos aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, que presentan características de toxicidad y/o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos, y causar contaminación del suelo, del agua o la atmósfera; que sean generados con motivo de la atención de pacientes (diagnósticos, tratamientos, inmunización o provisión de servicios a seres humanos y animales), así como también en la investigación y/o producción comercial de elementos biológicos. Extendiendo su actividad a la destrucción y/o incineración de todo tipo de drogas, como así también a la cremación de los restos de animales y/o seres humanos, y toda actividad afín a su objeto. También será objeto de esta Sociedad, la destrucción y/o incineración y/o disposición final por cualquier otro medio de cualquier clase de elementos orgánicos e inorgánicos, susceptibles de afectar el medio ambiente. Al efecto la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 5) \$ 50.000, representado por 50.000 acciones ordinarias y nominativas de valor nominal un peso cada una, un voto por acción; 6) Presidente: Eduardo José Gabriel García Fernández, Vicepresidente: Guillermo Juan Gainza Paz, Directores titulares: Roberto Domingo Messina, Guillermo Marcelo Sala, Director Suplente: Juan María José Paulo Viller. Dos ejercicios. Se prescinde de la Sindicatura. 7) Representación legal: Presidente o Vice indistintamente. 8) 31 de agosto.

La Autorizada
Nº 64.716

TRINITY

SOCIEDAD ANONIMA

Constitución: Escritura 19/7/93. Socios Directores: Presidente: Leonarda María Berón, argentina, soltera, empleada, 54, DNI. 4.141.589, Bolívar 364, CF; Suplente: Graciela Mirta Rotta, argentina, soltera, empleada, 38, DNI. 11.450.349, Yatay 63, CF; compraventa, elaboración, importación, exportación, distribución, consignación, productos en estado natural o manufacturado. Compraventa, permuta, alquiler, administración inmuebles. Aportes, inversiones, créditos, acciones, títulos, excluido lo previsto en ley 21.526. Mandatos, representaciones, servicios. Hotelería, gastronomía, turismo; estaciones servicio, combustibles, lubricantes, cubiertas. Capital: \$ 12.000.00. Socios suscriben por mitades. Prescinde de Sindicatura. Cierre: 30/6. Dura: 99 años. Directorio: 2 ejercicios. Castillo 273. El Abogado
Nº 35.395

YACOTE

SOCIEDAD ANONIMA

Escrit. del 15/10/93. Socios: Jacobo Tobal, nació 17/1/39, DNI. 4.286.255 y Roberto Tobal, nació 8/4/32, DNI. 4.249.309, ambos argentinos, solteros, comerciantes, domiciliados en Viamonte 2923, Capital. Duración: 99 años desde su inscripción. Objeto: Importación y exportación de todo tipo de bienes permitidos por las leyes en vigencia; compra, venta, importación, exportación, fabricación, representación, distribución, comisión, consignación y comercialización de la indumentaria para la mujer, el hombre y el niño. Capital: \$ 12.000. Administración: directorio de 1 a 5 titulares con mandato por dos ejercicios. Representación: Presidente. Ejercicio social: 31 de octubre. Sede

social: Viamonte 2923, Capital Federal. Presidente: Jacobo Tobal; Vicepresidente: Roberto Total. Director Suplente: José Fabián Silicaro. El Autorizado
Nº 35.379

ZETOS

SOCIEDAD ANONIMA

Por esc. Nº 896 del 21/10/93 pasada ante el Esc. Alberto J. Malvino, Reg. 109, Pdo. Gral. San Martín, se ha protocolizado de "ZETOS S. A." lo resuelto por Asamblea Gral. Extraordinaria del 19/5/93 sobre aumento del Capital Social y modificación de estatuto en lo siguiente: Capital Social: Aumentó a \$780.000. El capital se halla constituido por 780.000 acciones ordinarias, al portador, con derecho a 1 voto c/u y de \$ 1 valor nominal c/acción. Se ha modificado el art. 5º del estatuto social.

La Apoderada
Nº 64.697



1.2 SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ACUARIANA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Acto Privado del 15/10/93, modifica el artículo Cuarto queda de la siguiente manera: Artículo Cuarto: El capital Social se fija en la suma de Cincuenta mil pesos, que se representa en quinientas cuotas de cien pesos cada cuota, suscriptas e integradas en dinero efectivo por los socios de acuerdo al siguiente detalle: Juan Carlos Pratesi 100 cuotas, valor nominal \$ 100, cada una. Lilia Rosa Sajaroff de Juan Carlos Pratesi (hijo), 100 cuotas valor nominal \$ 100, cada cuota Julio Jorge Pratesi 100 cuotas, valor nominal \$ 100, cada cuota.

Nº 64.572

ALEMANA CONFITERIA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Por escrituras de fechas 7/9/93 y 20/9/93 se avisa que Luis Héctor Pereira cedió a Claudia Irena Sackler 40 cuotas por el precio de 40 pesos; a Ana Eulalia Costa 100 cuotas por el precio de 100 pesos; a Silvia Fanelli 100 cuotas por el precio de 100 pesos y a Genara Martínez Jara 100 cuotas por el precio de 100 pesos que tiene en la sociedad.

El Escribano
Nº 64.632

ALIM-NAT

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Acto privado del 20/10/93; Renata Wandt, comerciante, de 55 años, L.C. 3.639.283, Av. Alvear 1555, piso 10º, B. Capital y Marcos Héctor Pessah, Psicólogo, de 55 años, C.I. 3.987.745, Arenales 1259, piso 8º, Capital; argentinos y casados; "ALIM-NAT S.R.L.", Juncal 754, piso 2º "21", Capital; Plazo: 90 años; Obj.: La explotación del ramo de restaurante, la compra y venta de toda clase de artículos alimenticios y bebidas; y toda otra actividad conexas; derivada o análoga; La comercialización, importación, exportación, consignación y distribución de toda clase de productos alimenticios y comestibles; de artículos de utilería destinadas al rubro gastronómico y restaurantes. Otorgar y recibir franquicias; Cap.: \$ 12.000; Adm. los socios en calidad de gerentes, en forma conjunta, por tiempo indeterminado; Cierre ejercicio: 30/3.

El Apoderado
Nº 35.350

nos puestos bajo su tutela, proporcionando atención médica, como asimismo su asistencia de enfermería y demás auxilios que hagan a la higienización, alimentación y convivencia de los internados, que contribuyan al desarrollo de la vida diaria; b) La atención médica e internación para la rehabilitación de accidentados, sean personas menores o mayores de edad; c) La atención médico psiquiátrica para internados en general; d) Servicios de internación domiciliaria, colaborando en la asistencia de enfermería y auxiliar de enfermería a pacientes internados en sus domicilios, inmovilizados por diferentes motivos y e) La asistencia indicada en el punto a) precedente se ejercerá además, a internados que no siendo ancianos requieran de este tipo de servicios en razón de su estado físico o psíquico. Capital: \$ 10.000. Administración: a cargo de ambos socios en calidad de gerentes, en forma indistinta. Ejercicio Social: 31 de julio. Sede Social: Lezica 3917/3919, Capital Federal. La Autorizada N° 35.341

SUEDEN**SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Por documento privado del 30/3/1993 constituyese SUEDEEN S.R.L., con domicilio Lima 131 P. 5° "K", Capital; Constituyentes: Marcelo Aldo Rotondo, arg., casado, 28 años, comerciante, DNI 17.331.444, Gregorio Alfaro 376 Piso 6°, Capital; Antonio Rotondo, casado, italiano, 54 años, Cl 5.146.696, comerciante, Carlos Pellegrini 167, Loma del Mirador, Prov. Bs. Aires; Miguel Angel Rotondo, argentino, soltero, comerciante, 22 años, DNI 21.710.073, Carlos Pellegrini 167, Lomas del Mirador, Prov. Bs. Aires; Capital: \$ 12.000; Objeto: Compra, venta, importación, exportación, consignación, distribución y representación de tejidos de punto, confección y armado de prendas en general y a la fabricación de tejidos de punto; Ejercicio: 30 de junio; Administración: A cargo de un gerente en forma individual. Todos los socios son gerentes.

N° 64.574

TRANSPORTES ESCA**SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Por escr. del 21/10/93 pasada al F 581 del reg. 1284 de C.F. se constituyó TRANSPORTES ESCA S.R.L. Socios: Carlos Alberto Escarini, nacido el 17/5/52, DNI 10.330.597 y María Concepción Sabatini de Escarini, nac. el 17/8/55, DNI 11.905.782, ambos argentinos, casados, comerciantes, domic. en Moldes 230, Llavallol, Pcia. Bs. As. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros a las siguientes actividades: a) Compra, venta, fabricación, importación, exportación, fraccionamiento, confección y distribución de todo tipo de telas, hilados, tejidos, ropa, prendas, blanco, accesorios y todo relacionado con la industria textil. Teñidos, grabado y planchado de telas y prendas. Calzado y marroquinería. b) Construcción, ejecución y administración de proyectos y obras civiles, hidráulicas, viales, sanitarias, eléctricas, urbanizaciones, pavimentos y edificios, gasoductos, oleoductos, usinas, sean todos ellos públicos o privados. Construcción y refacción de edificios de todo tipo. c) Adquisición, renta, permuta, explotación, arrendamiento y/o compraventa de inmuebles ur-. Administración de consorcios para la construcción y/o loteo, incluso las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentos sobre Propiedad Horizontal. d) Podrá realizar toda clase de operaciones financieras permitidas por las leyes con exclusión de las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso público. A este objeto la Sociedad podrá dar y tomar dinero en préstamo con o sin garantía prendaria y/o hipotecaria y constituir sobre sus bienes toda clase de derechos reales. e) Transporte terrestre, marítimo o aéreo en general y en especial de carga, mediante vehículos propios o de terceros. Transporte de mercaderías generales, fletes, acarreo, encomiendas y equipajes y su distribución, almacenamiento, depósito, embalaje y guardamuebles y dentro de la actividad, como comisionista y representante de toda operación. Cap. Soc. \$ 5000. Cierre Ej. 31/1 de c/año. Sede Social: Figueroa Alcorta 7184, 8vo. "D" Cap. Fed. Duración: 99 años. Administración, Representación Legal y Uso de la Firma Social: a cargo de los gerentes: Carlos Alberto Escarini y María Concepción Sabatini de Escarini. Duración: vigencia de Estatuto.

La Escribana N° 35.416

VIDEO MOVIL**SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

1) Graciela Margarita Calvi, casada, nacida 17/VII/49, L.C. 6.134.280; Guido Naya soltero, D.N.I. 22.809.411, nacido 3/XI/72, ambos argentinos, comerciantes, domiciliados en Avda. del Libertador 4510, Capital. 2) 21/X/93. 3) VIDEO MOVIL S.R.L. 4) Córdoba 836, piso 1, Capital. 5) Compra venta y/o alquiler de equipos móviles de televisión y/o videos Walls. La explotación comercial de dichas unidades, importación y exportación de equipos móviles de televisión video Walls y sus accesorios. Servicios publicitarios en medios gráficos, televisivos, radiales y vía pública en todas sus formas y expresiones. 30 años a contar de su inscripción. 7) \$ 30.000. 8) gerentes ambos socios mientras dure la sociedad. 9) 30/XI de cada año.

El Autorizado N° 64.690

VOL-CAM**SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Acto privado del 12 de octubre de 1993; Néstor Omar Sáez, de 42 años, DNI 8.515.656, Frago 895, Ituzaingó y Héctor Eduardo Sáez, de 46 años, LE 7.785.481, Defensa 432, San Antonio de Padua; argentinos, casados y comerciantes; "VOL-CAM S.R.L."; Plazo: 99 años; Obj.: Demoliciones de edificios y excavaciones. Almacenamiento y transporte de materiales provenientes de las mismas; Constructora: realización de obras de cualquier naturaleza, incluyendo entre otros conceptos a las civiles, hidráulicas, portuarias mecánicas, sanitarias, eléctricas, edificios, barrios, caminos, pavimentos, urbanizaciones, obras de ingeniería y/o arquitectura en general, sean públicas o privadas; Comercialización, distribución, consignación y representación de todo tipo de productos primarios elaborados o semi-elaborados, manufacturados o no, relacionados con la construcción, compra, venta, permuta, explotación, arrendamiento, administración de bienes inmuebles y la realización de todas las operaciones sobre inmueble que autorizan las leyes reglamentarias de la propiedad horizontal. Importación y exportación de mercaderías, productos, maquinarias, rodados materias primas. El ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos. Cap.: \$ 7.000; Adm.: los socios en calidad de gerentes, en forma indistinta, por el término de vigencia de la sociedad; Cierre ejercicio: 31/10; Sede legal: Rodríguez Peña 431, piso 3°, Dpto. I, Capital.

El Apoderado N° 64.573

**1.3 SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES****LA FLORIDA****SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**

Asamblea General Extraordinaria 10/9/1993 resolvió aumento de capital y reforma del estatuto social. Reforma: 4) Avenida Córdoba 669, 11° piso "A", Capital Federal. 7) \$ 30.000. 8) Prescinde de la sindicatura.

El Autorizado N° 64.608

SAN PEDRO**SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**

Asamblea General Extraordinaria 10/9/1993 resolvió: aumento de capital y reforma del estatuto social. Reforma: 4) Avda. Córdoba 669, 11° p, "A", Capital Federal. 7) \$ 30.000. 8) Prescinde de la sindicatura.

El Autorizado N° 64.604

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación administrativos

SEPARATA N° 237

Decreto N° 333/85

\$ 5,-



MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL
Publicación extractada (Acordada N° 41/74 C.S.J.N.)

3.3 SUCESIONES

Se cita por tres días a partir de la primera publicación a herederos y acreedores de los causantes que más abajo se nombran para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme con el Art. 699, inciso 2° del Código Procesal en lo Civil y Comercial.

Publicación: Comienza: 27/10/93 - Vence: 29/10/93

NUEVAS

Juz. N°	Sec. N°	Secretario	Fecha del Edicto	Causante	Recibo N°
1	UNICA	Marcelo Gallo Tagle	4/10/93	JOSEFINA ARMIGNACCO	64.248
2	UNICA	Gustavo Enrique Toledo	15/10/93	VIVIANO PABLO PARRAVICINI	34.979
3	5	Marcela L. Alessandro	23/09/93	JAIME JULIO PUJOL	35.020
6	12	Juan Luis Arto	5/10/93	JUAN BAUTISTA GARIBALDI	35.001
6		Juan Luis Arto	8/10/93	FRANCISCO ANTONIO PASCUAL GRILLO	35.010
6		Juan Luis Arto	23/09/93	HECTOR OSCAR FERNANDEZ	34.985
11	UNICA	María Isabel Benavente	13/10/93	ELVIRA RODRIGUEZ Y MANUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	34.990
13	UNICA	Gustavo Pedro Torrent	13/10/93	SALINAS ABEL CECILIO	64.269
14		Eduardo Daniel Gottardi	15/10/93	DIETRICH LAABS O DIETRICH ERNESTO AUGUSTO LAABS	35.065
15	UNICA	Graciela R. Melgar	13/10/93	JUAN FERNANDEZ	35.032
15		Beatriz E. Scaravonati	18/05/93	HECTOR NORBERTO BERASTAIN Y MIRTA BEATRIZ BLOISE DE BERASTAIN	34.958
15		Graciela R. Melgar	14/10/93	ROGELIO LIBERTO Y JOSEFA HURTADO DE LIBERTO	34.969
16	UNICA	Luis Pedro Fasanelli	8/10/93	GREGORIO CALABRO	35.034
16	UNICA	Luis Pedro Fasanelli	15/10/93	LIDIA PINDUR DE PONCE	34.999
17		Raquel Elena Rizzo	13/10/93	ELSA FRIDA KOGNA	34.975
19	UNICA	Alejandro G. Petrucci	13/10/93	ELSA BEATRIZ GONZALEZ DE OJEDA	35.022
19	UNICA	Alejandro G. Petrucci	13/10/93	JOSE JULIO VARELA	34.973
20	UNICA	Celia Angeles Pérez	4/10/93	MARIA CALDERONE	34.981
20	UNICA	Celia Angeles Pérez	14/10/93	OLGA IGLESIAS DE MOURE	34.991
22	UNICA	Fernando L. Spano	14/10/93	JORGE GUILLERMO HERSCHEL	35.068
22	UNICA	Fernando L. Spano	5/10/93	MARIA ESTHER SCHAWALD	34.998
24	48	José María Ferrone	27/09/93	RAMON MATO AGRA	64.237
28		Mónica C. Fernández	14/10/93	JOSE ANDREU	35.050
28	UNICA	Mónica C. Fernández	1/10/93	EVARISTO DIAZ	34.994
28	UNICA	Mónica C. Fernández	14/10/93	LEVINGSTON CARLOS RAUL	64.295
31		Ricardo Adolfo Leyba	4/10/93	RICARDO BENITO CUIROLO	34.982
34		José María Pérez	23/09/93	MARIA TERESA RICCA	34.957
36	UNICA	Guillermo Valentini	22/09/93	DOMINGUEZ, RAFAEL ENRIQUE	35.048
36		Guillermo Valentini	9/09/93	TOMAS SALZMAN	34.986
37	UNICA	Gustavo Daniele	13/10/93	FRANCISCO JESUS AREAL Y CORINA RAFAELA OLIVA NADDEO DE AREAL	35.043
37	UNICA	Gustavo Daniele	25/08/93	ELIAS BACHUR	34.977
39		Horacio Oscar Sterin Carmona	14/10/93	SEPTIMIA CLOTILDE BODRATI	35.006
39	UNICA	Horacio Oscar Sterin Carmona	12/ /93	PORTNOY, GREGORIO ENRIQUE	34.978
41	UNICA	José Antonio Charlin	8/10/93	HECTOR PANDOLFI	34.984
42	UNICA	Julio Carlos Speroni	15/10/93	RICARDO BRAULIO SCHENONE	35.059
44		Fernando O. Galán	15/10/93	JULIO CESAR BRIZUELA SANCHEZ	64.309
44		Fernando O. Galán	8/10/93	RICARDO ERNESTO PALIA	35.066
44	UNICA	Fernando O. Galán	8/10/93	ALCIDES ELIAS PUENZO	35.030
44	UNICA	Fernando O. Galán	14/10/93	RAMON VARELA	35.063
44	UNICA	Fernando O. Galán	15/10/93	FAMINA ELBA URLACHER	34.976
44	74	Fernando O. Galán	13/10/93	MARIA ANGELICA ZEGARRA	64.207
47	UNICA	Silvia R. Rey	14/10/93	ELSA PRINCIPI	35.058
47	UNICA	Silvia R. Rey	12/10/93	ANTONIA VAZQUEZ	35.064
50		Juan C. Insúa	28/09/93	VITAUTAS IGNACIO PADVALSKIS	64.254
51		Jorge A. Cebeiro	13/10/93	CATALINA JUANA RABANO Y VICENTE CASSINO	34.962
54	UNICA	Paula I. Stanislavsky	8/10/93	ENRIQUE CELESTINO ROSA	64.257
55		Olga M. Schelotto	7/10/93	CAROLINA GAREGNANI	34.959
57		Carlos Roberto Garibaldi	7/10/93	DOMINGO ANTONIO DE CARLO Y MARIA DONATA GIACOMINO	34.954
57	UNICA	Carlos Roberto Garibaldi	13/10/93	MARIA CAROLINA CASTILLA DE BLANCO	35.016
58		Viviana Fernández Seoane	12/10/93	CARMELO RODOLFO ZAPPALA	34.961
59	UNICA	Adolfo E. Granillo Ocampo	14/10/93	OSCAR AMERICO IBORRA	34.966
59	UNICA	Juan Pablo Rodríguez	12/10/93	JULIO ENRIQUE MARANDET	34.971
60	UNICA	Enrique C. Virto	22/09/93	CARLOS ALBERTO CAPALBO	35.067
61		Eduardo José Gorris	30/09/93	ANDRES BERNARDO	35.028
61	UNICA	Eduardo José Gorris	9/09/93	VIRGINIA ANGELA CALVEYRA GIANNETTI	35.007
61	UNICA	Eduardo José Gorris	19/10/93	PEDRO VENTURA BALLINES	35.044
62	92	Dolores Miguens	19/10/93	MARIA JOSEFINA MENDEZ	64.340
63	UNICA	Gabriela Paradiso Fabbri	12/10/93	JULIO COGO	64.211
64	UNICA	Liliana Abreut de Begher	4/10/93	IRMA HAYDEE CODESIDO, L. C. 232.637	35.000
64	UNICA	Liliana Abreut de Begher	27/09/93	GARCIA MARIA JOSEFA	35.011
64		Liliana Abreut de Begher	6/10/93	HUMBERTO CAPOLONGO Y/O DOLORES ANATILDE BONIFACIO	35.014
65	UNICA	Ruben D. Orlandi	4/10/93	MARIO DE MARCO O MARIO DI MARCO	35.009
65	UNICA	Ruben D. Orlandi	4/10/93	ZULEMA SACRISTAN	35.057
68		Marcelo G. Calabrese	4/10/93	LEONOR ZULEMA PEREZ	34.970
68		Marcelo G. Calabrese	14/10/93	DILMA MARIA ROSA	35.026
68	UNICA	Marcelo G. Calabrese	14/10/93	AIDA HORTENSIA MARZULLO	34.952
72	UNICA	Daniel H. Russo	18/10/93	SILVIA CHIMENTI	35.005
78		Isabel E. Núñez	12/10/93	MOLINARI DE ROSSI, ARMINDA MARGARITA	35.052
78	UNICA	Isabel E. Núñez	12/10/93	RAMON ELEUTERIO OSIMANI Y RAIMUNDA ESTELA OSIMANI	35.055
79	UNICA	Ana M. Kruls de Molina Portela	15/10/93	RICARDO EMILIO VAZQUEZ	34.989
79	UNICA	Ana M. Kruls de Molina Portela	7/10/93	FAIGENBAUM PEDRO	34.992
80	UNICA	María Elena Ucar	4/06/93	MARCIANO CACERES	35.003
89	UNICA	Daniel Guillermo Alioto	22/09/93	ENRIQUE ROSANES	64.298
91		Alberto Ugarte	8/10/93	PANTALEON CELI	34.997
91		Alberto Ugarte	15/10/93	ELINA CASADO	34.987
91	UNICA	Alberto Ugarte	15/10/93	MAURICIO BIRGIN	34.953
93		Marta Susana Gastaldi	30/09/93	FRANCISCO LIGUORI Y EUFEMIA ROSA DELUCA	34.996
96	25	Ricardo A. Busto	7/09/93	FRANCISCO ORTEGA Y DOLORES ELIAS FUENTES DE ORTEGA	34.951
97		Guillermo C. Mercado	22/09/93	PEREZ MIGUEL FRANCISCO	34.968
97	UNICA	Guillermo C. Mercado	8/10/93	MARIA ROSALIA MIGUENS	34.983
97	28	Guillermo C. Mercado	13/10/93	MARIA ESTHER RIPOLL	35.004
98		José Luis González	13/10/93	MARIO ALFREDO MIÑO	35.024
98		José Luis González	15/10/93	SELVINA COUSO	35.008
98		José Luis González	13/10/93	DOMINGO HERNANDEZ	34.463
99		María N. Coccia	13/10/93	ADOLFO ANTONIO DIAZ	34.955
103	UNICA	Luis José Carballido	20/09/93	REBECA SCHLIAJT VIUDA DE YAROSCHEVSKY	64.283
104	UNICA	Adrián H. Elcuj Miranda	12/10/93	JUAN MANCUSO Y MARIA MAGDALENA MARTINEZ	35.041
104	42	Adrián H. Elcuj Miranda	15/10/93	MARTIN PETRANTONIO	34.974
105		Daniel Pittala	15/10/93	SOFIA NATALIA ALBERTELLI VIUDA DE PERAZZO	35.045
109		José Luis Bourmisen	15/10/93	MARTA GRACIELA VIGNO	35.069
110	UNICA	María Clara Lagache	5/10/93	JULIO NICOLAS QUIROS	35.002

importe adeudado, con obligación de depositar en la Secretaría Actuarial la póliza en cuestión y acreditar el pago de las primas pertinentes. Exhibición: los inmuebles pueden visitarse los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre de 1993, de 9 a 13 horas. Deudas: Obras Sanitarias de la Nación: \$ 28.722 (fs. 162) al 15/7/91. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Alumbrado, Barrido y Limpieza): \$ 19.144 del expediente N° 17.295 al 4/12/89).

Buenos Aires, 13 de octubre de 1993.
Federico Santiago Johnson, secretario.
e. 27/10 N° 35.106 v. 2/11/93

JUZGADOS NACIONALES DEL TRABAJO

N° 35

Juzgado Nacional del Trabajo N° 35 a cargo del Dr. Jorge Luis Blake, Secretaria Única del autorizante, sito en Lavalle 1268 PISO 4° Capital Federal, comunica por dos días en los autos caratulados "SOTELO ALFREDO c/QUEIRUGA DE GAIMARO CARMEN s/Despido" (Exp. N° 47.287/87) que el martillero Pedro Bascoy rematará el día 4 de noviembre de 1993, a las 12,30 hs. en la Asociación de Martilleros, Talcahuano 479 Capital Federal, el inmueble sito en Billingham 2143/47 Piso 2° Unidad Funcional 18 Dto. "B" Matrícula 19-2795/18, Nomenclatura Catastral, Circ. 19, Sección 15, Manzana 51, Parcela 16-a; Sup. total 55 m² 34 dm² a Fs. 364. M.C.B.A. deuda al 23/9/93 \$ 502,71, a Fs. 386; O.S.N. deuda al 14/7/92 \$ 3585,05 más \$ 154,32 a Fs. 303/304; Expensas no tiene deuda al 31/5/92 a Fs. 294; esta ocupado según constatación efectuada, por el Sr. Mario Alejandro Vicci y su esposa, según manifiestan la ocupan en calidad de inquilinos desde el mes de junio de 1993 y tienen contrato por dos años, el inmueble consta de tres ambientes y se encuentra en buenas condiciones de conservación, el lavadero tiene un poco de humedad en el techo. El 50 % indiviso del inmueble se subastará con la Base de \$ 11.522,30, Señal 30 %. Comisión 3 %, al contado y al mejor postor todo en dinero en efectivo en el acto de la subasta. El comprador deberá constituir domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de que las sucesivas providencias se le tendrán por notificadas en la forma y oportunidad previstas en el Art. 133 del Código Procesal y deberá efectivizar el pago del saldo de precio dentro de los cinco días de aprobada la subasta, bajo apercibimiento que prevé el Art. 580 del Cód. Psal. El bien se visitará los días hábiles de 10 a 12 hs. a partir de la publicación de este edicto.

Buenos Aires, 5 de octubre de 1993.
Beatriz Ethel Ferdman, secretaria.
e. 27/10 N° 35.167 v. 28/10/93

N° 51

Juzgado Nacional de Trabajo N° 51, a cargo del Dr. Mario E. Zuretti (h.), Secretaria Única, con asiento en Lavalle 1268 P° 4 de Capital Federal, comunica por un día en autos "VIDELA GENOUD, DANIEL ALEJANDRO c/ESTS. METS. DE POLI S.A. s/Despido" (Exp. N° 6271/89) que el martillero Norberto E. Baqué rematará el 2 de noviembre de 1993 a las 10,30 horas en Humberto I N° 2042, Capital donde se exhiben los días hábiles de 9 a 12 horas los siguientes bienes: Una computadora compuesta por un módulo Texas/Instruments N° 2147, monitor Texas/Instruments code 3046 serial 4030651, una impresora Epson LX 810 serial N° DA50343360, un teclado Texas/Instruments serial 0464S18641; una fotocopiadora Monroe RL 725 RE serie 330481 con transformador; una computadora compuesta por módulo N° 2352, un monitor code 32M35000/40 y teclado; una computadora compuesta por un módulo serie N° 9263870047, un monitor modelo TX14M 5ET N° 2544251-0002, una impresora N° 2886050016 y teclado 007742 todos marca Texas/Instruments; dos aparatos de aire acondicionado Conqueror, uno de ellos sin caja. Sin base. Al contado y mejor postor. Señal 30 %. Comisión 10 %. En efectivo. Los adquirentes deberán constituir domicilio en Capital Federal y depositar el saldo de precio dentro de los cinco días de aprobada la subasta (Art. 580 C.P.C.C.). Mario Ernesto Zuretti (h.), juez nacional.

Buenos Aires, 20 de octubre de 1993.
Blanca Estela Zufiaur de Pessarini, secretaria.
e. 27/10 N° 64.503 v. 27/10/93

N° 57

Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 57, a cargo de la Dra. María I. Locatelli de Muñoz, Secretaria Única de la Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara, comunica por dos días en autos: "FERREYRA, MARIA CRISTINA y Otros c/COOPERATIVA DE PROVISION DE FARMACIAS, CONSUMO Y VIVIENDA PALERCO LIMITADA s/Despido", Expte. N° 32.546, que el martillero Manuel A. Chavarría, rematará al contado y mejor postor, el día 3 de noviembre de 1993, a las 10,30 horas, en el salón de ventas de la calle Tacuarí 647 de la Capital Federal, el inmueble sito en la calle Jufre 241, entre las de Aráoz y J. Alvarez, de la Capital Federal. Nomenclatura Catastral: Circ. 18, Manz. 74, Sección 31, Parcela 17. Matrícula: 18-10619. Título de propiedad agregado en autos a fs. 183/194. Deudas: Municipalidad de Buenos Aires, informe del 16/9/93, fs. 339/43, \$ 5.186,94. Obras Sanitarias Residual, informe del 8/10/93, fs. 354/56, \$ 766,72. Aguas Argentinas, informe del 23/9/93, fs. 344/46, \$ 210,74. Todas las deudas ajustables al momento de su efectivo pago. Según constatación obrante en autos, se trata de un amplio depósito desocupado, con oficinas al frente en planta baja y planta alta, con entrada para vehículos y dársena para carga y descarga. También dispone de oficinas en el fondo en planta baja y primer piso, desde el cual se accede a una terraza donde hay construido un quincho con parrilla, mesada y cocina. El inmueble dispone de varios vestuarios y sanitarios, todo en buen estado de conservación. La propiedad podrá ser visitada los días 29 de octubre y 1 y 2 de noviembre de 1993, de 9 a 11 horas. Base: \$ 110.000, Señal: 8 %. Comisión: 3 %. El comprador deberá constituir domicilio dentro del radio de la Capital Federal, bajo apercibimiento de que las sucesivas providencias se tendrán por notificadas en la forma y oportunidad previstas por el Art. 48 de la L.O. Buenos Aires, 19 de octubre de 1993.
Gloria M. Pasten de Ishihara, secretaria.
e. 27/10 N° 64.504 v. 28/10/93

Tesoro. Certificación legal de los contratos. Ley 23.696. Alcance. Comisión Bicameral. Competencia.

CONTRATO DE UNDERWRITING: Concepto. Objeto. Instrumentación.

ADMINISTRACION PUBLICA: Ley 24.156.

JURISDICCION: Prórroga. Fundamentos. Inmunidad. Ausencia de reglamentación. Excepciones.

INMUNIDAD SOBERANA: Alcance.

LEY: Intención del legislador. Ley especial y ley general. Conflicto. Ley especial posterior. Aplicación.

PROCURACION DEL TESORO: Competencia. Cuestiones técnicas. Exclusión.

DICTAMEN 95/93
6-7-93

La ley 24.145 estableció las alternativas, modalidades y procedimientos de la privatización de Y.P.F. Sociedad Anónima; fijando en el procedimiento de selección del co-contratante, pautas para la actuación del Poder Ejecutivo en el trámite de la venta.

De la comparación de las cláusulas generales de la ley 23.696 y de las disposiciones específicas de la ley 24.145 —referida a la privatización de Y.P.F. Sociedad Anónima— surge que esta última actúa como ley especial y posterior frente a la primera, a la que sólo podría acudir en ausencia de norma expresa que reglamente la materia específica.

Si estando en vigor un determinado régimen normativo el legislador halló mérito para la sanción de uno diferente, pese a que su texto se oponía al anterior, no resulta adecuado poner en duda la intención legislativa sino, por el contrario, juzgar que la oposición debe resolverse en favor de la norma dictada en segundo término (conf. Dict. 201:205; 76:341; 115:56 y 512).

Con relación a la privatización de Y.P.F., el artículo 1 del decreto 588/93 resulta de suma importancia para el examen del diseño y los contratos suscriptos para la transferencia de acciones, en tanto remite a la utilización de las prácticas usuales en las bolsas y mercados bursátiles en los que se realizara la colocación. Así se ha contemplado la celebración de un contrato de underwriting, con entidades financieras de reconocido prestigio en el ámbito nacional e internacional y la operatoria del "book building" para determinar el precio de referencia y corte.

A los efectos de materializar la venta de acciones de Y.P.F. Sociedad Anónima, en el marco indicado por el artículo 9° de la Ley 24.145, se ha optado por elegir el sistema denominado de "underwriting", mediante el cual la colocación se realiza a través de bancos que se encargan de ella y que sólo quedan como propietarios definitivos de las acciones en caso y en la medida que no fueran absorbidas por el mercado.

Para la instrumentación de un proceso de underwriting, es necesaria la designación de uno o más coordinadores globales —normalmente bancos o instituciones de reconocido prestigio financiero— y de un sindicato de bancos u otras entidades colocadores de las acciones, seleccionados en las diversas plazas en las cuales habrán de ofrecerse tales valores mobiliarios.

En el sistema de colocación de acciones llamado "método de la tabla de demanda" o "book building tender", al finalizar el período de formación del libro de registro de intenciones de compra ("book"), los colocadores, junto con el emisor o vendedor (en el caso el Estado Nacional), examinan la totalidad de los registros asentados y así es posible determinar cuál es la oferta y el precio óptimo y la creación de una base de inversores de alta calidad.

La fijación del precio de las acciones de Y.P.F. Sociedad Anónima, así como la determinación del valor de venta definitivo y los cupos de acciones a venderse son cuestiones de mérito, oportunidad y conveniencia, ajenas a la competencia específicamente jurídica de la Procuración del Tesoro.

Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor (conf. Dict. 317/91).

La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico de la Procuración del Tesoro, debe realizarse de conformidad a los informes técnicos de los especialistas en la materia, sin que quepa entrar a considerar aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia (conf. Dict. 317/91).

Los principios rectores de todo el sistema de privatización establecido por la ley 23.696 y sus disposiciones reglamentarias, pueden resumirse en la necesidad de procurar que en los procedimientos para la selección del co-contratante se preserven e impulsen, en grado máximo, la publicidad, la transparencia, la concurrencia, la igualdad y el resguardo de otros intereses de la comunidad.

El contrato de underwriting es atípico, propio del mercado de capitales y sin regulación legal orgánica; con el cual se supera una eventual falta de interés de los socios o de los mercados donde se pretenda colocar las nuevas acciones, asegurándose la colocación de la emisión.

El contrato de underwriting no versa respecto de la colocación de acciones que se emiten y libran a la suscripción sino que tiene por objeto acciones ya emitidas que su titular busca liquidar, figura ésta propia de procesos privatizadores (conf. Dict. 198:178 y 199:203).

La opinión que se solicita al procurador del Tesoro de la Nación resulta enmarcada en los contenidos de la certificación legal respecto de los Contratos de Colocación en la Argentina, de Colocación en los Estados Unidos y de Suscripción, con relación a la venta de acciones de Y.P.F. Sociedad Anónima, no estando sujetas a examen las materias ajenas a aquellos contenidos.

El artículo 14 de la ley 23.696 fijó la competencia de la Comisión Bicameral, otorgándole facultades tales como la de constituir y ejercer la coordinación entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional, a los efectos del cumplimiento y de los resultados de las privatizaciones y participación del capital privado.

La Comisión Bicameral creada por el artículo 14 de la ley 23.696 es, en el régimen del artículo 17 de la ley 24.145, el órgano legislativo de control con competencia especial para intervenir en el proceso de privatización de Y.P.F. (conf. Dict. 81:142 y Fallos 189:156).

La parcial derogación del régimen de control técnico-administrativo regulado por el artículo 20 de la ley 23.696, puede estarse subsistente para su aplicación por vía analógica, de concurrir observaciones o sugerencias emanadas de los entes públicos a quienes ahora correspondan intervenciones principales en cuanto al examen de la conveniencia, oportunidad o legitimidad de los actos de privatización.

Los contratos, con relación a la venta de las acciones de Y.P.F. Sociedad Anónima, se apoyan en las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para ejecutar la operación, delegadas en el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, que surgen de la distribución de competencias de los

5. Información y Cultura

DICTAMENES DE LA PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION

PRIVATIZACIONES: Y.P.F. S. A.: Venta de acciones — Fijación del precio — Alcance de la Ley 24.145 — Cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia — Intervención de la Procuración del Tesoro — Certificación legal de los contratos — Ley 23.696 — Alcance — Comisión Bicameral — Competencia.

CONTRATO DE UNDERWRITING: Concepto — Objeto — Instrumentación.

ADMINISTRACION PUBLICA: Ley 24.156.

JURISDICCION: Prórroga. Fundamentos — Inmunidad — Ausencia de reglamentación — Excepciones.

INMUNIDAD SOBERANA: Alcance.

LEY: Intención del legislador — Ley especial y ley general — Conflicto — Ley especial posterior — Aplicación.

PROCURACION DEL TESORO: Competencia — Cuestiones técnicas — Exclusión.

PRIVATIZACIONES: Y.P.F. S. A. Venta de acciones. Fijación del precio. Alcance de la Ley 24.145. Cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia. Intervención de la Procuración del

artículos 67 y 86, inciso 1º, de la Constitución Nacional y de las disposiciones de las leyes 23.696 y 24.145, así como de los acuerdos suscriptos por el Estado Nacional con las provincias con derecho a adquirir acciones, y de los decretos 2110/92, 588/93 y complementarios.

La "inmunidad soberana" no resulta un beneficio correlativo de la actuación de los Estados "iure imperii", exclusivamente, sino que constituye una excepción genérica al sometimiento de otros países a los tribunales del propio Estado, sin su consentimiento previo.

La facultad para suscribir la cláusula referida a la prórroga de jurisdicción por parte del Poder Ejecutivo Nacional recibe sustento tanto del artículo 1º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, como del texto actual del artículo 48 de la ley complementaria permanente de presupuesto, que mantiene su vigencia en este aspecto, en tanto no ha quedado alcanzado por la derogación genérica del inciso c) del artículo 137 de la ley 24.156, toda vez que no aparece en contraposición con sus normas.

La legislación argentina no ha reglamentado la materia concerniente a la facultad estatal de conceder o renunciar a la inmunidad de jurisdicción, salvo para casos excepcionales contemplados en el decreto 9015/63, y por el artículo 7 de la ley 20.548, modificatorio del artículo 48 de la ley 16.482, incorporado a la ley 11.672 permanente de presupuesto de la Nación.

En nuestro sistema jurídico los decisorios de los tribunales alcanzan solamente al caso concreto que se juzga, en contraposición al sistema de precedentes jurisprudenciales obligatorios, característico del derecho anglosajón; aquellos fallos carecen de virtualidad para alterar la vigencia y efectos de las normas que analizan, ciñéndose a desechar su aplicación en el juicio particular sobre el que se expiden (conf. Dict. 53/93).

DICT. 95/93
6-7-93

Expte. N° 020-000674/93
y agregados s/acumular.
Mrio. de Economía y Obras
y Servicios Públicos
PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION

Buenos Aires, 16 Jul. 1993

SEÑOR PROCURADOR DEL TESORO

I. 1. El Señor Secretario de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, compartiendo el criterio del Señor Subsecretario Legal, ha requerido dictamen y opinión legal de esta Procuración del Tesoro, con relación a la venta de las acciones de YPF Sociedad Anónima.

La opinión legal del Señor Procurador del Tesoro de la Nación, ha sido contemplada en los artículos 6º, inciso d) de los Contratos de Colocación de Acciones en los Estados Unidos de América y de Suscripción para la colocación europea, y 6º, inciso c), del Contrato de Colocación argentina, suscriptos entre el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación —en nombre de la República—, un conjunto de Bancos como "underwriters" e YPF Sociedad Anónima, destinados a la venta y colocación de acciones clase "D" de esta última sociedad, en bolsas y mercados bursátiles nacionales e internacionales (ver fs. 1373/1378 y 1379).

El Señor Procurador del Tesoro ha entendido, por resolución N° 32, dictada con fecha 2 de julio del corriente año, que el dictamen solicitado no puede tener otra finalidad que la de servir de sustento a la opinión legal contemplada en los contratos precedentemente mencionados, toda vez que dicho dictamen no ha sido peticionado con antelación a los actos dispuestos, por el Poder Ejecutivo Nacional o por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, con motivo de dicha venta.

A raíz de ello, ha resuelto encomendar al suscripto la emisión y firma de un dictamen referido a los aspectos jurídicos de la venta de acciones de YPF S. A. en poder del Estado Nacional, en la medida requerida por los contenidos de aquella certificación prevista en los contratos.

2. — Por lo tanto, me limitaré a examinar los aspectos jurídicos de la venta de acciones de YPF S. A., en poder del Estado Nacional, que se concretara mediante la formalización y cumplimiento de los contratos arriba expuestos, involucrados por los términos del proyecto de opinión legal acordada con el conjunto de bancos underwriters.

En consecuencia, se encuentran excluidas de la materia en estudio en el presente dictamen las cuestiones legales no vinculadas directamente con la operatoria de venta, ni aquellas otras de naturaleza técnica; económica o de mérito, oportunidad y conveniencia; tales como, entre otras, las vinculadas con el manejo societario hasta la privatización, el resultado de la tasación previa de la sociedad y de su capital accionario, la selección de los bancos underwriters y la contratación de asesores especiales, la retribución de los mismos, la determinación de los precios de referencia, la equidad o la inequidad de las fórmulas contractuales, el precio final fijado y la cantidad de acciones que fueran objeto de venta.

Por lo demás, es del caso destacar que estas últimas cuestiones resultan de por sí ajenas a la competencia funcional de este organismo asesor de derecho, tal como se desprende de su inveterada y pacífica doctrina (cfr. Dictámenes: 105:120; 115:224; 125:273; 129:298; 159:246 163:3; 167:46; 170:69; 191:65; y 195:90, entre muchos otros).

3. — No obstante ello, parece imprescindible poner de relieve que según resulta de las constancias que se han agregado —y lucen a fs. 3, 4, 6 y 51 del expte. "Nota s/n° 13 de mayo de 1993" del registro de esta organismo, que se ordenara agregar, sin acumular, a los actuados" el Procurador del Tesoro, cursó, oportunamente, notas a la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, a fin de requerir, a los organismos de contralor contemplados en la legislación general y especial aplicable al caso, que de encontrar elementos que obstaren a la emisión de la certificación legal mencionada lo comunicaran con anticipación a la firma (o entrega) a las contrapartes interesadas de la misma.

Se acompañó a tales notas toda la documentación que se recibiera del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, sobre cuya base se iniciaron los estudios que se vuelcan en este dictamen y en la citada opinión, legal, con el propósito de procurar facilitar el mejor ejercicio de los controles administrativos y parlamentarios establecidos para este tipo de operatorias.

Con la limitación que surge de los conceptos antes expresados, procederé a realizar el examen de estas actuaciones.

II. — 1. — Se inician estos actuados con la nota de fecha 14 de marzo de 1993, del presidente de YPF Sociedad Anónima, dirigida al Señor Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos informando que el Directorio de dicha empresa había dispuesto la contratación de asesores financieros, jurídicos, técnicos y de auditoría externa, a fin de satisfacer los requisitos de registración de acciones en las bolsas y mercados de valores nacionales e internacionales.

A tal fin, indica que en el mes de octubre de 1992 había convocado a concurso para la contratación mencionada, resultando seleccionadas las firmas denominadas ... como asesores financieros; ... como asesor legal; ... como auditor externo; y ... como auditores técnicos.

En base a ello, consideró que YPF estaría en condiciones de cumplimentar sus obligaciones como sociedad emisora de acciones, en la oportunidad y forma en que el Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos lo dispusiera (ver fs. 1/2).

2. — Posteriormente, obra el informe elevado por el Subsecretario de Financiamiento al Secretario de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa, en el que evalúa las condiciones de los tres grupos que se presentaron a la selección de Coordinador Global para la venta pública de las acciones de YPF, cuyas presentaciones fueron agregadas por cuerda separada por razones de buen orden procesal (ver fs. 22/26 y anexos que se agregan sin acumular, según constancia de fojas 42 vuelta, en los que obran las presentaciones formuladas por los distintos grupos).

En el precitado informe se señala que tales grupos fueron ...; ...; ...

Como conclusión, se opinó que sería aconsejable la contratación, para dicha función, a las dos firmas mencionadas en último término.

3. Obra a fojas 27 el dictamen jurídico N° 89259 —del 16 de abril de 1993— de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, según el cual, no habría objeciones que formular al proyecto de resolución por el que se propiciara la contratación referida con fundamento en el artículo 2º, inciso a), del decreto 588/93.

Por resolución M. E. y O. S. P. N° 386, del día 16 de abril de 1993, se designó a ... y a ... como Coordinadores Globales conjuntos (v. fs. 28/32), obrando a fs. 33/41 las constancias de las notificaciones efectuadas a los bancos designados y su recepción.

4. — Por providencia sin fechar, agregada a fs. 42, el Señor Subsecretario legal ordena la acumulación a este expediente de la documentación referida al proceso de privatización y venta del capital accionario de YPF S. A., que se concreta respecto de los siguientes expedientes: M. E. y O. S. P. N° E.040-005899/93, E.040-005934/93, E.040-006436/93; Acuerdo N° 1061/93; Exptes. Y.P.F. N° 770.029/93 y 770.033/93 y Acuerdo N° 1885/93.

5. — Se agrega seguidamente el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos N° 895457 —del 27 de mayo de 1993—, referido a la consulta respecto de un proyecto de decreto por el que se propiciaba el establecimiento de determinadas medidas operativas y reglamentarias relativas al proceso de privatización de YPF S. A. El citado Servicio Jurídico expresó que no hallaba objeciones que formular al proyecto (ver fs. 43/44).

A raíz de ello, el apuntado proyecto fue elevado a la firma del Poder Ejecutivo Nacional, obrando a fs. 45/48 copia certificada del decreto 1108/93 dictado en su consecuencia.

6. — Se agrega a partir de fs. 51 una nota del ... —Vicepresidente de Asuntos Legales de YPF S. A.—, de fecha 23 de junio de 1993, remitiendo a la Secretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa la documentación que habría requerido la Procuración del Tesoro de la Nación.

Con dicha nota se señala acompañar copia del expediente de la Secretaría de Energía N° 770.030 sobre finalización Plan de Transformación Global de YPF S. A.; nota referida a la tasación de YPF S. A., emitida con relación a la valuación efectuada por el First Boston/Merrill Lynch; copia del Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 8 de fecha 28 de mayo de 1993; copia del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 9, de fecha 11 de junio de 1993; copia del Acta de Directorio N° 99, de fecha 14 de junio de 1993; copia de la resolución N° 10.094 de la Comisión Nacional de Valores, que autoriza "... a YPF SOCIEDAD ANONIMA el ingreso al régimen de la oferta pública de la totalidad de las acciones que componen el capital social de VALOR NOMINAL PESOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES (V\$N 3.500.000.000)" (art. 1º), autorización que quedó condicionada a la aprobación del prospecto definitivo (conf. art. 2º).

Se acompañó también un gráfico que informa sobre el estado de situación de los arreglos con las provincias hidrocarburíferas; copia de la Memoria correspondiente al ejercicio 1992; copia de la Memoria y Estados Contables al 31 de diciembre de 1992 y 1991, juntamente con el Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora; y fotocopia de protocolización e inscripción en la Inspección General de Justicia de la sociedad, bajo el N° 5109 del libro 113.

7. — Obra a fojas 329 nota del Señor Subsecretario legal del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a la Dirección Nacional de Impuestos —del 23 de junio de 1993— solicitando la certificación de esa Dirección para respaldar la opinión legal de la Procuración del Tesoro de la Nación, requerida en los contratos respecto de este tema.

A tal fin adjuntó, como Anexos A, B y C la documentación pertinente a efectos de que se emitiera tal certificación sobre la oferta pública de acciones clase D y respecto de la legislación impositiva nacional.

Se agregó seguidamente providencia S. I. P. N° 8502/93 del Señor Secretario de Ingresos Públicos, de fecha 25 de junio de 1993 (fs. 337), que remitiera las actuaciones con el Memorando N° 510 del 24 de junio de 1993 que contiene el informe de la Dirección Nacional de Impuestos solicitado.

En dicho pronunciamiento, la Dirección requerida informa respecto del tratamiento que la adquisición, tenencia y disposición de acciones clase D de YPF S. A. tiene en la legislación argentina, analizando lo vinculado a los impuestos a las ganancias; sobre los activos y sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico; al valor agregado; de sellos nacional y otros tributos nacionales.

8. — Por nota de fecha 24 de junio de 1993, el Presidente del Banco de la Nación Argentina remite la tasación de YPF S. A. efectuada por la Gerencia Técnica del ex-Banco Nacional de Desarrollo (fs. 338 y 339/350), agregándose también copia de la nota del 21 de junio de 1993 remitida por ... (en idioma inglés) referida a la valuación de YPF S. A. (fs. 351/353).

9. — Se han anexado a fojas 355/371 la nota N° 1271 y el informe de la Sindicatura General de la Nación, del 28 de junio de 1993, relacionado con la privatización de YPF S. A.

La precitada opinión, en primer lugar, examinó el sistema de colocación de acciones denominado Book Building sin formular objeción alguna a su respecto.

En segundo término, analizó los criterios de valuación de la empresa en cuestión utilizados por los Coordinadores Globales, y su comparación con otros métodos de valuación, concluyendo que si bien no poseía todos los datos tomados como base para la misma, ésta era razonable.

Por último, analizó el criterio de valuación tenido en cuenta por el BANADE y expresó que, salvo diferencias no relevantes, este criterio guardaba coherencia y razonabilidad con el de los Coordinadores Globales.

En ese dictamen se agrega también un análisis de los ASPECTOS JURIDICOS, a partir del examen del Prospecto, del Convenio de Underwriting y de las cláusulas de Prórroga de Jurisdicción, sin hallar objeciones que formular.

10. — La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos dictamina, a fojas 372/375 con relación a los proyectos de contratos de "underwriting de acciones", "underwriting agreement" y "subscription agreement", cuyos proyectos se glosaron a fojas 380/520. En dicho asesoramiento se entendió que "... los mismos se adecuan a las disposiciones legales vigentes, no existiendo objeciones legales que impidan su suscripción por parte de los representantes del Estado Nacional, con efectos vinculantes para este último".

Un nuevo dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos premencionada, se pronuncia a fojas 521, en el que se manifiesta que no existen objeciones legales a un proyecto de resolución ministerial por el cual se propicia aprobar los contratos examinados en el dictamen anterior.

11. — Por resolución M. E. y O. S. P. N° 678, del 25 de junio de 1993, fue aprobado el texto definitivo de los Contratos de Colocación de Acciones, de Colocación de Acciones en los Estados Unidos de América y de Suscripción de Acciones (fs. 523/526), obrando en anexos I, II y III de dicha resolución los respectivos contratos (ver fs. 528/553, 554/612 y 613/714, y 715/770 y 771/894, respectivamente con sus traducciones).

12. — A fojas 895 obra el dictamen del 25 de junio de 1993, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, sobre un proyecto de resolución ministerial que propicia establecer determinada normativa a los efectos de impulsar el proceso de oferta de compra de Boques que ordena el decreto 1253/93, manifestando no tener objeciones que formular al mismo.

Se agrega luego fotocopia certificada de la resolución M. E. y O. S. P. N° 679, del 25 de junio de 1993 (fs. 896/903), dictada a los fines expuestos en el párrafo precedente.

13. — Con motivo de propiciarse la firma de otro proyecto de resolución ministerial, destinada a regular el perfeccionamiento de la privatización de activos de YPF S. A., contemplado en el anexo I de la ley 23.696, con la ampliación del artículo 7° de la ley 24.145 y a convocar Asamblea General Extraordinaria de YPF a tales fines y con el propósito de instrumentar la transferencia de las acciones de se requiere nuevo dictamen del Servicio Jurídico, el que se pronuncia favorablemente a fojas 910.

Se ha glosado a fojas 906/908 copia certificada de la resolución M. E. y O. S. P. N° 680/93, que formaliza el proyecto a que se hiciera mención en el párrafo anterior.

Esta última resolución aparece contemplada por su posterior N° 682/93, que autoriza al Secretario de Energía a suscribir con YPF S. A. un convenio destinado a cumplimentar los actos pendientes de la privatización contenidos en el anexo I de la ley 23.696, con la ampliación dispuesta por el artículo 7° de la ley 21.145, que previo dictamen favorable del Servicio Jurídico ministerial (fs. 911) se agrega en copia certificada a fojas 912/913, glosándose luego la copia del Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 10 y del convenio suscripto en su consecuencia (fs. 915, 916/917).

14. — Por decreto 1349, dictado el 28 de junio de 1993, se dispuso reemplazar el inciso a) del artículo 7° del decreto 1253/93, autorizándose a ofrecer en venta bajo el régimen del citado decreto hasta un máximo de 65.000.000 de acciones de YPF S. A. (fs. 919/923).

15. — Obra a fojas 933/934 copia certificada de la resolución M. E. y O. S. P. N° 697, del 28 de junio de 1993, en la que se resuelve la venta de un total de ciento cuarenta millones de acciones de YPF S. A. a los bancos, colocadores, al precio de U\$S 18,24 por acción, estableciéndose que dichos bancos deberán revenderlos al público al precio de U\$S 19.

16. — A fojas 936/961 se agregó el Contrato de Colocación y a fojas 962/978 reproducción de las páginas de firmas del Contrato de Colocación en los Estados Unidos de América y de Suscripción de Acciones, glosándose luego la traducción de estos últimos contratos (ver fs. 979/1101 y 1102/1203).

17. — A fojas 1204/1214, obran notas del y, con sus respectivas traducciones, relacionadas con las obligaciones a su cargo como colocadores globales conjuntos y respecto de la actividad del "after market".

18. — Se ha glosado a fojas 1215/1372 el Prospecto en español de fecha 28 de junio de 1993; a fojas 1373/1378 nota del Señor Subsecretario Legal al Señor Secretario de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa, en el que se da cuenta de las constancias agregadas sin acumular al expediente principal.

19. — Creo necesario reiterar que se han remitido a esta Procuración, diversos expedientes agregados sin acumular, entre los que interesa mencionar:

a. 1) "Expediente N° 040-005899/93".

Este expediente se inicia con la nota dirigida por el Subsecretario de Financiamiento al Secretario de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa, ambos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos —del día 28 de mayo de 1993—, en la cual se señala que a fin de completar la información relativa a la venta accionaria de YPF S. A., adjuntaba un informe referido a diversos aspectos de la oferta pública de acciones, copia de la resolución M. E. y O. S. P. N° 386/93, y diversos anexos numerados del I al XIII, indicándose que no se acompañan los anexos III y V que permanecían en la Subsecretaría remitente, en razón de encontrarse en proceso de copiado, sin perjuicio de lo cual se hallaban a su disposición.

Los anexos citados se refieren a:

ANEXO I: Informe sobre la situación y evolución de YPF.

ANEXO II: Informe sobre casos de colocación de acciones por el método de book building para empresas similares.

ANEXO III: Distintos análisis del sector petrolero.

ANEXO IV: Evolución de las acciones, comportamiento del sector petrolero desde mayo de 1992.

ANEXO V: Propuestas e informes de los bancos para la colocación de acciones en el exterior de empresas argentinas a privatizar.

ANEXO VI: Análisis comparativo de YPF en el mercado internacional.

ANEXO VII: Capacidad de absorción de la colocación de acciones por los mercados nacional e internacional.

ANEXO VIII: Lista de instituciones bancarias que conforman el sindicato colocador.

ANEXO IX: Análisis comparativo del precio de salida y precio de colocación de las principales colocaciones de acciones durante 1991-1993.

ANEXO X: Listado de empresas que colocaron acciones por el sistema de Book Building.

ANEXO XI: Prospecto borrador presentado ante la SEC de los EE.UU. y CNV.

ANEXO XII: Resolución M. E. y O. S. P. N° 386/93-Designación de los Coordinadores Globales conjuntos.

ANEXO XIII: Valuación remitida por el Banco de la Nación Argentina.

a. 2) Se agregó también a estos obrados, nota del asesor ..., por la cual se adjuntan a las actuaciones:

— Copias de las notas, todas de fecha 19 de mayo, dirigidas a la Procuración del Tesoro de la Nación, a la Sindicatura General de la Nación y a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones.

— Copias de las notas enviadas con fecha 28 de mayo a la Comisión Bicameral ya aludida, a la Auditoría General de la Nación, a la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos, a la Sindicatura General de la Nación y a este organismo asesor.

— También se agregaron los anexos "a", "b", "c" y "e" que acompañaron tales notas. El anexo "d" es la información proveniente de la Subsecretaría de Financiamiento que incluye la valuación provisoria remitida por el Banco de la Nación Argentina y copias de las nuevas notas libradas con fecha 1° de junio de 1993, a cada uno de los organismos citados precedentemente.-

Se agregó asimismo, la nota dirigida a la Procuración del Tesoro de la Nación adjuntando copias de los proyectos de Underwriting Agreement y Deposit Agreement remitidos por los bancos; del proyecto de Convenio a firmar con las provincias hidrocarburíferas; de la presentación a efectuarse el día 19 de mayo de 1993 a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones y a la Sindicatura General de la Nación; y del Registration Statement efectuado el día 12 de mayo de 1993 ante la SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION.

También fue glosada a este expediente la nota remitida al Síndico General de la Nación, a los fines previstos en el artículo 20 y concordantes de la ley 23.696, con el objeto de poner en su conocimiento la presentación efectuada el día 12 de mayo de 1993, por YPF Sociedad Anónima ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos (SEC), acompañando copia de la misma. Allí se indica que la presentación mencionada es una declaración del emisor de acciones a ser ofrecidas en venta en los Estados Unidos, requerida por las leyes de dicho país como presupuesto de la autorización previa de la SEC para la colocación de acciones u otros títulos valores en esos mercados.

Se incorporó a estas actuaciones la nota dirigida a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, poniendo en su conocimiento iguales circunstancias que las señaladas precedentemente, y acompañando los mismos antecedentes.

Luce a fojas 80 de estos actuados la nota del Presidente del Banco de la Nación Argentina, fechada el 27 de mayo próximo pasado, indicando la tasación preliminar de YPF Sociedad Anónima y manifestando que los técnicos del Banco Nacional de Desarrollo se encontraban efectuando la tasación definitiva.

Como Anexo "E" se acumuló un resumen del Cronograma de la Oferta Inicial Pública (OPI).-

Fue agregada igualmente, la nota del 28 de mayo último, dirigida a la Comisión Bicameral ya citada, poniendo en su conocimiento nuevos elementos referidos al proceso de colocación de acciones de YPF SA, explicitándose que se acompañaba el proyecto de estatutos (anexo "A"), el texto preliminar del contrato denominado "underwriting" que se encontraba en negociación entre la República Argentina y el Sindicato de Bancos intervinientes (anexo B), copia de la nota del Banco de la Nación Argentina referida a la tasación (anexo C), documento informativo preparado por la Subsecretaría de Financiamiento dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, el texto del documento presentado ante la SEC (anexo D) y el cronograma de actividades previstas en el desarrollo del programa de oferta internacional de acciones (anexo E) (fs. 82/83).

Por último, se informó que por la trascendencia y complejidad del proceso de privatización en curso, se había dado intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación, a efectos de solicitar el análisis de los aspectos legales implicados en la opinión legal requerida en los contratos que se proyectaba suscribir (ver fs. 90/91).

Obran a su vez, a fojas 84/89 las notas del 28 de mayo de 1993, dirigidas a la Auditoría General de la Nación, La Organización de Estados Productores de Hidrocarburos y a la Sindicatura General de la Nación, todas en similares términos que la referida en el punto anterior.

Por su parte, por nota del 1° de junio dirigida a la Comisión Bicameral, se le hizo llegar la versión castellana de la presentación preliminar del Prospecto de fecha 31 de mayo de 1993, informando que la misma ha servido de base a la presentación efectuada ante la Comisión Nacional de Valores de esa misma fecha (fs. 92).

Se señaló también que ese día una nueva versión había sido presentada ante la SEC como parte del trámite de solicitud de autorización para la colocación de acciones de YPF S.A. en los mercados de los Estados Unidos de América y se acompañaron los textos finales del estatuto de YPF S. A. y del acuerdo suscripto entre el Estado Nacional y las provincias titulares de acciones clase "B" así como del decreto aprobatorio —estos últimos en el documento denominado "YPF S. A. privatización"—.

En esa misma fecha, se dirigieron notas idénticas a la Auditoría General de la Nación, la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro de la Nación (fs. 93/96).

A fojas 97 obra nota dirigida por el señor Secretario de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a la Comisión Nacional de Valores, solicitándole informes respecto de las características técnicas del sistema de venta de acciones denominado "Book Building", adoptado para la oferta pública de acciones de YPF S. A.

Se agregaron a fojas 98 y 99 las notas dirigidas por el Secretario recientemente mencionado a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación, con fecha 4 de junio de 1993, por las que se acompañó la versión del Prospecto YPF S. A., presentado a la Securities and Exchange Commission el 1° de junio de 1993.

En esa misma fecha, la Sindicatura General de la Nación hizo saber a las autoridades económicas que, conforme a la Ley de Administración Financiera, el control de las actividades empresarias de YPF S. A. debía realizarse a través de una Comisión Fiscalizadora integrada por tres Síndicos, designados a propuesta de esa Sindicatura, cuyos derechos y obligaciones se hallaban regulados por las previsiones de la ley 19.550 (fs. 100, Nota SIGEN N° 1164).

Por nota del 4 de junio próximo pasado, el Presidente de la Auditoría General de la Nación informó respecto de ciertas precisiones que le habrían sido requeridas, indicando las reglas de auditoría y los criterios de control que serían de aplicación por dicho organismo respecto de YPF S. A.; los períodos o ejercicios previos a la transferencia al sector privado y a ciertas provincias de una porción mayoritaria del capital social, que ese organismo auditaría; que la auditoría habría previsto realizar sus actividades en relación a YPF S. A. por sí o por profesionales independientes; y cuáles serían los efectos de las conclusiones a las que arribare esa Auditoría, en particular, si podrían afectar a los adquirentes de las acciones (fs. 101/103).

a. 3) También por nota del 4 de junio (fs. 104), dirigida por el ... a la Subsecretaría de Financiamiento ..., se requirieron informes respecto de:

— La valuación del Banco de la Nación Argentina con relación a YPF S. A. cuya estimación fuera adelantada en nota del 17 de mayo último.

— Las dispensas (waivers) concedidas para el Plan Financiero 1992.

Luce a fojas 105/111 la respuesta de la Licenciada Fridman a la solicitud supra mencionada, en la cual informa que:

— La valuación definitiva podría ser obtenida hacia fines de junio.

— No corresponde dispensa (waiver) alguna bajo el Plan Financiero 1992 ya que con la firma de ese Plan, tanto la banca comercial acreedora como los organismos de crédito otorgaron, oportunamente, las dispensas correspondientes.

Por último indicó, en lo que atañe a las dispensas específicas requeridas para YPF S. A., que las únicas solicitudes fueron las correspondientes al Banco Mundial y al Eximbank de Japón, cuyas copias adjuntó.

b) "Expediente N° 040-005934/93".

Por nota de esta Procuración del Tesoro de la Nación, del 4 de junio próximo pasado, dirigida al ..., con fundamento en la remitida a este organismo asesor por la Auditoría General de la Nación, se solicitó que la Secretaría a su cargo informe si los antecedentes puestos en conocimiento de la Procuración del Tesoro fueron también girados a aquel organismo de control.

Dicho requerimiento fue objeto de la respuesta del 9 de junio de 1993, informándose las notas y antecedentes que fueron enviados a la Auditoría General de la Nación y las fechas de los mismos (fs. 5/6).

c) "Expediente N° 040-006436/93".

Obra a fojas 1 de este expediente, dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del M. E. y O. S. P. N° 89.607, del día 18 de junio de 1993, en el cual se indicó que no se advertían objeciones al proyecto de decreto por el cual se propiciaba establecer el cronograma temporal para implementar algunos aspectos de los diversos sistemas establecidos en la Ley 24.156, respecto de diversas entidades del sector público nacional.

Asimismo, se agregó a fojas 2 de dichas actuaciones, copia certificada del decreto N° 1139, dictado con fecha 4 de junio de 1993, reglamentario del Título II (capítulo III) y del Título III de la ley mencionada últimamente.

Luce a fojas 5 de este mismo expediente, la nota N° 1164 de la Sindicatura General de la Nación, de fecha 4 de junio de 1993, ya reseñada.

A fojas 6 se incorporó la nota del Subsecretario de Presupuesto ..., de fecha 4 de junio de 1993, dirigida al Secretario de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa, en respuesta a la solicitud de este último referida a la interpretación de la ley 24.156 y de los sistemas de control del Sector Público Nacional.

En ella se informó que el artículo 80 de dicho régimen legal está referido exclusivamente a la Administración Nacional, por lo cual no corresponde su aplicación a las empresas enumeradas en el artículo 8°, inciso b), de la citada ley; y, respecto de los artículos 92 y 95, que la ley tiene vigencia a partir del 1° de enero de 1993 y el cierre del primer ejercicio, dentro del nuevo régimen, ocurrirá el 31 de diciembre de este año. En consecuencia, los informes de gestión que la ley exige y que están referidos a dicho ejercicio deberán presentarse a esa fecha.

Por último, se agregó a este expediente la nota del 4 de junio de 1993 de la Auditoría General de la Nación, a que me refiriera en el punto 19.a.2) precedente y la nota del 18 de junio de 1993, suscripta por el Asesor de Gabinete ..., en la cual se ordenó la formación de un expediente conteniendo las actuaciones administrativas referidas a los alcances de la aplicación de la ley 24.156 a YPF S. A., las cuales han sido descriptas (fs. 10).

d) "Expediente ACUERDO N° 1061".

A fojas 1 de estos actuados, luce la nota del 23 de marzo de 1993, dirigida a la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, por la Secretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa, en la cual se sometieron a su consideración dos normas que se incluirían en un proyecto de decreto a dictarse a fin de aclarar aspectos del cierre de balance de YPF S. A.

Tales normas eran:

— "Aclárase que a las actualizaciones e intereses determinados por YPF Sociedad Anónima en el proceso de reconocimiento de créditos y deudas con el sector público encuadrado en los capítulos I, II y III de la Ley 23.696, les corresponde la exclusión prevista por el punto 2 del quinto párrafo del Artículo 9° de la Ley 23.349 y modificatorias."

— "Aclárase que las disposiciones del Artículo 13 del Decreto 2778 de fecha 31 de diciembre de 1990, alcanzan a la Transformación de YPF Sociedad del Estado en YPF Sociedad Anónima y al plan de transformación global aprobado en el Artículo 2° del mismo. Asimismo, decláranse comprendidas en el Anexo I del Decreto 2778 del 31 de diciembre de 1990 las áreas centrales referidas en el Decreto N° 1216 de fecha 26 de junio de 1990".

Dicha consulta fue ampliada por nota de fecha 29 de marzo de 1993, esta vez relacionada con una norma que se incluiría en un proyecto de resolución a elevar al Señor Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos y cuyo texto era: "Apruébanse los planes de pago de obligaciones fiscales y/o previsionales de YPF SOCIEDAD ANONIMA hacia el Fisco Nacional y sus entidades, en base a los cuales se prepararon los estados contables referidos en el Artículo 9° de la Ley N° 24.145, siempre que no hubieren sido objetados por la ex-Sindicatura General de Empresas Públicas en su dictamen a los mismos".

En su respuesta, la Dirección Nacional de Impuestos de la Secretaría de Ingresos Públicos, con fecha 31 de marzo de 1993, sostuvo que el Poder Ejecutivo Nacional, por imperio de la ley 23.696, podía establecer lo que ahora intentaba incorporarse a título aclaratorio, pero como norma expresa y no generalizadora. Seguidamente, enunció las empresas deudoras de YPF, expresando que no tenía objeciones que formular al texto propuesto (fs. 4/7).

Con relación al último punto sometido a su opinión, señaló que su definición excedía la competencia de esa Dirección Nacional, por lo que elevó los actuados a la Secretaría de Ingresos Públicos.

En tal instancia, el Señor Secretario de Ingresos Públicos, con fecha 5 de abril de 1993, compartió el criterio expuesto previamente y consignó, con relación al último aspecto consultado, que correspondía recabar la opinión de la Secretaría de Economía, toda vez que aquella Secretaría no había tenido intervención alguna en la materia (fs. 8/9).

A raíz de la consulta formulada a esta última Secretaría, se produjo el memorando de fecha 28 de abril de 1993, de la Dirección de Integración Económica, en el que se indicó que se compartía, en un análisis preliminar, el criterio que resultaba del proyecto de resolución sometido a su consideración (ver fs. 12).

Por último, se adjuntó a este expediente copia certificada de la resolución M. E. y O. S. P. N° 437/93 del 28 de abril de 1993 (fs. 15/17).

e) "Expediente N° 770.029/93".

Se agregaron a esta causa la nota del Presidente de YPF S. A. elevando al Señor Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos un proyecto de decreto que reglamentaría la ley 24.145, efectuando diversas consideraciones sobre el proyecto; como también copias certificadas de diversas normas: decreto 546/93; decreto 2730/92; decreto 2778/90, de transformación de YPF Sociedad del Estado en YPF Sociedad Anónima; ley 24.156; decreto 1957/92; decreto 683/88; ley 24.145; ley 24.191 de presupuesto del año 1993; ley 17.319; artículo 10 de la ley 19.550; ley 15.273; decreto 96/91.

También se adjuntó copia certificada del Acta de fecha 26 de diciembre de 1990, suscripta por YPF S. E. con, ... vinculada con el contrato N° 7524 de transporte de petróleo que uniera a las partes; copia certificada del contrato N° 7524 — ... —, Cláusula Adicional N° 3, suscripta entre YPF S. E. y ... del 26 de diciembre de 1990, como así también diversos Anexos vinculados con el contrato N° 7524/58 y recopilación de normas aprobatorias (fs. 91 y ss).

Se anexaron asimismo a estos actuados copias certificadas de diversos anexos al contrato N° 7524 reseñado, el proyecto de estatuto de YPF S. A. y una nota del ..., del 21 de mayo de 1993, dirigida al Estudio de asesores jurídicos externos de la República en esta operación, ... por la que solicita opinión respecto del proyecto de estatuto referenciado (fs. 83/235, 242/264 y 265).

Este pedido de Informes es respondido por nota de la misma fecha, en idioma Inglés (ver fs. 266/267).

Se adjunta a fs. 269/272 el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos N° 89.524, respecto de los estatutos que se le remitiéran con fecha 21 de mayo de 1993, en el cual se formulan algunas observaciones.

Estas observaciones aparecen recogidas en un nuevo proyecto de estatutos y en el proyecto de decreto aprobatorio que, según resulta de la nota que dirigiera el Secretario de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa, se sometiera a nuevo dictamen de aquella Asesoría, el 21 de mayo de 1993 (fs. 273/323).

En dictamen N° 89.526, del 24 de mayo de 1993, el Servicio Jurídico se expidió sobre tales proyectos sin que le merecieran objeciones (fs. 332).

Por otra parte, obra a fojas 324/331, copia certificada del Acta de acuerdo entre el Estado Nacional y las Provincias y del Acuerdo, con los siguientes Anexos:

ANEXO 1: Bonos afectados por las provincias a la operación regulada por el convenio.

ANEXO 2: Aplicación a la adquisición de acciones clase B (sin simultánea oferta pública de venta) de una porción de los bonos destinados por cada una de las provincias de Chubut, Formosa, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz a la operación contemplada por el convenio.

ANEXO 3: Datos de los funcionarios intervinientes.

Tanto los Estatutos de YPF S. A. como el convenio entre el Estado Nacional y las Provincias mencionadas, resultaron aprobados por el Poder Ejecutivo Nacional por decreto N° 1106/93, que en copia certificada se agregará a estos autos, en cuyos anexos I y II obran los textos respectivos, también en copias certificadas (fs. 334/394).

20. — En tal estado, a fojas 1379 del expediente principal, el Señor Secretario de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, compartiendo el criterio del Subsecretario Legal de esa área, remite el expediente a este organismo asesor de derecho.

III. — Entiendo indispensable destacar que, a partir de las primeras comunicaciones sobre la operatoria llevada a cabo con motivo de la privatización de YPF S. A., por instrucción del Señor Procurador del Tesoro, el Señor Subdirector Nacional de Dictámenes de este organismo dispuso la constitución de un grupo de trabajo, a los efectos de analizar y evaluar la documentación relacionada a la citada operatoria (fs. 5 del expte. "Nota P. T. s/N° del 13 de mayo de 1993").

En el expediente que vengo de citar, cuya agregación a los autos principales, sin acumular, ordenara el Procurador del Tesoro de la Nación —conf. resolución P. T. 32/93 ya citada—, se adjuntaron las notas intercambiadas por esta Procuración del Tesoro con la Secretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y la Comisión Bicameral de Seguimiento a las Privatizaciones (fs. 1/4, 6/13 y 52 y Nota 158/73 de la Secretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa, agregada sin acumular).

También se ha acompañado a ese expediente el memorando producido por los asesores jurídicos externos de la República Argentina para esta operación, del 8 de junio de 1993 (fs. 14/20 y su traducción, obrante a fs. 21/29) y copia de las reglas aplicables a la venta de acciones en el mercado bursátil estadounidense —remitidas por el Estudio Jurídico ..., por fax del día 26 de mayo de 1993 y que obran a fs. 30/51).

El grupo de trabajo al que hiciera referencia, basó su estudio en la documentación que fuera remitida a este organismo y que obra en los expedientes sin acumular, identificados como "Nota P. T. N° 474/93", "Nota S. C. L. T. A. N° 144/93" en tres cuerpos, "Nota s/N° S. C. L. T. A. del 1° de junio de 1993".

IV. — Estimo imprescindible, como paso previo a la consideración de las cuestiones específicas sobre las que corresponde emitir opinión, realizar una breve reseña de la evolución de las normas jurídicas que han regulado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con especial referencia al período que diera comienzo con la sanción de la ley 23.696 (B. O. 23.VIII.89).

1. — Es del caso recordar que la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales tuvo su origen como organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, hacia comienzos de la década iniciada en 1930 (cfr. ley 11.668, B. O. 28.XII.32).

2. — Por decreto N° 12.648/43 (B. O. 10.VII.44), dictado en Acuerdo General de Ministros, se dispuso la creación de la Dirección Nacional de la Energía, como entidad autárquica, atribuyéndole competencias en materia de recursos de hidrocarburos.

La dependencia de esta Dirección a la Secretaría de Industria y Comercio, por imperio de lo dispuesto en el decreto N° 22.389/45 (B. O. 29.IX.45).

En el artículo 2° de este último decreto, se estableció que: "Además de los organismos que la Dirección Nacional de la Energía establezca para el cumplimiento de sus fines, la integran como entes autárquicos dependientes: la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales ...".

3. — Dictada la ley 13.653 (B. O. 31.X.49), por decreto N° 17.371/50 (B. O. 23.VIII.50), se creó en el Ministerio de Industria y Comercio de la Nación el "organismo" denominado "Empresas Nacionales de Energía", con el carácter de Empresa del Estado y "... sobre la base de las actuales Direcciones Generales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Agua y Energía Eléctrica, Gas del Estado, Combustibles Vegetales y Derivados, Combustibles Sólidos Minerales y de los demás organismos que puedan ser incorporados a ella, los que conservarán su individualidad y denominación particular al solo efecto de la gestión económica, con el aditamento E. N. D. E."

Por decreto N° 21.072/50 (B. O. 27.X.50), se aprobó el texto ordenado de los decretos Nros. 22.389/45 y 17.371/50. en el artículo 3° de dicho ordenamiento, se previó que: "El estudio, la exploración y la explotación de los yacimientos de hidrocarburos líquidos que el Estado Nacional tiene actualmente o adquiriera en lo sucesivo así como también la industrialización, el transporte y el comercio de dichas industrias y sus derivados directos e indirectos estarán a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales E. N. D. E. (art. 1º, ley núm. 11.668)".

4. — Con fecha 13 de agosto de 1974, fue promulgada la ley 20.705 (B. O. 26.VIII.74), que estableció el régimen de funcionamiento de las Sociedades del Estado, disponiéndose en su artículo 9º que el Poder Ejecutivo quedaba facultado para transformar en sociedad del Estado, entre otras, a las empresas del Estado.

En ejercicio de dicha facultad, por decreto 1080/77 (B. O. 26.IV.77) el Poder Ejecutivo transformó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Empresa del Estado en sociedad del Estado regida por la ley 20.705.

5. — Por imperio de lo dispuesto en los artículos 6º y 15, incisos 2 y 3 de la ley 23.696 (B. O. 23.VIII.89) se facultó al Poder Ejecutivo para transformar la tipicidad jurídica de todos los entes, empresas y sociedades indicadas en su artículo 2º, dentro de las formas jurídicas previstas por la legislación vigente, y a constituir sociedades o transformar las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas "sujeta a privatización", reformando los estatutos societarios, en su caso.

Por aplicación de tales disposiciones, mediante el decreto 2778/90 (B. O. 11.I.91), el Poder Ejecutivo dispuso la transformación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado, en sociedad anónima (artículo 1º).

En esa oportunidad se hizo hincapié en que se: "... ha encarado con la intervención de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO la regularización de la grave situación económica y financiera de la empresa con el objeto de alcanzar una gestión eficiente y transformarla en una empresa competitiva dentro de un mercado desregulado y desmonopolizado. (primer párrafo del Considerando al decreto citado).

Se agregó —en el párrafo décimo del mencionado Considerando— que: "... a estos efectos, YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO se transformará en una sociedad anónima de capital abierto en la que podrá participar el capital estatal junto con el privado, incluyendo a su personal, estableciendo la condición de que cotice sus acciones en las bolsas de valores con el objeto de obtener la mayor apertura e Integración privada en el capital de la nueva sociedad".

A raíz de tales fundamentos, en el artículo 2º del decreto ahora examinado se prescribió: "Apruébase el Plan de Transformación Global de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO presentado por el MINISTERIO DE ECONOMIA (SUBSECRETARIA DE EMPRESAS PUBLICAS) de conformidad a los cursos de acción que obra en el Anexo I, el que se considera parte integrante de este Decreto. A tal fin se la declara comprendida en los términos de los Artículos 8º y 9º de la Ley 23.696".

Asimismo, se estableció que YPF sociedad anónima ajustaría su acción a "... las normas y prescripciones de la Ley N° 19.550, con exclusión de la legislación administrativa" (artículo 5º), y que: "No le serán aplicables a YPF SOCIEDAD ANONIMA las leyes de obras públicas, de contabilidad, de procedimientos administrativos y sus normas complementarias y reglamentarias, ni legislación y normativa administrativa alguna aplicable a las empresas en que el Estado tenga participación" (artículo 7º).

Parece oportuno poner de relieve que esta Procuración del Tesoro tuvo oportunidad de expedirse respecto de la legitimidad y efectos del referido decreto 2778/90, al emitir su dictamen N° 277, de fecha 31 de octubre de 1991 (Dictámenes 199:97).

Allí se sostuvo que: "Al dictarse el decreto N° 2778/90 en el que expresamente se establece que la sociedad así transformada se regulará por los arts. 163 a 307 de la ley 19.550 (o sea expresa exclusión de las modalidades de los arts. 308 y ss.), se adoptó precisamente uno de los varios tipos sociales respecto de los cuales el Poder Ejecutivo Nacional tenía la pertinente facultad de elección que, por tanto, deviene ejercida convenientemente dentro del marco de la autorización legal conferida".

Se agregó también que "... el ejercicio que el Poder Ejecutivo Nacional ha hecho de la facultad se encuentra nutrido de razones de mérito y oportunidad con fundamento en la reforma del Estado y en la decisión política de someter a YPF a un proceso de privatización que impone el paso previo, técnicamente juzgado necesario, de la transformación de aquélla en un ente social compatible con una rápida realización y que resulte apto para despertar el interés de futuros adquirentes".

Por las razones expuestas, se concluyó entonces que: "... no puede ser considerado ilegítimo, irrazonable ni contrario a ninguna razón de orden público, que el Poder Ejecutivo Nacional haya optado por la forma social que eligió dentro de los límites de su competencia exclusiva, cuanto más —insisto— que lo hace bajo el marco de transitoriedad que se viene de destacar y para el logro de una finalidad que requiere técnica y necesariamente del señalado tipo societario".

Estos criterios fueron expresamente ratificados por el Poder Legislativo que, como ya habrá de verse, aprobó lo dispuesto por el decreto 2778/90, en el artículo 6º de la ley 24.145 (B. O. 6.XI.92).

V. — En el curso del proceso a que vengo haciendo referencia, y como trámite necesario para permitir la privatización de la empresa encarada, por decreto 1106/93 (B. O. 3.VI.93) el Poder Ejecutivo Nacional aprobó el nuevo estatuto de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad Anónima.

Dada su evidente vinculación con el proceso privatizador, respecto del cual cabe situarlo como presupuesto necesario, he de examinar —en lo que sigue— las principales disposiciones de dicho estatuto.

1. — Con relación a los **ELEMENTOS CONSTITUTIVOS**, luego de establecer el nombre de la sociedad, su sede en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina; su duración en 100 años; su objeto dedicado a la exploración, explotación, industrialización, transporte, y comercialización de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos, y las atribuciones y medios para el cumplimiento de tal objeto, el Estatuto aprobado determina el monto del capital social en \$ 3.530.000.000 (pesos tres mil quinientos treinta millones) representado por acciones ordinarias escriturales de \$ 10 (pesos diez) de valor nominal cada una y un voto por acción.

2. — a) Es del caso recordar que la ley 24.145, en su artículo 8º, estableció que el capital social de YPF SOCIEDAD ANONIMA estaría representado por acciones cuyas Clases serían atribuidas de la siguiente forma:

Clase "A": Las acciones pertenecientes al Estado Nacional, equivalentes al CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51 %) del Capital Social, con el derecho de acrecer que se contempla en el mismo Estatuto.

Clase "B": Las acciones que adquieran las provincias en cuyo territorio se hallen ubicados los yacimientos de hidrocarburos o, en su caso, por las provincias no productoras de hidrocarburos, hasta un TREINTA Y NUEVE POR CIENTO (39 %) del Capital Social.

Clase "C": Las acciones que adquiera el personal de la empresa, hasta el DIEZ POR CIENTO (10 %) del Capital Social, bajo el régimen de Propiedad Participada de la Ley N° 23.696.

Clase "D": Las acciones que el Estado Nacional y las provincias vendan al capital privado.

b) en cumplimiento de ese mandato legal, el Estatuto aprobado divide al capital social en **cuatro clases de acciones ordinarias**: las clase A correspondientes al 51 % que sólo pueden ser titularizadas por el Estado Nacional, con excepción de lo dispuesto en el artículo 6º, ap. b) punto IV del Estatuto Social (sin perjuicio de su conversión en acciones de la clase D en caso de venta de ellas con la consecuente disminución de la proporción respecto del total); las clase B representativas del 39 %, destinadas a ser adquiridas por las provincias tenedoras de Bonos de Consolidación de Regalías de Gas y Petróleo o titulares de acreencias contra la Nación por regalías de gas y petróleo (estas acciones, también se convierten en clase D si son colocadas a inversores privados, en clase A si quedaran en manos del Estado Nacional por no haber sido adquiridas por las provincias, manteniéndose como de Clase B si fueran enajenadas a otra provincia); las acciones clase C representativas del 10 % destinadas a los empleados de YPF S. A. bajo el régimen del Programa de Propiedad Participada (si no son adquiridas originariamente por los empleados se transforman en acciones clase A), y las acciones clase D que sustancialmente provienen de la conversión de las acciones originariamente clase A, B o C con motivo de la venta a terceros que de ellas hicieran sus titulares, debiendo tenerse presente que estas acciones no cambiarán de clase "... por ser eventualmente suscriptas o adquiridas por el Estado Nacional, las Provincias, otra persona jurídica de carácter público o por personal que participa en el Programa de Propiedad Participada" (art. 6º, ap. b), punto IV, 2º párrafo, del Estatuto Social).

Entiendo del caso subrayar que toda emisión de acciones ordinarias o preferidas se hará por clases, respetando la proporción existente entre las distintas clases a la fecha de cada emisión, sin perjuicio de las modificaciones que resulten del ejercicio del derecho de preferencia y del de acrecer.

c) No puedo dejar de poner de relieve, por su significación, que el artículo 32 del Estatuto, dentro del Título X, de disposiciones transitorias, establece que "A la fecha de este Estatuto y hasta tanto no se hallan colocado acciones de acuerdo con lo previsto en el Artículo 10 de la Ley 24.145, la totalidad de las acciones pertenecerán al Estado Nacional y a otros entes estatales Nacionales".

d) Creo importante destacar que, en lo que se refiere al ejercicio de los derechos sociales, se determina la necesidad de la reunión del voto favorable de las acciones clase A (cualquiera sea su proporción con relación al todo), para decidir los casos de: fusión; aceptación del "copamiento accionario consentido u hostil" que represente más del 50% del capital por terceros: transferencia a terceros de la totalidad de los derechos de explotación concedidos en el marco de las leyes 17.319 y sus normas complementarias y reglamentarias y 24.145, de modo tal que ello implique el cese de la actividad de exploración y explotación de la sociedad y, finalmente, para el supuesto de su disolución voluntaria.

Cabe acotar finalmente, en este tema, que tanto para decidir la transferencia a terceros de los aludidos derechos como para el caso de la disolución voluntaria es necesario que la determinación sea además aprobada por una ley nacional.

3. — En lo que se refiere a la **TRANSFERENCIA DE ACCIONES** se sientan reglas de importancia respecto de las cuales cabe destacar muy especialmente:

a) **Respecto de las acciones clase A y C.** Toda transferencia de acciones clase A o C, efectuadas en violación del último párrafo del art. 8º de la ley 24.145, o del Programa de Propiedad Participada o del respectivo Acuerdo General de Transferencia, respectivamente, será nula, carecerá de todo efecto y no habrá de ser reconocida por la sociedad.

b) **Respecto de las acciones clase D.** Toda persona que adquiera acciones clase D (o acciones o títulos que se conviertan en tales) queda constreñida a:

i. — **Información.** Si su adquisición es tal que lo haga superar el 3% de acciones de esta especie debe comunicar el hecho a la sociedad, detallando fecha, precio, número de acciones y si es propósito adquirir una participación mayor o alcanzar el control de la voluntad social.

ii. — **"Toma de control".** En la terminología estatutaria, se considera toma de control a la adquisición de acciones o títulos convertibles de la sociedad que permitan que el adquirente resulte titular de o ejerza el control sobre acciones de la Sociedad que, sumadas a sus tenencias anteriores de dicha clase (si las hubiere), representen, en total, el 15% o más del capital social, o el 20% o más de las acciones Clase D en circulación, si las acciones representativas de dicho 20% constituyeran, al mismo tiempo, menos del 15% del capital social (art. 7º pto. d).

Definido así el concepto, el Estatuto establece que la "toma de control" únicamente puede materializarse, si se cumple, previamente, con el doble recaudo de obtener el consentimiento previo de la asamblea especial de los accionistas de clase A y de efectuar una oferta pública de adquisición de todas las acciones de todo tipo y de todos los títulos convertibles.

Esta previsión no es aplicable cuando se tratare de la adquisición de nuevas acciones por parte de una accionista que represente más del 50% del total del capital social, en cuyo caso no hay restricciones.

En este aspecto, el Estatuto determina, además, las **condiciones necesarias que debe reunir la oferta pública de adquisición y su proceso de gestión**, tales como:

* Obligación de notificar la oferta a la sociedad, dándose cuenta en esta oportunidad de todo acuerdo preliminar que hubiere podido realizarse o se proyectara realizar, en tal sentido, con un tenedor de acciones, si esta circunstancia existiere.

En esta notificación se indicará —entre otras informaciones— la contraprestación que se ofrece por las acciones; si la oferta está condicionada a que un número de acciones determinado resulte por lo menos adquirido; y una expresa declaración de que la oferta está dirigida a todos los tenedores de acciones y de títulos convertibles.

** El precio de adquisición, que deberá ser igual para todo tipo de acciones y no podrá ser inferior al más alto de los siguientes precios correspondientes a acciones clase D:

a) el mayor precio pagado por el oferente en los últimos dos años;

b) el precio más alto del cierre vendedor en los últimos 30 días, según la cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires;

c) un precio por acción igual al precio de mercado según resulte del precedente inciso b) multiplicado por la relación existente entre el precio más alto pagado por el oferente en los últimos dos años y dicho precio de mercado en el día inmediatamente precedente al primer período de dos años en el cual el oferente adquirió derechos sobre acciones clase D; o

d) el ingreso neto de la sociedad por acción durante los cuatro últimos trimestres fiscales completos inmediatamente precedentes, multiplicado por la más alta de las siguientes relaciones: relación precio/ingreso para ese período o la relación precio/ingreso más alta para la sociedad en el período de dos años inmediatamente precedente.

*** El Directorio deberá convocar a Asamblea especial a todos los accionistas clase A a los efectos de que presten o no su consentimiento a la toma de control.

**** La sociedad en todos los casos, y el oferente si se lo requieren los titulares de acciones o títulos convertibles, deberán remitir a éstos copia de la oferta pública de adquisición.

***** El oferente deberá, además, publicar un aviso conteniendo sustancialmente la oferta en la sección de negocios de diarios de mayor circulación en la Argentina y en Nueva York (una vez a la semana durante este proceso).

En esta materia, se establece que el oferente deberá adquirir toda las acciones que le sean ofrecidas a la venta, contemplándose que solamente podrá retirar su oferta si el número de acciones es inferior al mínimo requerido en ella.

iii. — **Con relación a la posibilidad de la existencia de un acuerdo previo o preliminar de compra, se establece asimismo que:**

* si no hubiese acuerdo previo, el oferente podrá adquirir libremente las acciones de la sociedad que indicó que se disponía a comprar, en tanto y en la medida en que no haya podido adquirir tal número de acciones a través de la puesta a la venta que se hiciera con motivo de su oferta pública.

** si hubiese acuerdo y la oferta no hubiera fijado un mínimo de compra a la que ella quedaba condicionada, finalizado el procedimiento el oferente podrá concretar su acuerdo previo, en tanto que si existía aquel condicionamiento, el acuerdo podrá ser concretado sólo si bajo el régimen de oferta pública ha superado dicho mínimo.

Finalmente se establece que si se llegasen a adquirir acciones sin el cumplimiento de estos recaudos, la **sanción** será la pérdida de los derechos, de voto, cobro de dividendos y otras distribuciones y su no computación a los efectos de la determinación del quórum en las asambleas.

4. — También el Estatuto sienta algunas reglas relativas a los **derechos de preferencia y de acrecer**.

En cuanto al primero, se reconoce expresamente su existencia de acuerdo a las pautas previstas en la ley de sociedades, como también la posibilidad de su cesión a terceros, cualquiera sea la clase de acción que lo origina, en cuyo caso la acción objeto de ese derecho cedido se convertirá en acción de la clase D.

En lo que respecta al derecho de acrecer, el Estatuto determina, en su artículo 8º punto b), que el mismo se ejercerá respecto de todas las clases de acciones que no hayan sido inicialmente suscriptas.

Así se establece que, con relación a las acciones clase A no suscriptas, las mismas se convertirán en acciones clase D y serán ofrecidas a los accionistas de esta última clase de acciones que hubiesen manifestado su intención de acrecer.

En cuanto a las acciones clase B no suscriptas por haberse omitido hacer uso del derecho de preferencia o por su cesión, las mismas se asignarán a las provincias accionistas clase B que hubieren manifestado intención de acrecer; el excedente se transformará en acciones clase D, a ofrecer a accionistas de igual clase que hubieren manifestado intención de acrecer con relación a este tipo de acciones.

Respecto de las acciones clase C no suscriptas por omisión o cesión del derecho de preferencia, ésta se asignará a las personas comprendidas en el Programa de Propiedad Participada, suscriptoras de acciones clase C que hubieren manifestado intención de acrecer; con el excedente se procederá de igual modo que en el caso de las acciones clase B.

En el supuesto de acciones clase D no suscriptas, ellas serán asignadas a aquellos suscriptores accionistas de igual clase que hubieren manifestado intención de acrecer; el remanente se asignará en paridad de rango a las accionistas de las demás clases.

Ahora bien, tanto el derecho de preferencia como el de acrecer solamente existirán en la medida en que sean exigidos por la normativa societaria vigente, o cuando sean necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 23.696 y 24.145.

Va de suyo, pues, que la alusión a la ley 24.145 como uno de los límites al ejercicio de los derechos de preferencia y de acrecer, debe entenderse en congruencia con lo estipulado en el artículo 8º último párrafo de dicha ley (mantenimiento de por lo menos el 20% de acciones clase A en el capital social de la empresa). Abona este criterio la mención formulada en el artículo 7º, punto b) del Estatuto, respecto de la nulidad de toda transferencia de acciones clase A, efectuada en violación al precepto antes citado.

5. — Respecto del **GOBIERNO DE LA SOCIEDAD** se determina:

a) **Directorio.** Se integra con 12 directores elegidos por dos ejercicios -pudiendo ser reelegidos indefinidamente- por voto mayoritario dentro de cada una de las clases de acciones ordinarias y de la siguiente manera:

i) Dos directores y sus suplentes por la clase A mientras ésta conserve por lo menos el 20% del capital social.

ii) Un director y su suplente por cada una de las clases B y C siempre que conserven respectivamente cada una el 5% del capital.

iii) Un director elegido por las clases A y B -como si fueran una sola clase- en caso de que cada una de ellas tuviere menos del 5%.

iv) Finalmente, el resto de los directores por la clase D (quienes gozarán de voto acumulativo en su respectiva asamblea).

En caso de que no hubiere accionistas de una determinada clase en su respectiva asamblea, los directores de esa clase serán elegidos por los accionistas de las restantes clases votando conjuntamente como si conformaran una sola clase.

El Presidente y Vicepresidente del Directorio ejercerán la función de Gerentes Generales y serán elegidos por los accionistas de la clase D.

Con relación a la composición inicial del Directorio, es necesario poner de relieve que las disposiciones transitorias, contenidas en el Título X del Estatuto, establecen que:

* Hasta tanto se celebre una asamblea ordinaria para elegir al primer directorio de 12 miembros, este órgano estará integrado por 3 a 5 titulares y un número igual o menor de suplentes, todos los cuales serán designados por los tenedores de acciones ordinarias formando una única clase a tal efecto (art. 27).

** Hasta tanto se entreguen las acciones clase B a una o más provincias; se ponga en operación el Programa de Propiedad Participada respecto de las acciones clase C, o se pongan en circulación las acciones clase D, los directores que correspondan a dichas clases serán elegidos y, en su caso removidos, por el titular de las acciones clase A (arts. 28, 29 y 30).

b) **Asambleas.** El Estatuto establece la aplicabilidad de los artículos 243 y 244 de la Ley de Sociedades respecto del quórum y mayoría para las asambleas, exceptuando casos de los que cabe especialmente destacar:

i) El quórum de la asamblea extraordinaria en segunda convocatoria el que será satisfecho cualquiera sea el número de acciones con derecho a voto.

ii) Se requerirá el voto afirmativo de los titulares de acciones clase A reunido en asamblea especial para resolver las decisiones previstas en el artículo 6º inciso c), a saber: fusión, copiamiento accionario del 50%, transferencia de los derechos de explotación y disolución voluntaria de la sociedad.

iii) Se requerirá, tanto en primera como en segunda convocatoria, una mayoría del 75% de las acciones con derecho a voto, para resolver acerca de la transferencia del domicilio de la sociedad al extranjero; cambio fundamental del objeto social; retiro de la cotización de las acciones en las bolsas de Buenos Aires o Nueva York; y escisión de la sociedad en varias sociedades cuando se les transfiera a las sociedades resultantes el 25% o más de los activos.

iv) Se requerirá, tanto en primera como en segunda convocatoria, la mayoría del 66% de las acciones con derecho a voto para resolver sobre el otorgamiento de garantías a favor de accionistas de la sociedad; la cesación total de las actividades de refinanciación, comercialización y distribución; las normas sobre número, nominación, elección y composición del directorio; modificación de porcentajes referidos al deber de información respecto de adquisiciones que importen una tenencia superior al 3% de las acciones clase D o que supongan una "toma de control" en los términos "ut-supra" indicados; eliminación de los recaudos referidos a que la oferta pública de adquisición deba serlo respecto de todas las acciones, pagadera en dinero en efectivo y no ser inferior al precio según los mecanismos ya mencionados.

v) Cuando se afectaren los derechos de una clase de acciones se requerirá la conformidad de dicha clase.

6. — **Fiscalización.** Será ejercida por una comisión integrada por 3 síndicos (y sus suplentes) de los cuales dos serán designados por los accionistas de la clase D y el otro por los accionistas del resto de todas las acciones votando como una sola clase.

Debe tenerse presente, que, con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones transitorias del Estatuto, la elección de los síndicos antes descripta se realizará "... a partir de la Asamblea Ordinaria que considere el ejercicio social que cierre el 31 de diciembre de 1993, inclusive" (art. 31).

Por otra parte, aun cuando no surge expresamente del Estatuto, cabe colegir que en la elección del síndico correspondiente a las acciones clase "A", "B" y "C", deberá tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 114 de la ley 24.156, al tiempo de las designaciones de los síndicos, al menos en cuanto se refieran a la votación de los accionistas de la primera de tales clases.

7.— Analizadas así las disposiciones más significativas del estatuto, es del caso destacar que no se ha advertido, más allá de su bondad, oportunidad y mérito —valoración que escapa a la competencia de este Organismo Asesor— que ellas puedan ser susceptibles de observaciones a la luz de los recaudos de validez exigidos por la Ley de Sociedades.

Estimo adecuado reiterar, en este aspecto, que de la normativa estatutaria se desprende un rol preponderante para El Estado Nacional, en tanto titular de las acciones clase A, por cuanto:

a) Se requiera su voto favorable, en tanto se mantenga titular de alguna acción clase A, para los supuestos de fusión, copiamiento del 50%, transferencia de los derechos de explotación en el marco de las leyes 17.319 y 24.145, disolución voluntaria y, particularmente, para que sean válidas adquisiciones de acciones clase D de modo tal que lleguen a importar el 15% del capital social o, reuniendo también este recaudo, importen el 20% de las acciones clase D en circulación.

b) En los casos de transferencia de los derechos de explotación y de disolución es necesaria una ley nacional aprobatoria.

c) Se requieren, para ciertos casos de decisiones importantes para la marcha empresarial, las mayorías del 75% (cambio de domicilio al extranjero o de objeto en forma sustancial, retiro de la cotización y escisión social) y del 66% (garantías a los accionistas, cesación de ciertas actividades, modificación de porcentajes estatutarios en ciertos supuestos); extremo que otorga singular importancia a la conformidad de los accionistas de las clases A, B y C, particularmente la del Estado Nacional en tanto su participación como titular de acciones clase A no puede descender del 20% del capital social, salvo una ley nacional que lo autorice.

Por otra parte, también cabe poner de relieve que la aplicación de las normas estatutarias ya reseñadas constituyen un razonable impedimento para la adquisición de posiciones dominantes en el paquete accionario, cumpliéndose de tal modo con otro de los presupuestos contenidos en la legislación específica sobre el punto.

8. — Juzgo oportuno recordar que por decreto 2778/90, el interventor y subinterventor de YPF S. E., fueron designados Presidente y Vicepresidente de YPF S. A.

Al respecto, en ocasión de emitir opinión con relación a la transformación de YPF S. E. en sociedad anónima, dispuesta por el decreto últimamente citado, esta Procuración del Tesoro expresó que: "... b) la incompatibilidad contemplada en el art. 264 inc. 4 de la ley 19.550 para las sociedades anónimas, y para los funcionarios de la Administración pública cuyo desempeño se relaciona con el objeto de la sociedad hasta 2 años del cese de funciones para ser director de ellas, que se encuentra eximida por el art. 310 para las anónimas con participación estatal mayoritaria, estimo que es inaplicable para los supuestos de transformación de sociedades del Estado en anónimas" (Dictamen N° 277/91).

Se agregó entonces que "Marienhoff ha puntualizado que lo que da valor y prestigio a un régimen de incompatibilidades es la razonabilidad de las circunstancias consideradas para tener por existentes aquéllas. De ahí que los supuestos que determinarán incompatibilidades deben armonizar con la ratio iuris de éstas" (Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo Perrot—, Buenos Aires, 1970, Tomo III-B, pág. 251). Como lo he sostenido, la transformación de YPF en Sociedad Anónima no ha variado su naturaleza de ente estatal. Lo dicho hace concluir que no se daría el supuesto condicionante de la aplicación de la norma y que se deriva de su finalidad, el que no es otro que evitar que el pase de funciones públicas a otras privadas —inexistentes éstas por ahora en la hipótesis— pueda constituir una posibilidad de violación de valores éticos" (Dictamen N° 27, del 31 de octubre de 1991, ya citado).

El criterio expuesto pareció ser compartido por el legislador, que al sancionar la ley 24.145, por cuyo artículo 6º aprobó el decreto 2778/90, confirmó rango legislativo a tal designación, superando toda eventual incompatibilidad con las previsiones antes reseñadas de la ley 19.550 y sus modificatorias.

Resulta abstracto —y por consiguiente ajeno a la competencia funcional de este organismo asesor de derechos (Dictámenes 79:141; 134:270; 174:113; entre muchos otros)— emitir juicio respecto del alcance de las normas antes examinadas, con relación al momento en que se perfecciona la participación de los nuevos accionistas privados en la elección de las autoridades societarias, circunstancia aún no configurada a partir del contenido de los artículos 27, 28, 29 y 30 del estatuto social, a que hiciera referencia en el punto 5. a) de este apartado.

VI. — A partir de la descripción de la evolución en la caracterización de la personalidad jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, así como de las razones invocadas, en cada oportunidad y a lo largo de los últimos años, para adoptar las diversas medidas dictadas a su respecto, y de la organización jurídica que surge de su actual estatuto, corresponde detenerse en el examen de las normas sancionadas en miras a su privatización.

1. — En este orden de ideas, cabe recordar que la ley 23.696, en su Anexo I, aprobó —respecto de Yacimiento Petrolíferos Fiscales— la realización de contratos de concesión, asociación y/o de

locación en áreas de exploración y explotación, así como la creación de sociedades mixtas para áreas de recuperación asistida.

En el artículo 9º de esa misma ley y con respecto a la eventual ampliación de las empresas o haciendas que podrían privatizarse, se dispuso que: "La declaración de sujeta a privatización será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso ...".

2. — Como ya se adelantara, el Poder Ejecutivo, invocando expresamente las facultades conferidas por las leyes 23.696 y 23.697 y por el artículo 86, inciso 1º de la Constitución Nacional, dictó el decreto 2778/90, en el que formuló aquella declaración (art. 2º, última parte).

En dicha oportunidad, con relación a la venta de las acciones de la empresa transformada, se estableció que: "El MINISTERIO DE ECONOMIA aprobará la forma y las condiciones en que las acciones y obligaciones de YPF SOCIEDAD ANONIMA serán ofrecidas en los mercados de valores y/o licitadas para su transferencia al capital privado, conforme a la Ley 23.696" (art. 10).

3. - Posteriormente fue sancionada la ley 24.145 (B. O. 6.XI.92), destinada a regir en forma específica la privatización que nos ocupa.

a) Valga reiterar que, en su artículo 6º se estableció que: "En todo lo que no sea modificado por la presente ley y su ANEXO V, y sin perjuicio de las reformas estatutarias que, mediante los mecanismos y procedimientos societarios se disponga, apruébase lo dispuesto por el Decreto 2778 del Poder Ejecutivo nacional de fecha 31 de diciembre de 1990 que transformó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en YPF Sociedad Anónima, regida por la ley 19.550, capítulo II, sección V, arts. 163 a 307 (t. o. en 1984), con la finalidad de que sea una empresa de hidrocarburos integrada, económica y financieramente equilibrada, rentable y con una estructura de capital abierto".

b) Esa misma ley, en su artículo 8º y como ya se expusiera, estableció que el capital social de YPF SOCIEDAD ANONIMA estaría representado por acciones, de Clases "A", "B", "C", y "D" (ver apartado IV, punto i, precedente).

c) Por su parte, el artículo 9º de la ley ahora en examen resolvió: "Apruébase la declaración de sujeto a privatización del capital social de YPF Sociedad Anónima" y que "Ejecutados los actos mencionados en el anexo I de la ley 23.696, con la ampliación dispuesta en el art. 7º de la presente y cumplido lo dispuesto en el artículo precedente, las acciones clase D representativas del capital social de YPF S. A., serán vendidas en bolsas y mercados bursátiles **nacionales y/o internacionales**" (la negrilla me pertenece).

Creo necesario destacar que, de este modo, fue la ley especial la que decidió las alternativas, modalidades y procedimientos de la privatización de YPF S. A.

Es más, en el marco de la elección del procedimiento de selección del co-contratante, la ley 24.145 estableció pautas para la actuación del Poder Ejecutivo en el trámite de la venta.

Así, dispuso que la reducción de la tenencia del paquete accionario de la clase "A" por debajo del veinte por ciento (20%) del capital social de YPF S. A. requeriría la previa aprobación por ley (art. 8º "in fine"); y que la primera oferta de venta representaría un mínimo del veinte por ciento (20%) del capital social (art. 10, segundo párrafo).

d) En lo que se refiere a la tasación de los bienes que se declaraban sujetos a privatización, y a partir de lo previsto en el artículo 19 de la ley 23.696, el artículo 11 de la ley 24.145 dispuso: "La valoración de los activos y actividades y derechos incluidos en el anexo I de la Ley 23.696 con la ampliación dispuesta por el art. 7º de la presente, será efectuada, en cada caso, por las entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales que se considere apropiado convocar a esos efectos".

Estimo necesario poner de relieve que en el precepto antes transcripto se contempla también un procedimiento especial de valoración, destinado a dos ámbitos distintos. El primero de ellos, representado por el concepto "activos", se halla vinculado a la tasación de las acciones cuya venta se autoriza por el artículo 9º de la ley. El segundo, descripto por los términos "... actividades y derechos incluidos en el anexo I de la Ley 23.696 con la ampliación dispuesta por el art. 7º de la presente ...", se relaciona con la valuación de otros bienes, también sujetos a eventuales actos de enajenación.

El criterio expuesto es el único que explica la doble utilización de la conjunción copulativa "y" en el párrafo legal transcripto, que sólo podría evidenciar que el concepto de "activos" se aúna con otro diverso, definido como "... actividades y derechos incluidos en el anexo I de la ley 23.696 con la ampliación dispuesta por el art. 7º de la presente...".

e) En lo atinente a la actuación de los organismos de control, a través de su artículo 17, la ley contempló la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones creada por el artículo 14 de la ley 23.696, indicándose que "... deberá verificar que las transferencias accionarias así como la realización de activos que se efectúen cumplan con los requisitos de esta ley y lo establecido en el dec. 1055 del 10 de octubre de 1989".

f) Por último, la ley 24.145 estableció como autoridad de aplicación de los Títulos II y III al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos "...quedando facultado para realizar y aprobar todos los actos jurídicos contemplados en el capítulo II de la ley 23.696, que resulten necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente" (art. 18).

VII. — El examen de la compatibilización hermenéutica entre la ley 23.696 —en su carácter de instrumento normativo general en la materia— y la ley 24.145 —como instrumento especial, regulador de la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales— adquiere singular relevancia en la especie.

En efecto, según tuviera oportunidad de analizar este organismo asesor de derecho, en ocasión de expedirse sobre la venta de acciones telefónicas (Dictámenes 198:178), la estructura de la ley 23.696, en materia de privatización de activos públicos contiene diversas disposiciones dirigidas a regular:

a) Las formalidades que deben cumplirse para la inclusión de una determinada hacienda entre las sujetas a privatización y el alcance de las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional en esa materia (arts. 8 a 12).

b) Las alternativas de procedimiento, entendidas como las diversas medidas que pueden adoptarse sobre los activos a privatizarse —entre otras, en orden a su organización o tipificación jurídica— para permitir o facilitar el trámite de enajenación, concesión o entrega en explotación de tales activos (arts. 15 y 16).

c) Las modalidades, concepto con el que se comprende a los distintos tipos de actos jurídicos a través de los cuales puede optarse a los efectos de concretar la privatización (art. 17).-

d) Los procedimientos y criterios que pueden elegirse para la selección del co-contratante (art. 18).

e) El sistema de tasación de los bienes y empresas sujetas a las modalidades del artículo 17 (art. 19); y

f) La intervención de los organismos de control —tanto en lo que atañe al control presupuestario como en lo relativo al ejercicio de las facultades legislativas delegadas— (arts. 14 y 20).

A partir de esta perspectiva, y tal como se señalara en el apartado V precedente, la ley 24.145 ha abordado con criterios de especialidad, que trascienden al marco genérico, los diversos puntos referidos en los párrafos precedentes.

En efecto, la ley de privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales ha resuelto en forma expresa para el caso: a) La declaración de "...sujeta a privatización..." (artículo 9º, primer párrafo) y la delegación de las facultades de autoridad de aplicación a los fines de la privatización en el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (art. 18); b) La convalidación de la transformación de YPF Sociedad del Estado en una sociedad anónima, como alternativa de procedimiento, elegida a los fines de su privatización (arts. 6º y 8º); c) La ratificación de la venta de acciones como modalidad de enajenación (art. 9º, segundo párrafo); d) La elección de la venta "...en bolsas y mercados bursátiles nacionales y/o internacionales", como procedimiento y criterio de selección del co-contratante (art. 9º, segundo párrafo "in fine"); e) la fijación de un procedimiento especial para la "...valorización de los activos ..." (art. 11); y f) la fijación de un procedimiento de control, a llevarse a cabo por parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones (art. 17).

De la comparación de aquellas cláusulas generales de la ley 23.696, y estas disposiciones específicas de su similar 24.145, es forzoso colegir que esta última actúa como ley especial y posterior frente a la primera, a la que sólo podría acudir en ausencia de norma expresa que reglara la materia específica.

En tal orden de ideas, esta Procuración del Tesoro ha tenido oportunidad de señalar que si estando en vigor un determinado régimen normativo el legislador halló mérito para la sanción de uno diferente, pese a que su texto se oponía al anterior, "... no resulta adecuado poner en duda la intención legislativa sino, por el contrario, juzgar que la oposición debe resolverse en favor de la norma dictada en segundo término. En este sentido, se ha dicho: 'Las normas posteriores, resultan de utilidad para interpretar el régimen anterior que han derogado, en tanto permiten confirmar el alcance con que este último debe ser entendido' (Suprema Corte de Buenos Aires, abril 10-990, DJBA 139-4855, in re 'Cacciatore, José y otros c/Provincia de Buenos Aires')... Por lo demás, el temperamento propiciado se concilia con el principio básico de todo ordenamiento positivo, según el cual una ley posterior deroga, en la medida de su oposición, a la anterior" (Dictámenes 201:205 y doctrina de Dictámenes 76:341; 115:56 y 512; conf. Llambías, Jorge J. "Tratado de Derecho Civil, Parte General, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 1973, T. I, págs. 62/63).

VIII. — Sentado su carácter de ley especial en el ámbito que nos ocupa, corresponde también tener presente que la amplitud de las facultades otorgadas al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos por la ley 24.145, fueron explicitadas posteriormente —tanto en lo que se refiere a los actos comprendidos en el anexo I de la ley 23.696, con la modificación prevista en el anexo V de aquella, como respecto de los que debían adoptarse para la venta de las acciones societarias— por medio del decreto 2110/92 (B. O. 23.XI.92).

1. — En este decreto, constitutivo de un verdadero acto de ejecución de la ley 24.145, se dispuso que el citado Ministerio se hallaba autorizado para:

a) Definir y delimitar las unidades de negocios que compondrán cada uno de los activos consignados en el Anexo V de la Ley 24.145, incorporando o excluyendo los bienes y derechos —cualquiera fuere su naturaleza— que resulten necesarios para conformar una propuesta interesante a los eventuales oferentes.

b) Determinar, en cada caso y en los Pliegos de Bases y Condiciones, la forma y condiciones del pago del precio, ya sea en efectivo —en moneda nacional o extranjera— y/o en Títulos de la Deuda Pública Interna o Externa, todo ello en las proporciones que estime conveniente tomando en consideración la naturaleza de los activos y el mercado al cual se dirige la oferta.

c) Constituir sociedades de cualquiera de los tipos autorizados por la ley, a los efectos de su privatización, pudiendo disponerse la conformación del capital inicial con suscripción e integración por parte de YPF SOCIEDAD ANONIMA y el ESTADO NACIONAL, en las proporciones que, en cada caso, se determine; y autorizar a YPF SOCIEDAD ANONIMA a transferir a dichas sociedades los bienes que integren la unidad de negocios de la que se trate, en concepto de aporte en especie a los efectos de aumentar su capital, en cuyo caso la valuación de dichos bienes será el monto en dinero que resulte de proporcionar al ciento por ciento (100 %) el precio de adjudicación de la parte de capital social privatizado.

d) Disponer los llamados a Concurso o Licitación, nacionales o internacionales, para llevar a cabo las privatizaciones autorizadas por el Anexo V de la Ley 24.145, aprobar sus Pliegos de Bases y Condiciones, las adjudicaciones y documentación anexa, como así también, los contratos resultantes de dichos procedimientos.-

e) Aprobar la tasación de los activos a privatizar, comprendidos en el Anexo V de la Ley 24.145, que se realice de conformidad con lo establecido por su artículo 11.-

2. — En lo que se refiere a la reglamentación del procedimiento de selección del co-contratante, con alcance general —pero también aplicable al caso previsto por el segundo párrafo "in fine" del artículo 9º de la ley 24.145— el decreto 588/93 (B. O. 7.IV.93) dispuso que: "Las ventas de acciones de propiedad del Estado Nacional emitidas por empresas privatizadas o sujetas a privatización, deberán realizarse por los procedimientos y en base a las condiciones y prácticas de los mercados en los que se ofrezcan las acciones respectivas" (art. 1º).

Esta norma, dictada por el Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de su poder constitucional de reglamentar las leyes, resulta de capital importancia para el examen del diseño y los contratos suscriptos para la transferencia de acciones, en tanto remite a la utilización de las prácticas usuales en las bolsas y mercados bursátiles en los que se realizara la colocación.

A tales fines, en el artículo 2º del mismo decreto se facultó al Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos a adoptar las decisiones respectivas y a suscribir en nombre de la REPUBLICA ARGENTINA la documentación que resulte necesaria. Entre otras facultades especiales, se confirió competencia al Ministro para:

a) Designar a las instituciones financieras o a los Bancos o agentes que representarán y se encargarán de la organización del grupo de entidades que actuarán como agentes o colocadores de las acciones respectivas, a cuyo fin se deberá solicitar propuestas a por lo menos tres entidades de reconocida experiencia, prestigio y solvencia para actuar en operaciones equivalentes a aquella que se disponga.

b) Determinar el volumen de acciones a ser ofrecidas en venta, las épocas y plazos en que tendrán lugar las mismas, las distintas condiciones en que habrán de efectuarse y los mercados del país o del exterior en que serán ofrecidas.

c) Establecer los métodos y procedimientos de colocación y venta de las acciones respectivas, conforme a las prácticas vigentes en las jurisdicciones tanto nacionales como internacionales donde se llevarán a cabo dichas colocaciones.

d) Acordar y suscribir, o en su caso autorizar a la empresa sujeta a privatización para acordar y suscribir, los contratos necesarios para la colocación y/o venta de las acciones los que contemplarán cláusulas usuales a esos efectos, incluyendo las responsabilidades necesarias dependiendo de cada operación específica, honorarios y comisiones de los agentes colocadores con

las entidades que hayan sido seleccionadas para coordinar la operación de colocación de acciones y con las que hubieran sido designadas por ésta o éstas de conformidad con el inciso a) anterior y con el acuerdo de la REPUBLICA ARGENTINA.

e) Acordar condiciones por las que los colocadores se obliguen a adquirir las acciones que se ofrezcan para el supuesto que, al precio establecido, no hubiere demanda suficiente.

f) Cuando las circunstancias de cada caso así lo requieran someter a la REPUBLICA ARGENTINA a la jurisdicción judicial o arbitral extranjera por las responsabilidades que asuma como vendedor de las acciones.

g) Contratar los servicios de asesoramiento financiero, contable, técnico y/o jurídico con personas o firmas de reconocido prestigio nacional o internacional que fuera necesario para asistir al Estado Nacional y/o a la empresa emisora de las acciones a ser vendidas para que ésta y/o el Estado Nacional, según corresponda, promuevan y obtengan las autorizaciones y/o registros exigidos por la legislación o las reglamentaciones de las jurisdicciones correspondientes a los mercados en los que se haya resuelto efectuar las ventas. Asesoramientos de igual naturaleza podrían ser contratados para asistir al Estado Nacional en la preparación, negociación, suscripción, ejecución y control de la ejecución de los contratos a que se refiere el inciso d) de dicho artículo 2º.

IX. — A partir del marco que aportan las disposiciones transcritas —que fueron dictadas en ejercicio de facultades propias por el Parlamento y por el Poder Ejecutivo, en uso de sus atribuciones reglamentarias y de las inherentes a su condición de jefe de la Administración— debe concluirse que el Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos quedó autorizado para instrumentar los actos necesarios para llevar a cabo la privatización.

Desde dicha perspectiva, corresponderá analizar el modo en que fueron concretadas las facultades otorgadas, a través de los distintos actos llevados a cabo para materializar la privatización.

a) En primer término cabe destacar que se ha tenido en cuenta el cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 9º de la ley 24.145 para permitir la privatización, del modo allí previsto.

b) Con tal precedente, se ha seleccionado para la venta de las acciones un diseño que contempla la celebración de un contrato de underwriting, con entidades financieras de reconocido prestigio en el ámbito nacional e internacional y la operatoria del "book building" para determinar el precio de referencia y corte.

c) En ejecución de ese diseño se procedió a la selección de los colocadores y a la negociación de los proyectos de contratos sobre los que hoy se requiere mi opinión.

d) Por su parte, se realizaron las tareas correspondientes a la valorización de los activos, a que se refiere el artículo 11 de la ley 24.145.

e) En el curso de todo este trámite han tomado distinta intervención los organismos de control del procedimiento.

De todas estas cuestiones, en la medida de su pertinencia a los efectos de la opinión legal solicitada al Procurador del Tesoro, habré de ocuparme en los capítulos que siguen.

X. — 1. — Según surge de las constancias obrantes a fojas 324/331 del expediente N° 770.029/93, agregado sin acumular, con fecha 14 de mayo de 1993 se firmó el Acta-Convenio entre los representantes de las Provincias de Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Santa Cruz y el representante del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, en nombre del Estado Nacional.

Dicha Acta-Convenio 1434 reconoció como precedentes los acuerdos que pusieran fin a los reclamos por regalías que tales provincias hicieron a la Nación y que culminaron en la entrega de "Bonos de regalías hidrocarbúricas" con los que las provincias podrían adquirir, por su valor nominal técnico, acciones clase "B" de YPF S. A. (ver artículo 19 de la ley 24.145).

Constituyó objeto del Acta-Convenio a que me vengó refiriendo, establecer la forma y los requisitos para la colocación de las acciones de YPF S. A., vinculadas con los derechos de adquisición reconocidos a las provincias.

En tal sentido, los estados provinciales declararon y se comprometieron irrevocablemente "...a autorizar y encomendar al Estado Nacional a vender, como Acciones clase D, las Acciones clase B, actualmente bajo titularidad del Estado Nacional, en la primera colocación de acciones de YPF en las Bolsas y Mercados nacionales e internacionales previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley 24.145, junto con las Acciones clase A del Estado Nacional..." (art. 1º).

Se aclaró en ese mismo artículo que las acciones objeto de autorización eran las resultantes de la adquisición por la utilización de los Bonos individualizados por cada Provincia menos las que las mismas Provincias señalaron que adquirirían al Estado Nacional.

Correlativamente, el Estado Nacional se obligó a entregar a cada Provincia, y según sus respectivas peticiones, acciones clase "B" contra entrega de los Bonos ya mencionados afectados a tal compra.

A partir del acuerdo al que se arribara, se reconoció al Estado Nacional la facultad de exclusiva de colocación de las acciones de YPF S. A. sobre las que no se ejerciera aquella adquisición, como acciones clase "D", con el compromiso de aplicar a las mismas los valores nominales técnicos de Bonos indicados para cada provincia.

Realizada la primera colocación de las acciones en cuestión, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Acta-Convenio, el Estado Nacional se comprometió a entregar a cada Provincia el producido de dicha colocación con la respectiva deducción de gastos, total o parcialmente en moneda nacional o extranjera o en títulos de la deuda pública argentina, a las provincias.

Además, las provincias y el Estado Nacional se comprometieron a no ofrecer las acciones clase A y B como clase D en bolsas y mercados nacionales o extranjeros por un plazo de 18 meses desde el cierre de la primera colocación.

El Acta-Convenio referida fue objeto de homologación por decreto 1106/93 del Poder Ejecutivo, extremo que permite tener por cumplido tal recaudo previo a la colocación, tal como fuera previsto por el artículo 9º de la ley 24.145 (ver fs. 334/394 del expte. N° 770.229/93 ya mencionado).

2. — Por su parte, surge de las resoluciones M. E. y O. S. P. N° 680 y 682, ambas del 25 de junio de 1993, que se han considerado ejecutados y ordenado la materialización del cumplimiento pendiente de los demás recaudos previos a la privatización, vinculados con la ejecución de los actos mencionados en el anexo I de la ley 23.696, con la ampliación dispuesta en el artículo 7º de la ley 24.145 (ver fs. 906/908 y 912/913, los dictámenes de fs. 901 y 911 y la documentación de fs. 915 y 916/917, todos de los autos principales, a su respecto).

En este orden de ideas, vale reiterar que —con invocación del ejercicio de las facultades que le confieren los incisos 1º y 2º del artículo 86 de la Constitución Nacional— el Poder Ejecutivo dictó el decreto 2110/92 (B. O. 23.XI.92), en cuyo artículo 1º autorizó al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en su carácter de autoridad de aplicación de los Títulos II y III de la ley 24.145,

a "...definir y delimitar las unidades de negocios que compondrán cada uno de los activos consignados en el Anexo V de la Ley 24.145, incorporando o excluyendo los bienes y derechos —cualquiera fuere su naturaleza— que resulten necesarios para conformar una propuesta interesante a los eventuales oferentes" (inc. a); así como para determinar la forma y condiciones del pago del precio (inc. b), constituir sociedades a los efectos de su privatización (inc. c), disponer llamados a concursos nacionales e internacionales (inc. d) y aprobar la tasación de los activos a privatizar comprendidos en el Anexo V de la ley 24.145 (inc. e).

Estas disposiciones, que se asientan sobre el principio de reconocer carácter autorizativo y no ordenatorio a las disposiciones referidas a privatización contenidas en el anexo I de la ley 23.696 con la ampliación dispuesta en el artículo 7º de la ley 24.145, resultaron verdaderos actos de ejecución de lo previsto en aquellas disposiciones, postergando su materialización posterior a los tiempos y formas a determinar por la autoridad de aplicación. En tales circunstancias adquiere sustento el procedimiento seguido en esta materia por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

XI. 1. — En cuanto al examen sobre la legalidad del diseño adoptado para la venta de las acciones, creo del caso recordar que, en el caso que nos ocupa, ha sido el mismo legislador quien —a través de una ley especial— eligió el procedimiento para la selección del co-contratante en la privatización de los activos de YPF S. A. —es decir, para la venta de sus acciones—.

Ello así por cuanto, en el mentado artículo 9º de la ley 24.145, se dispuso que "...las acciones clase D representativas del capital social de YPF S.A., serán vendidas en bolsas y mercados bursátiles **nacionales y/o internacionales**" (la negrilla no está en el original).

Esta circunstancia, así como la regla de hermenéutica que exige dar preinencia a la ley especial posterior sobre la general precedente a la que ya me he referido, hace innecesario el cumplimiento del recaudo previsto en el artículo 18 de la ley 23.696, relativo a que: "La determinación del procedimiento de selección será justificado en cada caso por la Autoridad de Aplicación, mediante acto administrativo motivado".

2. — A partir de estos argumentos, es necesario examinar el diseño adoptado para concretar ese procedimiento de selección, a los fines de pronunciarse sobre su juridicidad.

De manera inicial debo recordar que el criterio por el cual el Poder Ejecutivo Nacional o el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en uso de competencias delegadas por el legislador, optara por un sistema de venta determinado —dentro del marco de la elección ya realizada por la norma legal específica que rige la cuestión— obedece a razones de oportunidad, mérito y conveniencia, ajenas por principio a la competencia específicamente jurídica de este organismo asesor.

Sin embargo, dada la particular importancia que reviste su consideración en la tarea de emitir opinión —en orden a la conformidad del diseño instrumentado con el régimen legal al que se halla sujeta la privatización que nos ocupa—, aun dentro del marco de respeto de los límites de incumbencia que esta Procuración del Tesoro tiene asignados, entiendo pertinente formular diversas consideraciones respecto del sustento legal y la razonabilidad de su elección a partir de los informes técnicos producidos, bien entendido que con ello no se abre juicio con relación a su conformidad específica.

3. — a) A los efectos de materializar la venta en el marco indicado por el artículo 9º de la ley 24.145, se ha optado por elegir el sistema denominado de "underwriting", mediante el cual la colocación se realiza a través de bancos que se encargan de ella y que sólo quedan como propietarios definitivos de las acciones en caso y en la medida en que no fueran absorbidas por el mercado, aspecto este último que analizaré más adelante.

Tal decisión encuentra su marco legal en los artículos 1º y 2º incisos c) y f) del decreto 588/93, en tanto disponen que la colocación y venta de las acciones se hará por los "procedimientos", "condiciones" y "prácticas" vigentes en mercados nacionales e internacionales, acordando condiciones por las que los colocadores se obliguen a adquirir las acciones que se ofrezcan, para el supuesto que al precio establecido no hubiere demanda suficiente.

El sistema ha sido adoptado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1º del citado decreto 588/93 e invocación de las razones expuestas en el informe técnico que luce agregado a fojas 2/50 del expediente 040-005899/93 (que ha sido remitido como expediente sin acumular), en el que se señala que comporta la expresión de una corriente sumamente difundida en todos los países para casos de la venta de acciones de grandes corporaciones, como es el caso de Y. P. F., en los que —además— debe recurrirse necesariamente a mercados internacionales en búsqueda de inversores externos a gran escala y de tipo institucional frente a la imposibilidad de absorción aceptable en el marco local.

Creo necesario señalar que, para la instrumentación de un proceso de underwriting, es necesaria la designación de uno o más Coordinadores Globales —normalmente bancos o instituciones de reconocido prestigio financiero— y de un sindicato de bancos u otras entidades colocadores de acciones, seleccionados en las diversas plazas en las cuales habrán de ofrecerse tales valores mobiliarios.

El nombramiento de los coordinadores globales tiende a asegurar que la transacción se desarrolle con fluidez y que se ahorre tiempo y esfuerzos que, de otra manera, tendría que emplearse para atender cada tramo de oferta (según los mercados de colocación) conciliando y arbitrando diferencias entre ellos.

Por su lado, las tareas propias de los componentes del sindicato (ver Anexo VIII del informe del Señor Subsecretario de Financiamiento, del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, de fecha 28 de mayo de 1993, que se agregara a fs. 2/50 del expediente 040-005899/93 ya mencionado), son —entre otras— las de preparar el contenido de la presentación a los inversores y toda la información adicional que se requiera para el "marketing" de las acciones en las plazas en las que ellos intervienen; coordinar las promociones; desarrollar un historial de mercado con la actitud y disposición hacia el tipo de empresa, país y sector de donde proviene la colocación; dar una indicación preliminar de la demanda; generar el sentido de escasez entre los inversores de un modo tal de desarrollar una dinámica y un interés creciente; programar un agresivo plan de "marketing" en la plaza; confeccionar el "libro de demanda" ("boom building" cuando, como en el caso, es el método empleado); proveer el análisis de la demanda al emisor o vendedor; controlar la competitividad y tensiones propias del mercado; minimizar el tiempo entre el lanzamiento y la formación del precio y realizar actividades para el mantenimiento del precio posterior a la entrada en el mercado —after market— (ver también a este respecto traducciones de las notas remitidas por ..., obrantes a fs. 1207/1208 y 1209/1210).

El informe del Señor Subsecretario de Financiamiento, del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (agregado al expte. 040-005899/93) recomendó una salida simultánea en todos los mercados, tanto nacionales como del exterior, invocándose que tal temperamento maximiza la demanda potencial de acciones y crea la sensación de escasez y agregó que esta estructura ha sido utilizada de manera regular por el gobierno del Reino Unido, Francia y España en sus programas de privatizaciones en los que ha funcionado con probado éxito.

b) Teniendo en cuenta la distinta composición y posibilidades de absorción de los mercados, se ha dividido la colocación en tres tramos de oferta: la oferta argentina, la oferta estadounidense y la oferta internacional, terna que conforma en conjunto la "oferta combinada" por un total de 140.000.000 (ciento cuarenta millones de acciones) Clase D de \$ 10 cada una (en las que se transforman las acciones clase A que se venden).

La oferta argentina comprende 35.000.000 (treinta y cinco millones) de acciones respecto de las cuales operan como coordinadores locales los ... y ... Esta oferta comprende una "oferta minorista" destinada a particulares residentes en la República Argentina (hasta U\$S 10.000 por persona).

Los coordinadores locales indicados lideran a los underwriters argentinos ...

La oferta norteamericana versa sobre 65.000.000 (sesenta y cinco millones) de acciones a ser ofrecidas en Estados Unidos mediante Certificados Americanos de Depósito en custodia ("ADS") a ser adquiridos por subscriptores americanos.

La oferta internacional, por su parte, involucra a 40.000.000 (cuarenta millones) de acciones que se ofrecerán fuera de Argentina y de los Estados Unidos, también mediante ADS y para ser subscriptas por los "organizadores internacionales".

A los fines indicados se efectuaron las pertinentes presentaciones ante las autoridades bursátiles de la Argentina (Comisión Nacional de Valores), de los Estados Unidos (la Securities Exchange Commission: la SEC) y del Reino Unido de Gran Bretaña (la SEAQ International).

A este respecto se ha indicado como ventajas más señaladas de las registraciones ante la SEC y SEAQ International que ellas posibilitan el ofrecimiento a un espectro más vasto de inversores institucionales como también la atención del mercado minorista; una más amplia visibilidad de largo plazo de las acciones y una mayor liquidez de mercado para las acciones.

Los trámites llevados a cabo con motivo de la colocación de acciones de YPF S. A. habrían permitido superar las limitaciones creadas en la venta de las acciones telefónicas, oportunidad en que la falta de cumplimiento de los trámites ante la SEC y la SEAQ sólo permitieron recurrir a los denominados "QUIBBS" o grandes inversores y no acceder al mercado minoritario de las bolsas internacionales, extremo que sí pudo obtenerse en este caso.

c) A los efectos de la puesta en funcionamiento del sistema de underwriting y luego de los concursos de que dan cuenta las actuaciones reunidas, que han sido acompañadas sin acumular al expediente principal, se produjo el informe del Señor Subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos que luce a fojas 22/26.

Allí se recomendó como "... aconsejable seleccionar a ... como coordinadores globales para este trabajo. Estamos ante bancos de similar envergadura, la calificación de los tres grupos pone de manifiesto las similares características y calidades de los mismos, asimismo los honorarios no resultan determinantes atento a la escasa diferencia entre ellos que los coloca en análoga posición, tanto más cuanto el mismo será negociado antes de la firma del contrato. No obstante, es nítido el lugar del primer grupo pero también por lo expresado, indica la conveniencia de invitar a los otros dos grupos a participar en la selección de 'comanagers' para esta colocación internacional".

Sobre tal base, se produjo el dictamen del Servicio Jurídico de aquel Ministerio N° 89.259, del 16 de abril de 1993 (fs. 27) y se dictó la resolución N° 386/93 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (fs. 28/32) por la cual se designó a ... en calidad de Coordinadores Globales Conjuntos de la oferta de venta de las acciones.

Esta resolución, dictada en el mercado de las facultades determinadas por el decreto 588/93 invocó sustento en la "ventaja relativa" de las firmas seleccionadas con relación a las restantes que habían sido invitadas para competir por el rol de coordinadores globales, fundada en "... la suma de sus capacidades, experiencia y antecedentes en los mercados de inversores institucionales y de distribución minorista ..." (art. 1°), cuestión sobre la que no me corresponde emitir opinión, por resultar una cuestión ajena a la competencia funcional de este organismo asesor de derecho.

También se estableció que los Coordinadores Globales Conjuntos (en adelante los CGC) representarían y se encargarían de la organización del grupo de entidades que actuarían como agentes o colocadores de las acciones respectivas, según los deberes, funciones y responsabilidades establecidas por el inciso a) del artículo 2° del decreto 588/93, y por las instrucciones que periódicamente pudiera impartirles el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Creo necesario poner de relieve que se dispuso igualmente que los coordinadores globales se ocuparían de representar y organizar el grupo de entidades que actuarán como agentes o colocadores de las acciones respectivas, así como de seleccionar —con la conformidad del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos— a dichos agentes y colocadores (art. 2°).

La resolución por sí misma no implicó la firma del contrato de underwriting ni la obligación de suscribirlo, no obstante lo cual, de sus propios términos se preveía desde el mismo momento su concertación —con fijación de las condiciones generales de venta, obligaciones de los CGC y la de los demás agentes colocadores— para una fecha posterior "no más tarde del 31 de julio de 1993" y para cuya negociación se facultaba a la Secretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa (ver art. 3°).

Así efectivamente ocurrió, negociándose por parte de los funcionarios autorizados sucesivos proyectos de contratos de "Colocación de Acciones", "Colocación de Acciones en los Estados Unidos de América" y de "Suscripción de Acciones" (ver exptes. "Nota P. T. N° 0474/93" y constancias de fs. 380/520), que finalmente fueron aprobados por resolución M. E. y O. S. P. 678, del 25 de junio de 1993 (ver copia a fs. 523/526) y fueron suscriptos a los efectos de materializar la privatización.

d) Efectuada así la descripción inicial del diseño de la operatoria de underwriting, me referiré en lo que sigue al "método de la tabla de demanda" o "book building tender", por ser el sistema de colocación de acciones que fuera finalmente escogido para su aplicación en el presente caso.

Según surge del informe obrante a fs. 2/50 del expediente 040-005899/93 agregado sin acumular, este método contiene la característica esencial de permitir al emisor (o vendedor) una gran flexibilidad para supervisar la colocación accionaria de acuerdo con sus objetivos y reducir los riesgos del proceso de formación del precio evitando quedar supeditado exclusivamente a la cotización que resulte del mercado al que, por otro lado, en este sistema se identifica y dinamiza con anterioridad.

Se agrega que mediante tal procedimiento los encargados de colocar las acciones, durante un período previo al de la suscripción, van recibiendo información sobre el nivel, volumen y fuente de la demanda, asumiendo la obligación de suministrar dicha información al emisor o vendedor de las acciones y que dicha información es registrada en libros que son llevados por cada uno de los colocadores con indicación del interés (intención de compra) e identidad de los eventuales compradores sin que éstos queden, por tales intenciones preliminares, obligados en firme.

Se asegura, además, que esta etapa se desarrolla en el marco de un proceso complejo, caracterizado por la permanente comunicación entre colocadores e interesados, en el cual es posible gestar las condiciones para un incremento de las indicaciones de interés, sea en el precio, sea en el número de acciones. Se trata de un dinámico relevamiento de datos en el que el insinuante tiene posibilidades de ir modificando sus intenciones conforme la marcha del "book", posibilidad que los colocadores son encargados de promover ("market making").

Al finalizar el período de formación del libro de registro de intenciones de compra ("book") —según se expresa en el informe al que me vengo refiriendo—, los colocadores, junto con el emisor o vendedor (en el caso el Estado Nacional), examinan la totalidad de los registros asentados y así es posible determinar cuál es la oferta y el precio óptimo que permitirá alcanzar los objetivos de maximización de fondos y la creación de una base de inversores de alta calidad. Vale decir que el

conocimiento que tal información brinda al vendedor le permitiría obtener un precio más alto por las acciones y mantener su imagen vendedora en el mercado, al determinarse con mayor exactitud el riesgo de subvaluación producto de la incertidumbre de la demanda y el de la posibilidad de una baja posterior del mercado.

Es oportuno destacar que, en el sistema en estudio, la fijación de estas variables (cantidad de acciones y precio de ellas), quedaba reservada a la decisión del Estado Nacional, aun cuando debía ser consensuada con los Coordinadores Globales ya que sólo del consenso de ambas partes podría resultar el contrato de underwriting cuya celebración se preveía realizar al término de la etapa del "book building". Es claro, sin embargo, que de no haber acuerdo entre el Estado Nacional y los underwriters el Estado siempre quedaba en la libertad de proseguir la operación de alguna otra forma y valiéndose de cualquier otro sistema u operadores, o incluso de suspender toda la operación.

También puede extraerse del informe técnico apuntado que, dentro de la estrategia que postula este método de "book building", la figura del Coordinador Global guarda estrecha vinculación con la magnitud de las transacciones que se intenta realizar, que exige una información coordinada en forma centralizada. Por ello se prevé que sea éste quien reúna y clasifique la información —por precio, volumen, calidad del inversor— de modo tal que al finalizar esta etapa el Coordinador Global se encuentra en condiciones de predecir, con cierto grado de razonabilidad, cuál será la curva de demanda, y el emisor podrá así decidir la cantidad de acciones a vender y su precio más conveniente.

Se pone de relieve que el Coordinador Global asumiría, así, una gran responsabilidad en la colocación de las acciones, ya que su rol tiende a optimizar la distribución de las inversiones, el control y comunicación con los miembros del Sindicato de Bancos, analizando las ofertas que se van recogiendo y clasificándolas por precios, cantidades y tipo de demanda —de corto plazo o especulativa, o de largo plazo—, a fin de asegurar el total éxito final de la transacción.

En el caso en examen, según se indica en el informe técnico examinado, fue previsto que el rango de precios preliminar para las acciones de propiedad del Estado Nacional de la empresa YPF S. A. sería establecido por el Gobierno, en consulta con el Coordinador Global, brindando la posibilidad de tener en consideración no sólo las valuaciones estimadas sobre la base de las ganancias esperadas, flujo de fondos, reservas de petróleo, potencial de crecimiento de ventas, etcétera, sino además los indicadores de las empresas petroleras internacionales comparables y, también, la percepción del riesgo argentino que tuvieran los inversores.

Es imprescindible destacar que la fijación del precio de referencia, en el caso particular traído en consulta, habría partido de la tasación sobre los activos de YPF SA, realizada en los términos del artículo 11 de la ley 24.145, sobre la que se expidiera la Sindicatura General de la Nación obrante a fojas 355/371, conjugándola con las variables antes enunciadas, las circunstancias del mercado y las opiniones del Gobierno Nacional y de los colocadores.

No obstante ello, corresponde tener especialmente en cuenta que tal fijación del precio de referencia, así como la determinación del valor de venta definitivo y los cupos de acciones a venderse son cuestiones de mérito, oportunidad y conveniencia, ajenas a la competencia específicamente jurídica de esta Procuración del Tesoro y propias de las autoridades administrativas, tal como ya se señalara en el capítulo I del presente dictamen.

Finalmente es dable destacar que, en forma inmediata a la determinación del precio de venta y acordado el contrato de underwriting, comienza el compromiso de los colocadores hasta la efectiva venta, asumiendo los "underwriters" el riesgo de que las indicaciones de interés de los inversores no se transformen en operaciones una vez asignados los cupos en la emisión, en cuyo caso se convierte en definitiva su propiedad sobre las acciones y exigible su obligación de abonar su precio en dinero. Así resulta del examen de las cláusulas de los contratos agregados a estos obrados.

Los pronunciamientos técnicos agregados en autos (ver fs. 14/20 y traducción de fs. 21/29 del expediente "Nota P. T. s/N° del 13 de mayo de 1993, e informe de fs. 2/50 del expte. 040-005899/93), exponen las ventajas que ofrece este método frente al denominado sistema Holandés —Dutch Auction—, que fuera utilizado en las ventas de acciones de ... en nuestro país. Se sostiene que ellas resultan, por una parte, de la información que provee la tabla de demanda con anticipación a su efectiva colocación y, por otro lado, de la circunstancia de ser fijado el precio definitivo una vez conocida la demanda con intervención del emisor o vendedor y los bancos colocadores.

4. — Otras razones que —además de las ya enunciadas— también concurrirían para fundar la razonabilidad de la elección, independiente de su conveniencia específica, y que surgen de los informes técnicos a que hiciera alusión, entre otros antecedentes, son:

a) Que la colocación de las acciones de YPF S. A. excedería toda posibilidad de absorción dadas las dimensiones del mercado accionario de nuestro país, razón por la cual resultaba necesario recurrir a bolsas y mercados internacionales (circunstancia que seguramente fundamentó la decisión adoptada por el legislador al sancionar el art. 9° de la ley 24.145).

Como consecuencia necesaria de esa concurrencia a los mercados internacionales, se hacía también indispensable acudir a sistemas de colocación y venta de acciones ya utilizadas en dichas plazas, dado que la magnitud de la oferta tornaba imprescindible involucrar a inversores externos a gran escala.

Con fundamento en tales circunstancias, el Poder Ejecutivo Nacional estableció —en el artículo 1° del decreto 588/93— la pertinencia de ajustarse a las condiciones y prácticas de los mercados nacionales y/o internacionales en que habría de realizarse la colocación.

Respecto de esto último, es dable puntualizar la mención de los informes técnicos a que hiciera alusión, en cuanto a la importancia de reparar en las nuevas ventas que se proyectan, toda vez que la magnitud de la oferta de acciones que representa YPF S. A. debería responder, razonablemente, a la capacidad de absorción de los mercados nacionales e internacionales, debiendo preverse la posibilidad de la concreción de diversos procesos de venta, todo lo cual será determinado conforme la información que resulte de la "tabla de demanda" que constituye la base del sistema de colocación de acciones analizado.

b) En este sentido, conforme las constancias arrojadas a la causa, se ponderó de manera especial la circunstancia de tratarse de un procedimiento de venta de acciones ya utilizado internacionalmente en otras privatizaciones, incluso de empresas petroleras, citándose, a la sazón, los casos de ..., entre otras (confr. fs. 356/371, en especial 357, punto 2).

c) También se advierte de los informes acompañados, a los que antes me refiriera, no sólo la mayor certidumbre que representa el diseño adoptado frente a otras opciones analizadas, incluso de sistemas ya utilizados en el país en otros casos, sino además que el sistema previsto para la formación del precio de referencia permitiría asegurar la firmeza posterior del valor de cotización de las acciones, extremo de singular importancia en la especie, en tanto se esgrime como valor a proteger el mantenimiento de la estabilidad del mercado accionario (ver fs. 356/371, en especial 356 punto 1.1).

d) Por lo demás —según se sostiene a fs. 14/20 y traducción de fs. 21/29 del expte. "Nota P. T. s/N° del 13 de mayo de 1993," agregado sin acumular— el diseño propuesto alienta una mayor transparencia en todo el procedimiento, puesto que la totalidad de las indicaciones de interés deben registrarse e incorporarse a "la tabla de demanda" incluyendo su precio y magnitud, conservando tanto el emisor como los colocadores dicho registro. De este modo al término de este período se contaría con la información necesaria para establecer cuál es la oferta y el precio que equilibrará el mercado. Así, al tiempo de decidir la venta, se estaría en condiciones de controlar y obtener la colocación que de mejor forma salvaguarde todos los intereses del Estado en juego en la especie.

e) Asimismo, se indica que otra de las ventajas que presentaría este método se halla representado por la posibilidad de atomizar la propiedad de los paquetes accionarios en manos de múltiples pequeños inversores, circunstancia que se compadece con el espíritu de los estatutos aprobados y que permite concretar una adecuada representatividad en la empresa al efectuarse la colocación entre grupos identificados, así como asegurar el trabajo de un órgano administrador independiente en el manejo de YPF S. A. con un claro criterio comercial.

f) Debe agregarse a todo ello, también a partir de los informes técnicos producidos, que el sistema de "book building" contribuiría a apuntalar el precio de las acciones que son vendidas, creando una amplia base de inversores y un mercado líquido tanto en los Estados Unidos de América como en Europa que, por añadidura, significaría la atracción de inversores de largo plazo a la República Argentina (ver fs. 2/50 del expte. 040-005899/93).

g) Se señala igualmente que mediante este procedimiento y la oferta en los centros propuestos, se evitaría la dependencia de un solo mercado, a través de una buena diversificación de plazas y sobre una base de tenedores estable.

h) De igual modo, se sostiene que se allanaría el camino para futuras ventas de acciones, tanto de la propia YPF S. A. como provenientes de empresas privatizadas —en otros sectores—, utilizando, en este último supuesto, al sector petrolero como piloto para el ingreso en los mercados en las condiciones anotadas.

i) Se informa también que, así como ha ocurrido en otros países del mundo luego de la privatización, podrían aprovecharse las condiciones e imagen propias de las acciones del sector para apoyar la creación de fondos de pensión en la República.

En lo que se refiere a la evaluación de los informes técnicos producidos, es del caso recordar que esta Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido reiteradamente que tales informes "... merecen plena fe, siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor", agregando que: "La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia sin que cupa a este Organismo entrar a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica" (Dictamen N° 317/91 y sus citadas).

5. — Se ha señalado anteriormente que resultando la ley 24.145 una ley especial y posterior que regula de manera específica la privatización de que se trata, sólo corresponde acudir a los principios generales de la ley 23.696, en caso de ausencia de disposiciones concretas sobre algunos aspectos de la privatización.

También se expuso que aquella ley especial de privatización contiene la expresión de la voluntad legislativa de elegir el sistema de venta en bolsas y mercados bursátiles nacionales e internacionales, como procedimiento de selección del co-contratante en el caso específico, y que autoriza al Poder Ejecutivo a establecer las condiciones y los volúmenes más propicios para cada licitación y al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos para la realización y aprobación de todos los actos jurídicos contemplados en el capítulo II de la ley 23.696, que resulten necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en la misma ley 24.145 (cfr. arts. 9°, 10 y 18).

Es del caso destacar que, entre las opciones contenidas en los cinco incisos del artículo 18 de la ley 23.696, sólo se encuentra, en el inciso 4, la "Venta de acciones en Bolsas y Mercados del País".

De allí que deba concluirse que la previsión del artículo 9° de la ley 24.145, en cuanto alude a bolsas y mercados nacionales e internacionales se aparta de los procedimientos previstos en el citado artículo 18 y, en consecuencia, debe seguirse que excluye la aplicación de la totalidad de dicha norma en la especie.

También creo necesario concluir que, al adoptarse para la enajenación de las acciones uno de los procedimientos recomendados técnicamente y de uso corriente en los mercados en que habría de realizarse la colocación, según surge del informe de fojas 2/50 del expediente 040-005899/93, al que me he referido anteriormente, la elección del Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos resulta encuadrada en los términos de la autorización legislativa expresa y del artículo 1° del decreto 588/93, sin que ello implique pronunciarse sobre las razones de conveniencia económica que pudieran haberse ponderado para su elección.

Lo expuesto resultaría suficiente para justificar la legitimidad y razonabilidad de la elección del diseño escogido; no obstante, entiendo adecuado examinar —en forma supletoria— si dicho diseño se compatibiliza con los principios que gobiernan el régimen genérico de las privatizaciones.

Es necesario tener presente que los principios rectores de todo el sistema de privatización establecido por la ley 23.696 y sus disposiciones reglamentarias, pueden resumirse en la necesidad de procurar que en los procedimientos para la selección del co-contratante se preserven e impulsen, en grado máximo, la publicidad, la transparencia, la concurrencia, la igualdad y el resguardo de otros intereses de la comunidad.

En este sentido, resulta esclarecedor el contenido del artículo 18 de la ley últimamente citada, en cuanto establece que "... En todos los casos se asegurará la máxima transparencia y publicidad, estimulando la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados ... La oferta más conveniente será evaluada no sólo teniendo en cuenta el aspecto económico, relativo al mejor precio, sino las distintas variables que demuestren el mayor beneficio para los intereses públicos y la comunidad. A este respecto, en las bases de los procedimientos de contratación podrán, cuando resulte oportuno, establecerse sistemas de puntaje o porcentuales referidos a distintos aspectos o variables a ser tenidos en cuenta a los efectos de la evaluación".

a) El proyecto de privatización de YPF S. A. ha tenido una difusión pública mucho mayor que la contemplada en las exigencias de la ley 23.696 y su decreto reglamentario.

Es un hecho notorio que los principales diarios nacionales y aun internacionales se han extendido no sólo sobre el hecho en sí de la privatización, sino también sobre la metodología que habrá de utilizarse en la venta de acciones en bolsas y mercados.

Entiendo, por ello, que el valor publicidad, protegido en la especie, se respeta cabalmente en el procedimiento elegido.

b) En lo que se refiere al principio de transparencia, según surge de los informes técnicos a que me refiriera en el punto 3 de este mismo apartado y teniendo en cuenta las facultades de los órganos de control de las Bolsas y Mercados nacionales e internacionales que allí se mencionan, entiendo que el sistema elegido preserva el carácter "cristalino" que debe guardar el procedimiento de selección por imperativo legal.

En este aspecto, tengo en cuenta los procedimientos llevados a cabo ante la Comisión Nacional de Valores, la Securities Exchange Commission de los Estados Unidos y la SEAO del Reino Unido de Gran Bretaña, así como las aprobaciones que cada uno de estos organismos de control bursátil han otorgado al diseño propuesto, una vez evaluadas todas las constancias que se pusieron en su conocimiento (ver nota remitida por los asesores legales externos de YPF Sociedad Anónima, que se remitiera a esta Procuración del Tesoro y se agregara a fojas).

c) En cuanto al respeto de la igualdad de los oferentes, el diseño permite un trato en general igualitario, con un privilegio para los pequeños inversores nacionales, que da cumplimiento a las previsiones de la Ley de Reforma del Estado (23.696) en la materia.

d) En lo que hace al principio de concurrencia, es necesario tener en claro que el mismo se traduce en dos ámbitos completamente distintos, a saber: el de la concurrencia de la mayor cantidad de oferentes y el de la competencia entre oferentes por mejores precios.

Entiendo que, a la luz de los informes técnicos arrimados a estas actuaciones, en ambos casos se resguarda el bien tutelado por la ley 23.696 y su reglamentación, aprobada por decreto 1105/89:

d.i) En efecto, desde el punto del aseguramiento de la mayor concurrencia de interesados, el hecho de la amplitud de la oferta en los mercados nacionales e internacionales —calificada por el previo cumplimiento de los trámites exigidos por los organismos nacionales e internacionales de contralor bursátil para acceder al mercado minorista— y la utilización, como agentes, de Bancos de primera línea a nivel internacional, así como la publicidad que ha tomado la venta en el orden nacional e internacional, permiten asegurar que el procedimiento tiende a procurar la presentación de la mayor cantidad posible de oferentes.

d.ii) En cuanto a la competencia en los precios, es necesario destacar que el propio legislador ha postergado —para el caso de la privatización de YPF S. A. la utilización de sistemas de estricta subasta de precios, como lo serían el concurso, la licitación y el remate públicos.

Tanto es así que, a pesar de conocer la utilización de un sistema mixto entre el Remate y Concurso públicos y el de venta en Bolsas y Mercados, a que se recurriera para la colocación de las acciones telefónicas (ver Dictamen 198:78, ap. V, punto b), no ha seleccionado ese mismo procedimiento sino que ha limitado la opción a la venta de Bolsas y Mercados nacionales y extranjeros (cfr. art. 9° de la ley 24.145).

d.iii) Desde la perspectiva que ofrece esta elección legislativa, que no puede soslayarse, cabe tener en cuenta que —según se indica en los informes técnicos producidos— el método del "Book Building" permitiría al colocador de las acciones tener, anticipadamente, un "mapa" o "espectro" del mercado potencial de accionistas, de manera de compatibilizar las dos variables que se conjugan en toda venta de acciones de este tipo, a saber: la cantidad de acciones que se quieren vender y el precio al que se pretende ubicarlas en el mercado —teniendo en cuenta su colocación futura— a los efectos de posteriores ventas de otras acciones del mismo tipo.

Por cierto, al cierre del período informativo, los agentes informarán al Estado Nacional, la composición de la curva de interés, permitiendo a éste elegir la variable más conveniente entre cantidad de acciones a vender y precio por cada acción.

Es evidente que, en esa instancia, una decisión que restrinja la cantidad de acciones a vender implicaría la obtención de un mayor precio por cada acción, mientras que otra que virtiera más cantidad de valores mobiliarios al mercado redundaría en un precio menor para permitir la colocación total, salvo que la magnitud de la oferta asegure la posibilidad de venta de todas las acciones que se encuentren disponibles a ese efecto, al mismo precio.

Estas consideraciones parecen haber sido tenidas en cuenta por el Poder Legislativo que, en el tercer párrafo del artículo 10 de la ley 24.145, dispuso que: "El Poder Ejecutivo Nacional establecerá las condiciones y los volúmenes más propicios para cada licitación de acciones. Determinará o no, para cada una de ellas, los porcentajes máximos para ser adquiridos por grandes inversores nacionales o extranjeros, debiendo reservar un porcentaje de la oferta para pequeños inversores argentinos".

Tampoco puede considerarse livianamente esta previsión legislativa, especialmente si se tiene en cuenta que eximen su compatibilización con uno de los principios más claros de la ley 23.696 y su reglamentación.

En efecto, el artículo 17 del reglamento aprobado por decreto 1105/89, estableció que: "Como principio general se preferirá la venta total. La venta parcial que implique la subsistencia del Estado como accionista, será de aplicación restrictiva y deberá fundarse en razones de conveniencia comprobada, teniendo en cuenta la actividad desarrollada por el ente, empresa o sociedad".

Cabe colegir, pues, que el propio Poder Legislativo ha autorizado al Ejecutivo, previo juicio de oportunidad, mérito y conveniencia sobre el que no me corresponde emitir opinión, a excepcionar de aquel principio de preferencia de la venta total, cuando se advirtiera la conveniencia de una venta gradual.

No puede soslayarse, sin embargo, que esta autorización quedó limitada por la propia ley 24.145, que estableció que el acto inicial no podría comprender un porcentaje menor al 20 % del capital accionario, a través del procedimiento de venta en Bolsas y Mercados nacionales e internacionales.

En este último aspecto, los informes producidos señalan que no puede dejar de contemplarse el efecto que, sobre futuras colocaciones de acciones a privatizar, pudo tener el comportamiento que registraran los valores de las acciones telefónicas con posterioridad a su venta en el mercado, por el sistema de remate holandés. La caída del precio de esas acciones, que los técnicos adjudican —entre otras causas— al sistema utilizado (ver fs. 14/20 y 21/29 del expte. "Nota P. T. s/n° del 13 de mayo de 1993"), perjudicaría en este caso las ventas estatales futuras de la misma clase de acciones, así como —en el orden nacional— la condición general del mercado bursátil, que también debe ser tenida en cuenta como valor a ser considerado por el Estado.

Parece a mi juicio evidente que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo han tenido en cuenta la necesidad de preservar, no sólo el mercado futuro de nuevas acciones a privatizar, sino también la importancia de contribuir a dar mayor solidez al mercado accionario local, a través de un procedimiento que aleje la posibilidad de graves oscilaciones en los precios.

Las consideraciones expuestas me llevan a concluir que el sistema elegido, a través de la reglamentación de la ley 24.145, pese a su especialidad, es también compatible con los principios que informan la ley 23.696, más allá de aquellos aspectos que ha sido específicamente dejados de lado, conforme se ha visto.

XII. — En lo que se refiere a los contratos a suscribirse a los efectos de la implementación de la operatoria, finalizado el período de "book-building", las actuaciones dan cuenta de la negociación y firma de los siguientes:

1. CONTRATOS DE UNDERWRITING.

i. Concepto y naturaleza.

En forma liminar, considero conveniente recordar lo ya expresado por esta Procuración del Tesoro, respecto de la naturaleza y funcionamiento de los contratos de underwriting, con motivo de la privatización de las tenencias accionarias del Estado Nacional en las sociedades licenciatarias de servicios telefónicos (ver Dictámenes 198:178).

En tal oportunidad sostuvo, luego de destacarlo como una de "... las modernas modalidades para el financiamiento de las necesidades empresariales de las sociedades mercantiles...", que se trata de un contrato propio del mercado de capitales, sin regulación legal orgánica y, por lo tanto, atípico, bien que previsto expresamente su objeto como una de las actividades posibles de la banca de inversión y de las compañías financieras (art. 22, inc. 3 y 24, inc. f, de la ley 21.526, en cuanto contempla: "Realizar inversiones en valores mobiliarios ... prefinanciar sus emisiones y colocarlos").

Indicó asimismo que esta operatoria contractual resulta de suma utilidad para las sociedades comerciales, cuando se intenta la apertura del paquete accionario de las sociedades, ampliando así su capital, y no recurrir al préstamo de dinero o a la emisión de obligaciones.

Con el underwriting se supera el riesgo de una eventual falta de interés de los socios o de los mercados donde se pretenda colocar las nuevas acciones, asegurándose la colocación de la emisión.

También se señaló que si bien la manera de implementar este tipo de contrato puede adoptar caracteres y particularidades diversas —obedientes a las condiciones de la operación y su negociación—, al punto de resultar difícil una clasificación al modo tradicional, cierto es que a partir de la observación de la costumbre generada desde la reiteración de los contratos más usuales, la doctrina ha distinguido dos grandes caracterizaciones, que responden a los siguientes lineamientos:

a) Por una parte, quizá la que dota de más personalidad propia a la figura, se trataría del desarrollo de una operación de prefinanciación y colocación de acciones, en la cual el Banco underwriter, además de encargarse de estos servicios de colocación, efectúa una entrega de dinero a la sociedad emisora, en calidad de préstamo, que ésta aspira a devolver, mediante la afectación del precio de venta de los valores. En este supuesto, el Banco no suscribe sino que busca suscriptores y no garantiza la colocación ya que obra por la sola cuenta de la emisora como gestor de medios percibiendo además de la comisión de colocación, un interés por el préstamo, durante el lapso de su utilización.

En esta caracterización, el contrato deviene en una combinación de mandato y de mutuo, con la particularidad de que a medida que el mandatario va percibiendo el precio de la venta de las acciones, irá extinguiendo el préstamo, mediante la aplicación de aquél a éste. Todo ello enrola claramente a dicho tipo de contrato en la idea de una operación de crédito y prestación de servicios.

b) En otra "sub-especie", caso en que el underwriting es llamado "en firme", el Banco suscribe a título personal y pleno y efectúa el aporte correspondiente.

En este supuesto, si bien el underwriter se encuentra obligado a la colocación posterior de las acciones, mediante su venta en el mercado, en el cumplimiento de esta obligación actúa por cuenta propia, busca compradores no suscriptores, y no puede recuperar el dinero invertido, ni devolver las acciones que no alcance a colocar. Aquí, usualmente, la retribución del Banco consistirá, a más de otras que pudieran preverse, en la diferencia entre lo aportado por él al suscribir y el precio de venta que reciba de terceros (sobre las dos figuras puede verse Bollini Shaw-Bonco Villegas, "Manual para operaciones bancarias y financieras", Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As. 1981, págs. 325 y ss.; y Barbier, Eduardo, "Contratos civiles y comerciales" coordinado por Carlos Alberto Ghersi, Ed. Astrea, Bs. As. 1990, págs. 147 y ss.).

c) No obstante, son posibles sistemas mixtos, en los que los bancos underwriters se obligan a ocuparse de la colocación de las acciones en el mercado dando o no un anticipo en préstamo, pero no comprando "en firme" aunque sí "garantizando" que comprarán por sí todas las acciones que no hayan podido colocarse.

En este sentido —bien que requiriendo como elemento el préstamo de dinero— se ha indicado: "Este procedimiento de garantía de colocación llamado underwriting, implica de parte de la entidad garante un esfuerzo destinado a lograr la colocación más rápida de las acciones emitidas y si existiere remanente, absorberlo o recolocar a su costo y riesgo" (ver Martín Roman Bourel y Martín R. Bourel —h.—, "La oferta pública de títulos valores y el financiamiento de las empresas", La Ley, Tomo 1991-E, Sección doctrina, páginas 1383 a 1387).

Se agregó allí que: "El riesgo propio de la operación hace que con frecuencia las entidades colocadoras constituyan entre ellas consorcios financieros que tendrán a su cargo el esfuerzo de colocación que requeriría de publicidad y apoyo promocional. El elemento tipificante del contrato de underwriting o garantía de colocación, es la operación de prefinanciación de la emisión que efectúa la entidad financiera para su posterior colocación (art. 22, ley 21.526 -ADLA, XXXVII-A, 121—) (op. cit., loc. cit.).

También se expone que: "El underwriting o entidad colocadora (así en el original), prefinanciará a la sociedad que aumente su capital, haciéndole ingresar rápidamente los fondos requeridos, revistiendo singular importancia la elección de un prestigioso agente colocador —banco, entidad financiera o agente bursátil— que transmitirá al público la idea de que la operación ha sido bien programada y que está sólidamente respaldada, lo cual redundará en una más fácil colocación de los títulos" (op. cit., loc. cit.; lo que está entre paréntesis me pertenece).

d) También es posible encontrar otras modalidades atípicas entre las que resulta necesario señalar aquella en que —como fue el caso de la privatización de las acciones de las empresas telefónicas: ver Dictámenes 198:178 y 199:203 y es del sub-examine— el contrato de underwriting no versa respecto de la colocación de acciones que se emiten y libran a la suscripción sino que tiene por objeto acciones ya emitidas que su titular busca liquidar, figura ésta propia de procesos privatizadores.

ii. Características generales de los contratos de underwriting.

Lo hasta aquí referido ha sido traído al efecto ilustrativo del funcionamiento de la figura, ya que en el caso de las acciones de YPF:

a) Las acciones no son entregadas por la compañía en suscripción (aumento de capital) sino por el Estado a la venta, en su calidad de titular propietario de ellas, con lo que se configura un underwriting fuera de los moldes genéricos antes indicados y más cerca de la última de las modalidades referidas.

En este sentido cabe recordar lo advertido por esta Procuración del Tesoro en el caso del contrato de underwriting de las acciones de las empresas telefónicas, ocasión en la que puso "... de relieve su acentuada atipicidad, al conjugar ideas propias de las dos caracterizaciones antes señaladas, de un modo tal que instrumenta una operatoria singular ... no se está en presencia de una típica operación de crédito en busca de financiamiento a través de la incorporación de capitales nuevos con los cuales continuar o acrecentar los negocios sociales, sino —dentro del marco del proceso de privatización— de una operatoria de liquidación de activos ya existentes, realizada desde fuera de la sociedad cuyo capital integran las acciones y por parte del titular de estas últimas".

b) Consecuentemente, en el caso en análisis, los adquirentes de las acciones actúan como compradores de su actual tenedor, aunque con la finalidad expresa de colocarlas en el mercado, y no como suscriptores aportantes de una primera emisión: las acciones ya están emitidas.

c) No se establece que los Bancos underwritings efectúen el anticipo financiero que normalmente caracteriza a la figura.

d) La figura empleada no responde a una necesidad de financiamiento de la sociedad cuyas acciones se colocan sino a necesidades propias de una liquidación de activos del titular de aquéllas que, en el caso, busca privatizar su tenencia.

e) En la forma como está configurado el underwriting cabe asignarle la calidad de especie "en firme" en cuanto, previo el proceso de "book building" que lleva a la determinación del precio, los Bancos underwriters asumen la calidad de compradores iniciales directos de las acciones por las cantidades asignadas, para su posterior colocación en plaza. Tal forma de operar los torna, indirectamente, en garantes de la colocación por cuanto quedarán como compradores finales en

caso de no poder, por alguna razón, llegar a colocar las acciones según las esperanzas que despertó el "book building".

iii. El contrato para la colocación estadounidense.

El Contrato de Colocación de Acciones en los Estados Unidos de América —que obra en copia a fs. 979/1101— fue suscripto entre el Estado Nacional con ..., como representantes de los colocadores de acciones en el citado país.

El convenio se refiere a la colocación de 65.000.000 (sesenta y cinco millones) de acciones clase "D" de YPF, representados —en relación uno a uno— por otros tantos ADS ("American Depositary Shares") individualizadas como "efectivas", con más una cifra de ADS caracterizados como "opcionales" tendientes a cubrir sobreadjudicaciones (hasta 20.000.000 de ADS menos las ADS Internacionales opcionales y los ADS argentinas opcionales), acordándose que tales ADS serán comprados por los underwriters (cláusulas 1 y 3 del texto sometido) por el precio de U\$S 18,24 (ver resolución M. E. y O. S. P. N° 697/93 obrante a fs. 933/934) por cada ADS —en las cantidades asignadas a cada uno de ellos— y que las acciones por aquéllos representadas serán depositadas en The Bank of New York, mediante el contrato de depósito a celebrarse, entidad custodia que emitirá los ADRS (recibos o certificados del depósito de las ADS) con destino a los compradores de las acciones.

Creo del caso reiterar que no corresponde a esta Procuración del Tesoro emitir opinión respecto del precio así determinado, en tanto resulta una cuestión ajena a su competencia estrictamente jurídica.

En el contrato en estudio, se determina como sobreentendido que las entidades underwriters se proponen la realización de la oferta pública de las ADS de los Estados Unidos en la forma establecida en el Prospecto (ver cláusula 1 "in fine" y 4), a tal punto que el gobierno fijó a esos fines el precio de U\$S 19 por acción (Res. M. E. O. S. P. 397/93).

Corresponde indicar, como acotación terminológica, que el acuerdo denomina a las ADS de los Estados Unidos y las internacionales con el nombre de "ADS ofrecidas" y a las acciones clase D representadas por tales "ADS ofrecidas", con el título de "Acciones Precedentes".

De sus cláusulas resultan las siguientes menciones y obligaciones, entre otras, que a los efectos de este análisis interesa destacar:

A) Manifestaciones y garantías de YPF ante las entidades colocadoras.

En este capítulo YPF Sociedad Anónima asegura a los underwriters haber efectuado la pertinente "Declaración de registro" ante la "Securities Exchange Commission" —formulario F:1— respecto de las acciones precedentes y las acciones argentinas; y que ha sido declarada en vigencia y no existe intención de modificarla. Se agrega que dicha declaración de registro no contiene ninguna manifestación falsa u omisión de algún hecho esencial y que, juntamente con el formulario de prospecto relacionado con los ADS estadounidenses, se denominará "Prospecto".

También se asegura la presentación ante la referida Comisión de la "Declaración de Registro de ADS" —formulario F:6— referida a ADS.

Con relación a la oferta argentina, se indica la solicitud presentada ante la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, así como la obtención —respectivamente— de la autorización para la oferta de las acciones en el país y su pertinente inscripción bursátil.

También se garantiza que las acciones en circulación están emitidas en forma válida, debidamente autorizadas y registradas y que, excepto todo aquello que se refiere en el Prospecto como "Descripción del Capital Accionario", no existen otras restricciones a la transferencia de acciones que las allí consignadas; los accionistas no tienen derechos de rescate ni derecho para adquirir las acciones objeto del contrato; y que no existen títulos de crédito y valores en circulación, "warrants", derechos u opciones para comprarle a la Compañía u obligación de ésta de emitir acciones.

Se asegura asimismo:

a) La debida constitución y existencia legal de YPF, su buena reputación y que cuenta con las autorizaciones, las aprobaciones y licencias de todos los organismos públicos para ser propietaria y administrar sus bienes, ejercer su giro comercial, y con todas las patentes, marcas y derechos necesarios a ese fin; como también que la descripción de los estatutos contenida en el Prospecto es precisa y real.

b) La validez de los contratos de underwriting en los tres tramos y la del contrato de depósito;

c) Que excepto lo indicado en el Prospecto, no existen acciones pendientes contra la Compañía que, decididas en forma adversa, puedan afectar su situación financiera o su capacidad para cumplir con las obligaciones que surgen de los tres contratos de underwriting.

d) Que los estados contables y sus notas incluidos en el Prospecto fueron preparados de acuerdo a los principios contables de aceptación general en la Argentina.

e) Que al momento de la entrada en vigencia de la declaración de registro, la Compañía ha cumplido con las disposiciones del artículo 517.075 de las leyes del Estado de Florida, 1987, que requieren la revelación en el prospecto por parte de la compañía de si ella llevará a cabo alguna operación comercial con Cuba o persona ubicada en Cuba.

f) Que no existen causas laborales con los empleados de YPF S. A. que puedan derivar en un efecto sustancial adverso en la condición financiera de aquélla o el patrimonio de sus accionistas.

Entiendo imprescindible poner de relieve que he referido a estas manifestaciones de YPF Sociedad Anónima a título meramente ilustrativo y sin emitir opinión a su respecto, por cuanto resultan ajenas al contenido de la certificación legal requerida a esta Procuración del Tesoro y sobre cuyos términos se solicitara mi dictamen.

B) Manifestaciones, garantías y acuerdos del Estado Nacional como accionistas vendedor respecto de los colocadores de acciones.

Bajo estos rubros se conviene que:

a) Las acciones precedentes de las ADS efectivas y, en su caso, las opcionales de los Estados Unidos y de la oferta internacional —de las que se asegura la plena titularidad del accionista vendedor—, serán depositadas en la entidad depositaria conforme el contrato de depósito, momento en el cual la titularidad y todo derecho o interés sobre las acciones quedará transferido al depositario.

b) Con la emisión y venta de las ADS y el pago de ellas, tales ADS serán transferidas a las entidades underwriters libres de toda carga o gravamen.

Se establece que tal pago será hecho por las entidades underwriters contra la entrega de la ADS y mediante cheque a la orden del accionista vendedor.

c) Los tres contratos de colocación son válidos y exigibles y que tanto ellos como el contrato de depósito y la oferta, venta y entrega de las ADS no ocasionarán conflictos ni resultarán en incumplimientos de la Constitución Nacional y leyes de la República Argentina.

d) El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos está debidamente autorizado a celebrar los tres contratos de colocación en nombre y representación del Estado Nacional (accionistas vendedor).

e) No se abonarán impuesto de sellos a la emisión o transferencia de acciones ni tampoco impuesto a las ganancias o capitales con relación al depósito de las acciones en la entidad custodia para la emisión de las ADS ofrecidas o respecto de la venta y entrega de las acciones argentinas y ADS.

f) La sección "Accionistas principal y vendedor", en la declaración de registro y en el Prospecto no incluyen ninguna manifestación falsa sobre hechos esenciales.

g) El Estado Nacional no renunciará al contrato que tiene con las Provincias por el cual éstas acuerdan no vender las acciones clase B en la forma de las clase D por un período de 18 meses posteriores a que se complete la Oferta Combinada.

Los contenidos de estas manifestaciones, en lo esencial, serán examinados más adelante, en oportunidad de emitir opinión respecto de las cláusulas de la certificación legal que se solicita a la Procuración del Tesoro.

C) Acuerdos de la Compañía con las entidades colocadoras.

Entre otras obligaciones, corresponde destacar que YPF S. A. se obliga ante los underwriters a la presentación del Prospecto ante la SEC y a no modificarlo salvo aprobación y notificación de tal circunstancia, debiendo proporcionar información acerca de la entrada en vigencia de la declaración de registro y de cualquier modificación.

En tal sentido se establece que si dentro de los nueve meses posteriores a la emisión del prospecto se producen hechos que impliquen que éste contenga alguna manifestación falsa o la omisión de un hecho esencial, o si fuere necesario modificarlo para dar cumplimiento con la ley, la Compañía preparará a su costa la modificación correspondiente (prospecto complementario).

Se prevé que la Compañía deberá realizar todas las diligencias necesarias para lograr la calificación para la venta de los ADS de los Estados Unidos, conforme las leyes de este país y que entregará copias en cantidad razonable de las declaraciones de registro y del Prospecto y sus modificaciones, como también y durante los cinco años posteriores a la venta, copia de la memoria a los accionistas a cada una de las entidades underwriters.

Asimismo deberá hacerse cargo de ciertos gastos tales como: los resultantes del cumplimiento de sus obligaciones o las del accionista vendedor; los de la entidad depositaria y de custodia; los de los underwriters referidos a: los incurridos con relación a la calificación para venta de los ADS, inscripción en la Bolsa de Valores (honorarios), distribución de prospectos preliminares; y, si se venden los ADS, el reembolso hasta la suma de U\$S 100.000 de los gastos incurridos por los representantes de los underwriters de y por toda la colocación.

Comporta una importante obligación de YPF que durante los 18 meses posteriores a la fecha del contrato, la Compañía no podrá —salvo consentimiento expreso escrito de los underwriters— ofrecer, vender, o contratar para vender acciones de cualquier clase o ADS correspondientes, salvo que se refieran a las enajenaciones correspondientes a los otros contratos de colocación, a la oferta de "recompra" de acciones clase D conforme lo previsto en el Prospecto, cierto número de acciones en bonificación de la oferta minorista, las acciones clase C destinadas al Programa de Propiedad Participada, y ofertas y venta de hasta 6 millones de acciones para su canje por Bonos de Consolidación de Hidrocarburos.

Cabe señalar que esta última obligación es también asumida por el Estado Nacional como accionista vendedor (Cláusula 5 b—ii).

D) Obligaciones e incumplimientos de los underwriters (cláusulas 6 y 8).

Se determina que las obligaciones de los underwriters quedan supeditadas a la precisión de las manifestaciones y garantías de la compañía y del accionista vendedor que se vierten en el contrato y al cumplimiento de los siguientes recaudos:

a) La entrega por parte de ... de una nota referida a los estados contables pronunciándose acerca de todos los puntos que allí se indican.

b) En la fecha de perfeccionamiento, la entrega de la opinión legal del Procurador del Tesoro de la Nación sobre una serie de aspectos jurídico—legales que allí se consignan y que son materia de este dictamen.

c) Que, con posterioridad a la celebración del contrato —y obviamente debe entenderse hasta el día del cierre de las operaciones—, no tenga lugar ningún cambio que afecte en forma particular el giro comercial o los bienes de la compañía que haga imposible la venta y el pago de las ADS ofrecidas, o que se produzca la suspensión en la negociación de títulos en las Bolsas de Comercio de Nueva York o Buenos Aires o en el SEAQ; cualquier moratoria general bancaria dispuesta por autoridades de Argentina, Estados Unidos o Londres; comienzo de hostilidades; cambio de condiciones políticas o económicas, o en la parte impositiva o cambiaria de la Argentina, incluyéndose la alteración de la relación peso-dólar.

Con relación al eventual incumplimiento de los underwriters en el pago de las ADS, media una distinción según el número de ADS que acordaron pagar los underwriters incumplidores sea menor o mayor al 10 % de lo que están obligados a adquirir.

En caso de que fuera menor, se prevé la realización de gestiones adicionales para la adquisición de tales ADS por otros interesados, incluyendo a los propios colocadores y, si no obstante no se realizaran las diligencias o no se obtuviere la colocación, se establece que los restantes underwriters cumplidores quedan obligados, en proporción a sus propias tenencias, a adquirir tales ADS.

Por el contrario, si el incumplimiento supera tal 10 % de lo que por el contrato deben adquirir y no se realizaron las diligencias adecuadas para la adquisición de tales ADS por parte de terceros en las 36 horas posteriores al incumplimiento, el contrato de underwriting quedará resuelto sin ninguna responsabilidad por parte de las entidades colocadoras que no incurrieron en el incumplimiento, ni del accionista vendedor ni de la compañía, excepto en lo atinente a las acciones originariamente adquiridas, quedando sobreentendido que rigen respecto del incumplidor las responsabilidades propias del derecho común.

E) Régimen de indemnizaciones e indemnidades.

Se establece que la Compañía mantendrá indemne e indemnizará a los underwriters por cualquier pérdida, daño o responsabilidad a la que éstos puedan quedar obligados en razón de cualquiera manifestación falsa u omisión en la declaración de registro, el Prospecto y sus modificaciones, incluyendo todo gasto en que haya incurrido la entidad colocadora con relación a la investigación o defensa de los hechos que le produjeron el daño.

Semejante responsabilidad tendrá el Estado Nacional en cuanto las manifestaciones falsas u omisiones que pudiera surgir de documentos públicos que hubieran sido utilizados en la sección

titulada "Accionistas principales y accionistas que realizan la venta" en la declaración de registro y en el Prospecto y sus modificaciones.

De su lado, cada underwriter indemnizará y mantendrá indemne al accionistavendedor y la compañía por el mismo tipo de falseddes y omisiones y gastos cuando ellos obedezcan a informaciones escritas suministradas por ellos a la compañía para su uso interno.

A más de preverse un sistema de tipo procedimental, por el cual la parte que deba indemnizar puede participar en la acción judicial promovida por el tercero a la parte que debe ser indemnizada, se establece que el aporte indemnizatorio será determinado en proporción a los beneficios relativos que cada parte recibió, por un lado la compañía y el accionista vendedor y, por el otro, los colocadores de la oferta estadounidense; y, en caso de que tal asignación no sea permitida por la ley aplicable, lo será teniendo en cuenta no sólo los beneficios relativos sino también el error relativo respecto de las manifestaciones falsas u omisiones.

En tal sentido, se considera que el "beneficio relativo" de los colocadores, por un lado, y de la compañía y del accionista vendedor, por el otro, tiene en cada caso la misma proporción que los descuentos totales y las comisiones que reciben los colocadores sobre el resultado neto total de la oferta estadounidense que recibió el accionista vendedor. En cuando al "error relativo" será determinado por la relación existente entre la afirmación falsa u omisión, por un lado y, por el otro, la intención, conocimiento, acceso relativo de las partes a la información y la oportunidad de corregir o impedir la anomalía.

Asimismo se establece que, no obstante, ningún underwriter deberá pagar suma alguna que exceda la suma en la cual el precio total de reventa de las ADS estadounidenses adquiridas y revendidas excede el monto de los daños y perjuicios por los que fue demandada la entidad colocadora y que ha de abonar por la falsedad u omisión.

F) Ley aplicable y Jurisdicción. Inmunidad soberana.

El contrato establece que se regirá e interpretará por las leyes del estado de Nueva York y que tanto la compañía como el Estado Nacional en su calidad de accionista vendedor se someten a los tribunales del Estado de Nueva York y de los tribunales federales con competencia en el distrito de Manhattan, ciudad de Nueva York, estableciendo provisiones especiales adicionales de tipo procesal.

Con relación a la renuncia de la inmunidad soberana, se prevé que, por este contrato, la República Argentina formula dicha renuncia con el mayor alcance que pueda resultar de la ley de inmunidad soberana de los Estados Unidos, de 1976. Asimismo, el país consiente en facilitar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Inmunidad del Reino Unido de 1978.

Tal renuncia contiene las excepciones que serán objeto de análisis al examinarse el proyecto de opinión legal que se requiere de esta Procuración del Tesoro.

iv. — El contrato de Suscripción de Acciones ("Subscription Agreement").

El acuerdo de referencia, que versa sobre la colocación de acciones fuera de los Estados Unidos y de la Argentina, fue suscripto entre el Estado Nacional (a través de su Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos) y las firmas ... y otros agentes (los gerentes) tendiente a la colocación de 40.000.000 (cuarenta millones) de acciones, representadas por ADS Internacionales (efectivas) —que representan acciones clase D— junto con una opción para adquirir adicionalmente hasta 20.000.000 (veinte millones) más (opcionales), menos el número de los opcionales que se coloquen por la oferta estadounidense y la oferta argentina.

Sus cláusulas son similares a las contenidas en el underwriting para la colocación estadounidense, correspondiendo destacar que el precio de la acción se determina en U\$S 18,54, bien que por separado se establece un honorario para los organizadores, extremo que identifica la retribución, en orden a su magnitud, con la pactada en el contrato de Colocación estadounidense.

v. — El contrato de Colocación de Acciones en la República Argentina.

El contrato de referencia ha sido signado por el Estado Nacional y los ... y otras entidades colocadoras, tendientes a la colocación de 35.000.000 (treinta y cinco millones) de acciones clase D (acciones efectivas argentinas) concediéndose una opción para que sean adquiridas hasta 20.000.000 (veinte millones) de acciones adicionales (acciones opcionales argentinas) menos el número de ADS opcionales adquiridos en los tramos estadounidense e internacional. También se fija el precio en U\$S 18,24.

Las cláusulas de este contrato son semejantes a las propias del contrato de underwriting para la colocación en los EE.UU, por lo que, aquí también, me habré de ceñir a consignar las siguientes acotaciones:

a) Los Bancos deberán integrar el precio de compra de las acciones al día denominado "fecha de cierre". Este pago está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones previas que son, básicamente, las que se indicaron para el contrato de colocación en el tramo estadounidense, y al recibo por cada uno de los Bancos de un comprobante emitido por la ... que acredite la anotación a favor de ellos de la transferencia de las acciones adquiridas, según el registro de acciones escriturales de YPF llevado por dicha entidad.

b) Con relación a los gastos se establece que YPF pagará los gastos ocasionados por el cumplimiento de sus obligaciones y las del Estado Nacional, debiendo además reembolsar a los Bancos los gastos razonablemente incurridos por éstos en relación a la oferta si es que la compra de las acciones no se consumara por causas imputables al accionista vendedor (cláusula 7).

c) Con relación a la ley aplicable se determina que será la de la República Argentina, en tanto que respecto de la jurisdicción, se conviene la de los Tribunales Federales con sede en la ciudad de Buenos Aires, no existiendo —obviamente— cláusula alguna de renuncia a la inmunidad soberana.

vi. — El contrato de depósito.

Entre YPF S. A. y el ..., éste en calidad de depositario, se conviene un contrato de depósito con los tenedores adquirentes de ADS, con motivo de la colocación y a los efectos previstos en él.

Las acciones —tal como ya se indicó con motivo del contrato de Colocación para los Estados Unidos de América— deberán ser depositadas por el Estado Nacional (accionista vendedor) en el ..., en manos del custodio que éste designe.

Recibidos por el custodio las acciones se emiten los ADRS o certificados o recibo de depósito que se entregan a los tenedores adquirentes en prueba de las acciones o ADS.

El convenio determina los elementos que deben tener los certificados o ADRS que emite el depositario (se agrega al contrato como ANEXO un modelo de certificado) y establece un régimen de depósito regulatorio de las relaciones con los titulares de los ADRS.

Entre sus normas merecen ser destacadas las referidas al registro y transferencia de ADRS, su extravío y canje por devolución de los ADS, al igual que las atinentes al rol fiduciario que cumple el depositario para el cobro de dividendos (en efectivo o acciones) y posterior distribución entre los tenedores de ADRS, como también para la efectividad de los derechos de preferencia en la suscripción de nuevas emisiones de acciones y la representación y manera de votar en las asambleas de la compañía.

Respecto de los dos primeros grupos de bienes, se trata de una referencia que forma parte desde antiguo de todas las opiniones legales de la Procuración del Tesoro de la Nación, encontrándose su fundamento en razones de orden público, reconocidas como tales por las tendencias legislativas de la mayoría de los Estados, como por ejemplo la Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 y la State Immunity Act de 1978 del Reino Unido.

La exclusión expresa de las reservas, se ha incorporado a las excepciones ante la existencia de discrepancias interpretativas sobre el alcance de las disposiciones últimamente citadas a su respecto.

e) En la segunda parte de la cláusula, ahora en examen, está detallado el procedimiento de ejecución de sentencias conforme a la legislación argentina.

En lo que atañe a las sentencias obtenidas fuera de la Argentina que se pretendieran ejecutar en el país, se ha suprimido la salvedad contenida en el modelo propuesto por los Colocadores, que las excluía del sistema de ejecución de sentencias contra la Nación que emerge de la normativa argentina.

Por otra parte, se ha agregado a la mención de la ley 3952 y su interpretación jurisprudencial a través del fallo de la Corte Suprema recaído in re "Pietranera", la Ley de Consolidación de Deuda Pública 23.982, en atención a que, en su artículo 22, ha establecido un mecanismo detallado para el cumplimiento de las sentencias de condena patrimonial contra la Nación.

Por tal motivo, en el mismo certificado se hace expresa mención de ambas leyes, a continuación de las alusiones a los requisitos del exequátur, contenidos que se reiteran en todas aquellas cláusulas referidas a la validez del sometimiento de la Argentina a jurisdicción extranjera.

f) Por lo demás, en la última parte de la cláusula mencionada se ha antepuesto la locución "En mi opinión y a mi leal saber y entender" la aseveración de que no hay violación del orden público.

7. En la cláusula viii) referida a la inexistencia de controversias judiciales o administrativas que pudieran afectar la capacidad de la Argentina, en su calidad de Accionista Vendedor, para la formalización y cumplimiento de estos convenios, se ha utilizado al comienzo del texto la fórmula "a mi leal saber y entender y luego de haber efectuado las averiguaciones razonables", comprensiva de todos los supuestos contemplados en ella.

Este agregado tiene por finalidad explicitar los alcances de la certificación contenida en este punto que, en tanto vinculada a circunstancias fácticas cuya verificación excede la específica competencia jurídica del Procurador del Tesoro, no corresponde afirmar en términos más estrictos (conf. Dictamen N° 53/93, apartado VI, punto B, párrafo V, punto 3).

La otra novedad que presenta esta parte del proyecto a firmarse es el agregado de la frase "en forma directa y con alcance general", calificando a las sentencias que eventualmente pudieran afectar la legalidad, validez, ejecutabilidad y cumplimiento de los contratos.

En tal sentido, esta Procuración ha dicho antes de ahora que "Esta nueva redacción responde a dejar en claro que en nuestro sistema jurídico los decisorios de los tribunales alcanzan solamente al caso concreto que se juzga, en contraposición al sistema de precedentes jurisprudenciales obligatorios, característico del derecho anglosajón. Dicho de otra manera, aquellos fallos carecen de virtualidad para alterar la vigencia y efectos de las normas que analizan, ciñéndose a desechar su aplicación en el juicio particular sobre el que se expiden. Ciertamente, esta necesaria aclaración busca hacer conocer a los destinatarios de la opinión nuestro derecho —al tiempo que permite hacerlo valer frente a ellos—, a fin de resguardar la seguridad jurídica y observar la debida buena fe contractual" (Dictamen N° 53/93 ya citado).

8. En el aspecto de la opinión legal en el que se aseguran diversas exenciones impositivas —cláusula (ix) del párrafo IV— se ha introducido una remisión expresa a la previa opinión de la Dirección Nacional de Impuestos de la Secretaría de Ingresos Públicos, expedida en el caso con fecha 24 junio de 1993 (ver fs. 334/336), que fuera remitido por el Secretario de Ingresos Públicos (fs. 337), la que se adjunta como anexo a la opinión.

Esta modificación se debe a la exigencia de esta Procuración del Tesoro de apoyar su opinión en los dictámenes previos de los servicios jurídicos u organismos de la Administración con competencia en materias específicas, lo que asimismo importa el cumplimiento de nuestra legislación en materia de procedimientos administrativos (cfr. Dictamen N° 53/93).

9. En lo que atañe a la cláusula (xii), vinculada con la aplicación de la ley 24.156, se han transcrito las disposiciones legales y reglamentarias referidas al caso, sin agregar otras consideraciones a su respecto.

10. En cuanto a los contenidos de la cláusula (xiii), se ha certificado el carácter de los documentos anexos a la opinión, a partir de la previa manifestación efectuada por el Señor Subsecretario Legal del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, de fecha 6 de julio de 1993 (ver fs. 1382/1433).

11. Creo necesario poner de relieve que, en el Contrato de Colocación Argentino se requiere también, como condición previa, que los bancos reciban una opinión del Procurador del Tesoro de la Nación, en los términos del artículo 6º, inciso d) del Contrato de Colocación para los Estados Unidos de América (ver artículo 6º, inciso c) del Contrato de Colocación Argentino).

Parece evidente que, dada la diversidad de las previsiones contractuales en los contratos, así como la distinta situación jurídica de las partes en cada caso, resultaba imprescindible que esta opinión legal recogiera las modificaciones pertinentes.

En virtud de ello, y para homogeneizar un texto de opinión legal común a todos los contratos, se han adecuado las cláusulas (v), (vi) y (ix), del proyecto original.

a) En el primer caso, a la mención de la elección de la ley de Nueva York como ley aplicable, se agregó que: "El contrato de colocación argentino a efectos de su interpretación y ejecución estará regido por las leyes de la República Argentina", afirmación que se compadece con el artículo 11 del citado contrato.

b) En la cláusula (vi), en que se detalla la naturaleza civil y comercial de los actos que instrumentan los contratos, se ha testado la referencia al Contrato de Colocación Argentino, agregándose al final de dicha cláusula que: "El Contrato de Colocación Argentino se encuentra regido por las leyes y la jurisdicción de los Tribunales Argentinos, habiéndose válidamente pactado la competencia de los tribunales federales con sede en la ciudad de Buenos Aires", afirmación que concuerda con la última parte del artículo 11 a que aludiera en el párrafo precedente.

Es necesario poner de relieve que la circunstancia de no comprenderse al Contrato de Colocación Argentino en el texto inicial de la cláusula, no implica que no sean aplicables a la ejecución de las sentencias derivadas de este contrato las normas allí señaladas, en cuanto resulten pertinentes, ya que dichas disposiciones —que integran el orden jurídico vigente de nuestro país— regularán los casos específicos juntamente con los demás preceptos del derecho positivo nacional.

c) En la cláusula (ix), que se vincula con el tratamiento tributario del depósito al depositario y la venta y entrega por parte del accionista vendedor, se ha aclarado que la opinión se emite "...con las salvedades..." de que da cuenta el informe del Señor Subdirector de Impuestos, que se agrega como anexo a la opinión legal.

C. Parte Final. (Párrafo V).

En este párrafo se hace expresa referencia a la limitación de la opinión legal que habrá de emitirse, en tanto no se pronuncia sobre las "...materias y convenios gobernados por las leyes de los Estados Unidos de América ... o de otras leyes aplicables en otras jurisdicciones que no fuera la República Argentina".

XV. En el supuesto de compartirse las consideraciones expresadas a lo largo del presente dictamen, entiendo que correspondería suscribir la opinión legal requerida.

DICTAMEN N° 095

FERNANDO GARCIA PULLES - Subprocurador del Tesoro de la Nación.

ADMINISTRACION

PUBLICA

NACIONAL

**Normas para la elaboración,
redacción y diligenciamiento
de los proyectos de actos y
documentación administrativos**

SEPARATA N° 237

Decreto N° 333/85

\$ 5,-



MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

por el término de treinta días a herederos y acreedores de don JOSE CASSELLA. Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 8 de julio de 1993.
Patricia Barbieri, secretaria.

NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 27/7 al 29/7/93.

e. 26/10 N° 28.048 v. 28/10/93

JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL

N° 13

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 13, Secretaría 25, en autos: "INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA c/ESTIMULO S.A. s/Incidente de liquidación", hace saber por 5 días que S.S. ha fijado plazo hasta el 30 de noviembre de 1993 para que los acreedores de ESTIMULO SOCIEDAD ANONIMA DE AHORRO Y PRESTAMO PARA FINES DETERMINADOS que no hubieran concurrido por ante el Sr. liquidador Dr. Horacio Leandro Guido, (con domicilio en la calle 25 de Mayo 267, 5° Piso, Of. 512), soliciten verificación mediante pedido, con las formalidades del art. 33 L.C. por ante el citado liquidador. El liquidador deberá con fecha 22 de diciembre de 1993 presentar una ampliación del informe previsto por el art. 35 de la L.C., el que deberá incluir su opinión fundada sobre: 1) Los nuevos pedidos de verificación; 2) Pedidos extemporáneos que obran en su poder emergentes de la primera verificación; 3) Los pedidos deducidos a través de incidentes de verificación o de impugnación obrantes en autos; 4) Los juicios de conocimiento contra la liquidada, seguidos ante el Juzgado.

Buenos Aires, 18 de octubre de 1993.

Cecilia María Vacca, secretaria.
e. 26/10 N° 2728 v. 1/11/93

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL

N° 5

El Sr. Juez Federal Dr. Martín Irurzun, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de Capital Federal, Secretaria N° 9 del Dr. Diego Leif Guardia, en la causa

N° 6108, caratulada "RODRIGUEZ LIZANA VICTOR MANUEL s/Inf. Ley 23.737", cita y emplaza a VICTOR MANUEL RODRIGUEZ LIZANA Matrícula Consular 7.847.183/2, quien se encuentra imputado por el delito previsto y penado en el artículo 14, primer párrafo de la ley 23.737, para que se presente a este Tribunal dentro del quinto día de esta publicación, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.

Secretaría N° 9, 29 de setiembre de 1993.

Diego Leif Guardia, secretario.
e. 21/10 N° 2693 v. 27/10/93

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL LOMAS DE ZAMORA

N° 1

El Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, sito en Alem 180 de Lomas de Zamora, cita y emplaza a MARIA ROSA CODEGA, argentina, casada, nacida el 24/2/58, de apellido paterno SORRENTINO, titular del D.N.I. 12.176.353, para que comparezca dentro del quinto día de la última publicación del presente, a efectos de prestar la declaración indagatoria ordenada en la causa N° 866, haciéndose saber que en caso de no hacerlo dentro del término fijado se declarará su rebeldía y se dispondrá su captura.

Lomas de Zamora, 12 de octubre de 1993.

Jorge L. D'Amore, secretario.
e. 22/10 N° 2706 v. 28/10/93

JUZGADO FEDERAL PROVINCIA DE RIO NEGRO

La Dra. María del Carmen García, Juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia,

con asiento en la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro, Secretaría Penal interinamente a cargo de la Dra. María Carolina Pandolfi, cita y emplaza a JARA, NESTOR OMAR, D.N.I. N° 13.047.748, argentino, domiciliado en calle Gregorio Alvarez - Dúplex 683, de la ciudad de Neuquén Capital, a estar a derecho en estos autos caratulados: "JARA, NESTOR OMAR - CAMAROTA, MIGUEL ENRIQUE s/Pta. Inf. Art. 292 C.P.", Expte. N° 250 - Folio 297 - año 1993. Dentro de los diez (10) días de la última publicación del presente, a fin de prestar declaración indagatoria, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía en caso de incomparecencia injustificada. Publíquese por cinco (5) días. Fdo. Dra. María del Carmen García - Juez Federal. Secretaría, 8 de octubre de 1993.

María Carolina Pandolfi, secretaria federal.
e. 25/10 N° 2718 v. 29/10/93

JUZGADO FEDERAL SAN JUAN

N° 2

Por disposición del Sr. Juez Federal de San Juan, Dr. Leopoldo Rago Gallo, y por el presente Edicto que se publicará durante cinco días en el Boletín Oficial de la Nación, se hace saber a Ud., Sr. JAVIER RODOLFO BERAGUA D.N.I. N° 22.465.814 que deberá presentarse a este Juzgado Federal de San Juan, en el término de Tres días contables a partir de la publicación, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo será declarado rebelde, por así haberse ordenado en los Autos N° 7569/88, caratulados: "HOY c/CORTEZ, ALBERTO; BERAGUA JAVIER Y PEREZ JOSE - Por: Robo-Damniif.: Dirección de Deportes de la Universidad Nacional de San Juan".

San Juan, 28 de setiembre de 1993.

Carlos Héctor Tacca, secretario.
e. 26/10 N° 2734 v. 1/11/93

JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCION

Se cita y emplaza por el término de días que en cada caso se detalla a partir de la publicación de la presente para que comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo serán declarados rebeldes en las causas que se les sigue por infracción a los artículos del Código Penal en los Juzgados en lo Criminal de Instrucción que seguidamente se discriminan a las siguientes personas:

Juz. N°	Sec. N°	Secretario	Fecha del Edicto	Citación o Emplazamiento	Días de Citación	Causa
8	125	Manuel J. Gorostiaga	05-10-93	CARLOS ROBERTO VAZQUEZ	1	QUIEBRA FRAUDULENTA
28	122	Esteban C. Rodríguez Eggers	29-09-93	HORACIO PLACIDO	10	DELITO DE INSOLVENCIA FRAUDULENTA

e. 25/10 N° 85 v. 27/10/93

JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCION

Se cita y emplaza por el término de días que en cada caso se detalla a partir de la publicación de la presente para que comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo serán declarados rebeldes en las causas que se les sigue por infracción a los artículos del Código Penal en los Juzgados en lo Criminal de Instrucción que seguidamente se discriminan a las siguientes personas:

Fecha N°	Sec. N°	Días Secretario	Causa del Edicto	Citación o Emplazamiento	de Citación	Causa
1	105	Julio Luis Panelo	30-09-93	PEDRO QUELLEMEM	3	QUIEBRA
1	105	Julio Luis Panelo	30-09-93	CLOTILDE LAURA CASTELLO	3	DEFRAUDACION PRENDARIA
2	107	Juan Carlos Lodeiro	29-09-93	DANIEL AGUERO	5	ROBO
2	107	Juan Carlos Lodeiro	29-09-93	JUAN RAMON VERON	5	ROBO
2	107	Juan Carlos Lodeiro	22-09-93	JORGE RAIMONDO	5	DELITO DE ROBO
3	110	Marcelo Javier Goldberg	29-09-93	GARCIA DEL MORAL, MANUEL	3	N° 56.417 AV. DEFRAUDACION
3	110	Marcelo Javier Goldberg	27-09-93	ALEJANDRO MARCELO ERLITZ	3	N° 56.133 FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO
3	110	Marcelo Javier Goldberg	27-09-93	CLAUDIO ALEJANDRO FUKS	3	N° 56.133 FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO
3	110	Marcelo Javier Goldberg	05-10-93	MARTINS, DARIO	3	N° 56.374 MALVERSACION
3	110	Marcelo Javier Goldberg	06-10-93	MIGUEL ANGEL VERON	3	ROBO CON ARMA
3	110	Marcelo Javier Goldberg	12-10-93	BUERA, JUAN DANIEL	3	N° 56.334 TENTATIVA DE ROBO
4	113	Fernando Bosch	12-10-93	DANIEL ROMERO	3	DELITO DE DEFRAUDACION
8	125	Manuel J. Gorostiaga	08-10-93	CARLOS PERCINI	3	ROBO
11	133	Marcela Laura García	05-10-93	GUSTAVO MAYON	3 0	DELITO DE ESTAFA
17	153	Silvia S. López Crespo	15-09-93	JOSE o JUAN ALBERTINO GONZALEZ	3	DEFRAUDACION
17	153	Silvia S. López Crespo	05-10-93	JORGE SERRANO	3	ESTAFA

ha decretado la prohibición de hacer pagos a la fallida, los que serán ineficaces. El presente se libra por mandato de SS en los autos caratulados "CHLORIDE S.A. s/Quiebra", en trámite por ante este Juzgado y Secretaría.

Buenos Aires, 14 de octubre de 1993.
Stella Maris Timpanelli, secretaria.
e. 22/10 N° 2702 v. 28/10/93

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23, Secretaría N° 46, sito en Talcahuano 550 piso 8, comunica por cinco días la quiebra de TEXXAR S.A. s/Quiebra, habiéndose designado Sindico al Contador Juan Carlos Sosa, con domicilio en la calle Sarmiento 1674 piso 2 "F", Capital Federal, donde los acreedores deberán presentar los pedidos de verificación y los títulos justificativos de los mismos hasta el día 10 de diciembre de 1993. No correspondiendo tomar Junta de Acreedores, fíjase la fecha de presentación del informe previsto por el art. 35 de la ley 19.551 el 8 de febrero de 1994 y para el previsto por el art. 40 de la ley citada el 23 de febrero de 1994. Al solo efecto de posibilitar las eventuales revisiones —LC: art. 38 párrafo segundo— fíjase como fecha presuntiva de Junta el día 16 de marzo de 1994. Intímase a la fallida para que dentro de las 24 horas cumpla en lo pertinente con los recaudos del art. 93 de la ley 19.551 y entregue los libros y demás papeles de comercio que obren en su poder al síndico. Se prohíben los pagos y entrega de bienes a la fallida, los que serán ineficaces y se intima a quienes tengan bienes y documentos de la quebrada para que los pongan a disposición de este Tribunal o del síndico en cinco días. Intímase a la fallida y a sus administradores a que constituyan domicilio en el lugar de tramitación del juicio bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los Estrados del Juzgado. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 6 de octubre de 1993.
Horacio F. Robledo, secretario.
e. 22/10 N° 2703 v. 28/10/93

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23, Secretaría N° 46, sito en Talcahuano 550, piso 8° de la Capital Federal hace saber por cinco (5) días que en los autos caratulados "PANIFICADORA B.C. S.A. s/Quiebra", se ha decretado su quiebra con fecha 24 de setiembre de 1993. Ha sido designado síndico el Contador Eduardo Luis Arbilla, con domicilio en la calle Carlos Pellegrini 739, piso 7°, a quien los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y los títulos justificativos de sus créditos hasta el día 27 de diciembre de 1993. El Síndico presentará los informes previstos en los arts. 35 y 40 de la ley 19.551 los días 18 de febrero de 1994 y 11 de marzo de 1994, respectivamente. Se designa el día 4 de abril de 1994 para la celebración de la junta de acreedores que discutirá y votará el acuerdo resolutorio, en caso de ser propuesto, la que se realizará en la sala de audiencias del Juzgado, con los acreedores que concurren. Se hace saber que el acto dará comienzo a las 11 horas, por lo cual deberán concurrir para justificar su personería a partir de las 9 horas. Se intima a la deudora para que cumpla los siguientes recaudos: a) Dé cumplimiento a los recaudos del art. 93 de la L.C. y entregue al síndico toda la documentación relacionada con su contabilidad y los libros de comercio. b) Abstención de salir del país sin previa autorización del Tribunal. c) Prohibir los pagos y entrega de bienes a la fallida, so pena de considerarlos ineficaces e intimar a quienes tengan bienes y documentación de la misma para que los pongan a disposición del síndico en cinco días. d) Intimar a la fallida y a sus administradores a que constituyan domicilio en el lugar de tramitación del juicio, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del Juzgado.

Buenos Aires, 15 de octubre de 1993.
Horacio F. Robledo, secretario.
e. 25/10 N° 2714 v. 29/10/93

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23, Sec. N° 46, sito en Talcahuano 550, 8° piso, Capital Federal, comunica por cinco días en la quiebra de PIAMEX SOCIEDAD ANONIMA, en trámite ante el Juzgado y Secretaría indicados, que con fecha 14 de octubre de 1994 se ha dispuesto modificar las fechas previstas por el art. 96 inc. 1° de la ley 19.551. En consecuencia se comunica a los señores acreedores que hasta el 8 de febrero de 1994 podrán presentar al síndico Eduardo Luis Arbilla, en su nuevo domicilio de Carlos Pellegrini 739, piso 7°, Capital Federal, sus pedidos de verificación y los títulos justificativos de sus créditos; haciéndoseles saber que la junta de acreedores en caso de proponer la fallida acuerdo resolutorio se celebrará con los acreedores que concurren el

22 de abril de 1994, a las 11.00 horas (debiendo comparecer el síndico y los acreedores dos horas antes) en la sala de audiencias del juzgado, Talcahuano 550, 8° piso, Capital Federal. El presente se libra por mandato de SS en los autos caratulados "PIAMEX S.A. s/Quiebra" Expte. 21.574.

Buenos Aires, 15 de octubre de 1993.
Horacio F. Robledo, secretario.
e. 25/10 N° 2715 v. 29/10/93

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23, a cargo del Dr. Fernando Ferreira, Secretaría N° 46 a cargo del Dr. Horacio F. Robledo, sito en la calle Talcahuano N° 550 piso 8° de la Capital Federal, hace saber por cinco días que en fecha 7 de setiembre de 1993 se dispuso la apertura del Concurso Preventivo de "SHOOTING S.A.". Se comunica que se ha designado Sindico al Dr. Carlos Alberto Rivas, con domicilio en Uruguay N° 239, piso 8° "C" de Capital Federal, fíjándose plazo hasta el 10 de diciembre de 1993 para que los acreedores presenten al Síndico los títulos justificativos de sus créditos, debiendo presentarse los informes previstos en los arts. 35 y 40 de la ley 19.551, los días 2 de febrero de 1994 y 24 de febrero de 1994 respectivamente. La Junta de Acreedores se celebrará el 18 de marzo de 1994, a las 11 horas, en la Sala de Audiencias del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24 sito en Talcahuano 550, piso 8°, con los acreedores que asistieren, los que deberán concurrir con dos horas de antelación para justificar su personería. El presente edicto deberá publicarse durante cinco días en el "Boletín Oficial" y en el diario "La Prensa".

Buenos Aires, octubre 15 de 1993.
Horacio F. Robledo, secretario.
e. 26/10 N° 35.021 v. 1/11/93

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23, Secretaría N° 46, sito en Talcahuano 550 piso 8, comunica por cinco días la quiebra de AZUFRE PATAGONICO S.A. s/Quiebra, habiéndose designado Sindico al Contador Juan Carlos Sosa, con domicilio en la calle Sarmiento 1674 piso 2 "F", Capital Federal, donde los acreedores deberán presentar los pedidos de verificación y los títulos justificativos de los mismos hasta el día 19 de noviembre de 1993. No correspondiendo tomar Junta de Acreedores, fíjase la fecha de presentación del informe previsto por el art. 35 de la ley 19.551 el 14 de diciembre de 1993 y para el previsto por el art. 40 de la ley citada el 2 de febrero de 1994. Al solo efecto de posibilitar las eventuales revisiones —LC: art. 38, párrafo segundo— fíjase como fecha presuntiva de Junta el día 24 de febrero de 1994. Intímase a la fallida para que dentro de las 24 horas cumpla en lo pertinente con los recaudos del art. 93 de la ley 19.551 y entregue los libros y demás papeles de comercio que obren en su poder al síndico. Se prohíben los pagos y entrega de bienes a la fallida los que serán ineficaces y se intima a quienes tengan bienes y documentos de la quebrada para que los pongan a disposición de este Tribunal o del síndico en cinco días. Intímase a la fallida y a sus administradores a que constituyan domicilio en el lugar de tramitación del juicio bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los Estrados del Juzgado. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 14 de octubre de 1993.
Horacio F. Robledo, secretario.
e. 26/10 N° 2731 v. 1/11/93

N° 25

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 25 a cargo de la Dra. Silvia Irene Rey, Secretaría N° 49, a cargo del Dr. Miguel Angel Carchio, comunica por cinco días la quiebra de "PLANTA METALURGICA OCAMPO S.A.", en donde ha sido designado como síndico Moisés Abel Freilich, con domicilio constituido en la calle Viamonte 1446, 6° Piso de Capital Federal, a quien los acreedores, posteriores a la presentación en concurso solicitarán la verificación de sus créditos hasta el día 20 de diciembre de 1993. El Síndico presentará el informe que determine el art. 35 de la LC, con la previsión del art. 75 "in fine", el día 8 de febrero de 1994 y el informe del art. 40 de la LC el día 1° de marzo de 1994. Asimismo se comunica que fíjese como fecha de Junta de Acreedores el día 22 de marzo de 1994, al sólo efecto de lo previsto por el art. 38 de la LC. Se intima a la fallida y a cuantos tenga bienes y documentos de la misma a ponerlos a disposición del Síndico, prohibiéndose en su caso hacer pagos o entregas de bienes, so pena de considerarlos ineficaces. Intímase también a la fallida para que cumpla con lo normado por el art. 93 de la LC. Intímase a los

integrantes del órgano de administración de la quebrada para que constituyan domicilio dentro del radio del Tribunal dentro de las 48 Hs., bajo apercibimiento de tenerlos por constituidos en los estrados del Juzgado (LC 95.7).

Buenos Aires, 14 de octubre de 1993.
Miguel A. Carchio, secretario.
e. 22/10 N° 2704 v. 28/10/93

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 25, a cargo de la Dra. Silvia Irene Rey, Secretaría N° 49, a cargo del Dr. Miguel Angel Carchio, comunica por cinco días la quiebra de "BAFFA ELSA JOSEFINA", en donde ha sido designado como síndico al Contador Héctor A. Zapatero, con domicilio en la calle Colpayo 55, 5° piso, Of. 18 de esta Capital Federal, a quien los acreedores solicitarán verificación de sus créditos hasta el día 15 de diciembre de 1993. El Síndico presentará el informe que determina el art. 35 de la LC el día 3 de febrero de 1994 y el informe que determina el art. 40 de la LC el día 24 de febrero de 1994. Asimismo se comunica que fíjese como fecha de Junta de Acreedores el día 17 de marzo de 1994. Se intima a la fallida y a cuantos tengan bienes y documentos de la misma a ponerlos a disposición del Síndico, prohibiéndose en su caso hacer pagos o entregas de bienes so pena de considerarlos ineficaces. Intímase a la fallida para que cumpla con lo normado por el art. 93 de la LC., dentro de 48 hs. bajo apercibimiento de tenerlos por constituidos en los estrados del Juzgado.

Buenos Aires, 18 de octubre de 1993.
Miguel A. Carchio, secretario.
e. 25/10 N° 2716 v. 29/10/93

N° 26

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Comercial N° 26, Secretaría N° 52, comunica

por cinco días la quiebra de CITABAR S.R.L. Síndico, Norberto BONESI, con domicilio constituido en la calle Juan B. Justo 5096, Piso 1° A, a donde los acreedores deberán concurrir para presentar los títulos justificativos de sus créditos hasta el día 10 de diciembre de 1993. En caso de presentarse concordato resolutorio, la Junta de Acreedores se celebrará en la Sala de Audiencias del Tribunal el día 14 de marzo de 1994, a las 11,30 hs., con la previsión de celebrarse con los acreedores que concurren. Se intima a la fallida y a cuantos tengan bienes o documentos de la misma a ponerlos a disposición del síndico, prohibiéndose hacer pagos o entregas de bienes so pena de considerarlos ineficaces. Intímase también a la fallida para que cumpla con lo dispuesto por el art. 93 de la Ley 19.551, y a que dentro del término de 48 hs., constituya domicilio dentro del radio del Tribunal, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los Estrados del mismo.

Buenos Aires, 7 de octubre de 1993.
Julia Villanueva, secretaria.
e. 22/10 N° 2705 v. 28/10/93

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Comercial N° 26 a cargo del Dr. Enrique Manuel Butty, Secretaría N° 51 a cargo del Dr. Damián Burgio sito en Callao 635, piso 1° de Capital Federal; cita y emplaza a MARTA HAYDEE BREA para que en el término de cinco días comparezca a estar a Derecho en autos: "BREA MARTA HAYDEE s/Pedido de quiebra" por CIABURRI CARLOS GUSTAVO", bajo apercibimiento de designarse al Defensor Oficial para que la represente. Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 1 de octubre de 1993.
Damián Burgio, secretario.
e. 26/10 N° 64.337 v. 27/10/93

SEGUNDA EDICION

* SEPARATA N° 247

CODIGO PROCESAL PENAL

\$ 16,25



MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

Juz. Nº	Sec. Nº	Secretario	Fecha del Edicto	Causante	Recibo Nº
107		Eduardo A. Maggiora	28-09-93	FANNY WEINSTEIN DE BURSZTYN	34.806
108		Daniel Rubén Tachella	12-10-93	JOSE SUN	34.799
109	UNICA	José Luis Bourmissen	22-09-93	MARIA INES LIMBANIA LIPORACE MURGA DE SAÑUDO	34.725
109		José Luis Bourmissen	08-10-93	ELEODORO LAMBERTT	34.787

e. 25/10 Nº 190 v. 27/10/93

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL
Publicación extractada (Acordada Nº 41/74 C.S.J.N.)

Se cita por tres días a partir de la primera publicación a herederos y acreedores de los causantes que más abajo se nombran para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme con el Art. 699, inciso 2º del Código Procesal en lo Civil y Comercial.

Publicación: Comienza: 26/10/93 - Vence: 28/10/93

3.3 SUCESIONES

ANTERIORES

Juz. Nº	Sec. Nº	Secretario	Fecha del Edicto	Causante	Recibo Nº
2		Gustavo Enrique Toledo	12-10-93	AGUSTINA JOSEFA NIEVES VILA	34.844
2		Gustavo Enrique Toledo	14-10-93	VICCHIO BLAS	34.876
5	UNICA	Eduardo Antonio Collazo	12-10-93	ANGEL GATTO	34.903
5	9	Eduardo Antonio Collazo	30-09-93	ENRIQUE LEOPOLDO FAYE	34.843
6	UNICA	Juan Luis Arto	18-10-92	HECTOR ANTONIO REYES	34.858
11	UNICA	María Isabel Benavente	15-10-93	MARIA ESTHER ESCUDERO Y NICOLAS ALEJANDRO CIANCIA	34.923
13	UNICA	Gustavo Pedro Torrent	22-09-93	OTTO MENDEL	34.917
13		Gustavo Pedro Torrent	13-10-93	MARIA CAMILA ANGELA DEVOTO	34.950
14	UNICA	Eduardo Daniel Gottardi	15-10-93	NESTOR MAZZINI	34.845
14	UNICA	Eduardo Daniel Gottardi	28-09-93	LUCIA BARRILE	64.070
15		Graciela R. Melgar	14-10-93	JESUS RODRIGUEZ O RODRIGUEZ VAZQUEZ	34.885
16		Luis Pedro Fasanelli	15-10-93	ANA CRISCUOLO DE BERRETTA	34.832
19	37	Alejandro G. Petrucci	14-10-93	MARIA ROSA SIMONATO	34.834
19	37	Alejandro G. Petrucci	13-10-93	AURORA BARRIONUEVO	34.896
20		Celia Angeles Pérez	15-10-93	MARTINEZ ELVIRA	34.899
21	41	Luis Guillermo Köhler	08-10-93	AMANDA CANEPA	64.187
22	UNICA	Fernando L. Spano	14-10-93	RAMON CONSTANTINO REGATEIRO Y AIDA ANGELA GUIDO	34.913
24	48	José María Perrone	01-10-93	MARIA ANTONIA CRISTALDO	34.864
27	UNICA	Roberto Parrilli	05-10-93	GARCIA ZULEMA JUANA	34.868
28	UNICA	Mónica C. Fernández	23-09-93	DOMINGO JUAN ALFREDO RIZZO	34.878
28	UNICA	Mónica C. Fernández	15-10-93	SUSANA BEATRIZ SANTAYA	34.930
28	55	Mónica C. Fernández	08-10-93	VICENTE HUGO CERFOGLIO	34.890
29	UNICA	Vilma G. Grcco	20-09-93	CATALDO DE ROSA Y ROSA COGLIANDRO O GOGLIANDRO	34.831
31		Ricardo Adolfo Leyba	07-10-93	MARIA CARLOTA HERMIDA	34.837
31		Ricardo Adolfo Leyba	01-10-93	EMMA LUZ SEGAL	34.871
33		Clementina Ma. del Valle Montoya	05-10-93	FRANCISCO EPIFANIO BRANCE	34.824
34		José María Pérez	29-07-93	MODESTO GAZCON	34.863
34		José María Pérez		LUDIVINA GONZALEZ	34.901
37	UNICA	Gustavo Daniele	30-08-93	VICTOR ERNESTO PASSINI	34.947
37	67	Gustavo Daniele	12-10-93	SIRA ALVAREZ DE BELLIZZI	34.859
39		Horacio Oscar Sterin Carmona	14-10-93	BERDIÑAS MANUEL JOSE	34.839
41	UNICA	José Antonio Charlin	15-10-93	ABRAHAM PFEFFERMAN	34.948
42	UNICA	Julio Carlos Speroni	06-10-93	JOSE RAUL SANZ	34.827
44	UNICA	Fernando O. Galán	15-10-93	OLGA GIOCONDA COLOMBO	34.829
44	74	Fernando O. Galán	08-10-93	AQUILES HECTOR VASSALLO	34.862
47	UNICA	Silvia R. Rey	12-10-93	ROBERTO ANGEL CHINETTI	34.836
47		Silvia R. Rey	13-10-93	CORA ELISA NIETO	34.851
48	UNICA	Ana María Himschoot	08-10-93	ELSA ELECTRA AYELLI	34.900
49	79	Virginia Simari de Landó	12-10-93	SANTOS ERNESTO LEIBAR	34.916
49	79	Virginia Simari de Landó	14-10-93	BRUNA MARIA ERNESTINA GOMEZ CADRET	34.931
50	UNICA	Juan C. Insúa	07-10-93	MARIA GUGLIELMINO	34.830
50	UNICA	Juan C. Insúa	04-10-93	MARIO BRILLANTINO	64.068
50		Juan C. Insúa	15-10-93	GIORGIO O JORGE MANFREDINI	34.822
54	UNICA	Paula I. Stanislavsky	13-10-93	MIGUEL ANGEL SANCINETO Y PINELBA SICILIA	34.881
54		Paula I. Stanislavsky	05-10-93	LEOPOLDO GALIBERT	34.856
57	UNICA	Carlos Roberto Garibaldi	15-10-93	RUIZ MARTIN MAXIMO	34.852
59	UNICA	Juan Pablo Rodríguez	07-10-93	MANUEL ANTONIO DA SILVA Y JOSE DA SILVA ALCARIA	34.857
59	UNICA	Juan Pablo Rodríguez	05-10-93	ANTONIO PEREZ SOTO	34.879
59	UNICA	Adolfo E. Granillo Ocampo	13-10-93	ROSA SCIGLIANO	34.905
59	UNICA	Adolfo E. Granillo Ocampo	15-10-93	CATALINA BARTENC Y NICOLAS SCHMIDTUTZ	34.924
60	UNICA	Enrique C. Virto	08-10-93	AMINE MERHI	34.819
61		Eduardo José Gorris	12-10-93	RAFAEL SCHIARITI	34.838
61		Eduardo José Gorris	27-09-93	BLAS ANGEL BAGLIVO	64.181
65	UNICA	Rubén D. Orlandi	18-10-93	CLARA GEFFNER	34.835
65		Rubén D. Orlandi	14-10-93	ELVIRA BURSESE	64.160
67	UNICA	Julio C. A. Ramos Varde	12-10-93	BELA JUDKOWICZ Y ZYSIE KOHN	34.853
68	UNICA	Marcelo G. Calabrese	14-10-93	DOLORES MARTINEZ	64.180
68	98	Marcelo G. Calabrese	07-10-93	PALMIRA WORCUL	64.046
71		Susana A. Nobile	30-09-93	JOSE SALVADOR CEVASCO	34.805
72		Daniel H. Russo	13-10-93	CARLOS EMILIO JUNCO	34.892
72	UNICA	Daniel H. Russo	21-09-93	NICOLINI JUAN ARGENTINO Y MILANO FILOMENA	34.897
72	UNICA	Daniel H. Russo	06-10-93	PAULO CECILIO ELIA GIUSSANI	64.030
72	UNICA	Daniel H. Russo	28-09-93	JOSEFINA TERESA GIRAUDO	64.043
75	105	Dolores Miguens	18-10-93	HECTOR ALEJANDRO BENITO	64.191
75	105	Dolores Miguens	18-10-93	NELIDA ELSA GONZALEZ	64.193
78	UNICA	Isabel E. Núñez	13-10-93	AMOR TERESA LOPEZ DE PONS	34.822
79	UNICA	Ana M. Kruls de Molina Portela	05-10-93	ISAAC COURRIEL	34.850
79	UNICA	Ana M. Kruls de Molina Portela	07-10-93	MARGARITA PEPE DE TERENCE	34.865
79	UNICA	Ana M. Kruls de Molina Portela	14-10-93	CECILIA YENDERROZOS GARCIA	34.880
89	UNICA	Damián Ignacio Font	15-10-93	HORACIO JUAN MANTERO	34.820
89		Damián Ignacio Font	15-10-93	BENJAMIN LEDERER	34.907
91		Alberto Ugarte	21-09-93	JOSE FRANCISCO FAMA	34.855
91		Alberto Ugarte	15-10-93	EPIFANIO BONOMO	34.894
91	6	Alberto Ugarte	18-10-93	SPOSITO SERAFIN	34.893
93	UNICA	Marta Susana Gastaldi	30-09-93	ANGELA RORIO	34.823
93		Marta Susana Gastaldi	14-10-93	JOSE FAUSTINO RODRIGUEZ	34.875
95		Gustavo Caramelo	13-10-93	ANTONIO VICENTE MAHIQUES	34.826
97	UNICA	Guillermo C. Mercado	13-10-93	ENRIQUE MOYA	34.943
97		Guillermo C. Mercado	05-10-93	ALFREDO HERACLIO ABADES	34.906
98	UNICA	José Luis González	11-10-93	MARTIN CARLOS EDUARDO BIEDMA	64.190
99	UNICA	Marta N. Coccia	12-10-93	CASAS EDUARDO ALBERTO	34.935

acarreo de bienes corre por cuenta de los compradores. Todos los bienes serán exhibidos los días 29 de octubre al 4 de noviembre de 1993 ambas fechas inclusive, de 10 a 17 horas. Se admitirán ofertas bajo sobre, en los términos del art. 104/6 del Reglamento de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (acordada 13/12/89) hasta 3 días antes del que se fije para el remate en el Tribunal o domicilio de los martilleros quienes el día siguiente antes del horario fijado para la apertura los presentarán en el Juzgado. La Actuaría en tal caso, procederá a la apertura de los sobres dos días antes del fijado para la subasta, a las 11 horas en presencia de los martilleros y de la Sindicatura, quienes no podrán dejar de concurrir a ese efecto. Se seleccionarán las mejores ofertas que servirán de nueva base y a igualdad de ofertas prevalecerá la presentada con anterioridad. Los compradores deberán constituir domicilio en Capital Federal. Se deja constancia que los compradores han tomado conocimiento del estado físico y jurídico de los bienes. Para más datos y constancias en autos o a los martilleros, Lavalle 1459, PB Of. 15, Te. 46-8732 y 953-7796, de 9 a 16 hs.

Buenos Aires, 19 de octubre de 1993.
 María del Milagro Paz Posse, secretaria.
 e. 26/10 N° 64.352 v. 1/11/93

N° 22

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22, Secretaría N° 44, sito en Talcahuano N° 550, piso 7º, Cap. Fed., comunica por dos días en los autos caratulados "BURCO S.A.I.C. s/Quiebra s/Incidente de Venta de Establecimiento", expte. 18.452, que el martillero Alfonso Castellanos Esquiú rematará el día 3 de noviembre de 1993 a las 14.30 hs. en el salón de ventas sito en Talcahuano N° 479 de Capital Federal, los siguientes bienes: Rectificadora sin centros CSP 100, incompleta, Base: \$ 1.500; rectificadora sin centros Cincinnati, Base: \$ 4.000; torno paralelo Acmer, Base: \$ 1.500; torno paralelo Turri T-220, Base: \$ 4.000; torno

paralelo Turri T-160, Base: \$ 3.000; torno paralelo Batisti TP-200, Base: \$ 3.500; torno paralelo Turri T-190, Base: \$ 4.000; torno paralelo Turri T-190, Base: \$ 4.000; torno paralelo Voest, Base: \$ 2.000; torno paralelo Fraver, Base: \$ 800; fresadora universal Wecheco-Zayer N° 4, Base: \$ 6.000; fresadora universal Venier FU-2, Base: \$ 3.000; fresadora universal Helios N° 1, Base: \$ 1.500; prensa hidráulica Omnia, Base: \$ 800; máquina univ. p/ensayo materiales Cific UF 15, Base: \$ 3.000; proyector óptico Praziz PO 300/400, Base: \$ 5.000; limadora CMA, Base: \$ 4.000; limadora "Z", Base: \$ 2.500; máquina de electroerosión Ona B/A BAT, Base: \$ 8.000; prensa hidráulica Sack & Kieselbach 160 LO, Base: \$ 3.000; rectificadora sin identificación, Base: \$ 3.000; rectificadora univ. Bollati-RUH 1000, Base: \$ 4.000; rectificadora bruñidora Sunnen, Base: \$ 3.500; rectificadora plana Marmatic RTN 60, Base: \$ 3.500. Exhibición: 28, 29 y 30 de octubre de 1993 de 12 a 17 hs. en Carlos Pellegrini N° 1050, Luján, Pcia. de Buenos Aires. Condiciones de venta: con base, al contado y mejor postor. Seña 30 %, Comisión 10 %, todo en dinero efectivo en el acto del remate. El saldo de precio se abonará indefectiblemente el día 4 de noviembre de 1993 de 9 a 13 hs. en Talcahuano 479, Cap. Fed., I.V.A. incluido en el precio, el comprador que no acredite su condición de responsable inscripto en el referido impuesto, abonará la sobretasa correspondiente. Día y hora de entrega de los bienes se asignará a c/comprador al momento de integración del saldo de precio. Desarme y traslado de los bienes a cargo de los adquirentes. El comprador deberá constituir domicilio en la Capital Federal. Informes: Te.: 812-1093 y 811-3109.

Buenos Aires, 20 de octubre de 1993.
 Marcos F. Roca, secretario.
 e. 26/10 N° 2737 v. 27/10/93

N° 23

Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Comercial N° 23 de Capital Federal, sito en Talcahuano 550 Svo. piso, Secretaría N° 45 comunica

por tres (3) días en autos caratulados: "CIRCULO DE INVERSORES S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS c/MASTELLONE FERNANDO JULIO y Otros s/Ejecución Prendaria" Expte. N° 21.302 que el martillero Eduardo Abel Espósito subastará el día 4 de noviembre de 1993, a las 9.10 hs. en Talcahuano 479 Capital Federal el siguiente bien: Un vehículo marca Fiat tipo furgón modelo Fiorino N año 1992, motor marca Fiat 159 A2 038 7943213 chasis marca Fiat 147 BBO 07222257 peso imponible 1.350 kg uso particular dominio B-2.381.647 el que conforme acta de secuestro de fs. 29 se halla con faro trasero roto, chapa y pintura con deterioros, en parte lateral derecho, detalles de pintura varios, con criquet, llave sacarruedas y rueda de auxilio deteriorada, con cédula de identificación del automotor en el estado en que se encuentra en exhibición en la calle Echeverría 1218 de Capital Federal de lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 18 hs. Base \$ 7.000. Al contado y al mejor postor. Comisión 10 %. El comprador deberá constituir domicilio en Capital Federal. Se aceptarán ofertas bajo sobre hasta las 10 hs. del día anterior al de la subasta conforme art. 104.6 del Reglamento del Fuero serán abiertos por la actuaría en presencia del martillero e interesados a las 12.30 hs. del mismo día. Hay constancia de deudas en autos (fs. 41/42) de Rentas por \$ 106,30, \$ 249,31.

Buenos Aires, 13 de octubre de 1993.
 Stella Maris Timpanelli, secretaria.
 e. 26/10 N° 64.341 v. 28/10/93

N° 24

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24 del Dr. Jorge Del Valle Puppo, Secretaría N° 48 a mi cargo, comunica por 5 días en autos AUTOMOTORES GOMEZ TELLO S.A. s/Quiebra - Exp. N° 15.740, que el martillero Augusto Bence Pieres rematará el día 5 de noviembre de 1993, a las 12 horas, en Tte. Gral. Juan D. Perón 1233 de Capital Federal (Corpo-

ración de Rematadores), el inmueble sito en la prolongación de la Avenida Almirante Brown (Mariano Unzué), de la Ciudad y Partido de Bolívar, Provincia de Buenos Aires, sobre acceso principal y a unos 200 mts. de la Sociedad Rural; identificado como Lote 6c, Manzana 78. Nomenclatura Catastral: Circ. II; Secc. A; Ch 78a; Parcela 6c. La Parcela 6c surge de la mensura y unificación de los Lotes 6, 7, 8 s/Plano 11-43-85 c/Superficie de 3.000 m². Lo edificado se compone de un importante galpón de aproximadamente 22 x 35 mts., de material, techo parabólico de chapa, piso hormigonado, fosa y doble acceso por frente y contrafrente c/portones corredizos; buena iluminación natural y eléctrica, en buen estado de conservación. A continuación otro galpón de aproximadamente 10 x 12 mts., con techo de chapa, cabriadas de madera, 1 fosa y portón de 2 hojas; en regular estado de conservación. Base \$ 26.250. La Venta se efectúa desocupado, al contado y "ad corpus" - Seña 25 % - Sellado de Ley - Comisión 3 %, cargo comprador en el acto del remate y dinero efectivo y/o cheque de Capital Federal -Certificado- a la orden del martillero. El Saldo de Precio deberá ser depositado a la orden del Juzgado y Cuenta de autos dentro de los cinco días de la aprobación judicial del remate, lo que se tendrá por notificado por ministerio de Ley. Deudas Municipales según constancias de fs. 2092/2093, con más lo que resulte por todo concepto a la fecha de cancelación. El comprador deberá acreditar su identidad y constituir domicilio en Capital Federal. Ofertas bajo sobre: Serán recibidas en Secretaría hasta 2 días hábiles judiciales anteriores a la fecha de subasta, las que serán abiertas el día anterior a la misma, a las 11,30 horas (conforme art. 570 C. Proc. y 104.6 del Reglamento del Fuero, consc. con el art. 206 de la Ley de Conc.). Exhibición: Libremente desde publicación de Edictos. Más Informes: al martillero Tel. 40-3860 - Lugar de Remate y Expediente en sede del Juzgado, Talcahuano 550, 8º p., Capital Federal.

Buenos Aires, 14 de octubre de 1993.
 Roberto Aquiles Díaz, secretario.
 e. 26/10 N° 2736 v. 1/11/93

SEPARATA

247

CODIGO PROCESAL PENAL - 2da. Edición



**MINISTERIO DE JUSTICIA
 DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL**

ADMINISTRACION

PUBLICA

NACIONAL

Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación administrativos

SEPARATA N° 237

Decreto N° 333/85

\$ 5,-



**MINISTERIO DE JUSTICIA
 DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL**